



El centro financiero de Dhaka, en Bangladesh. A pesar del crecimiento económico del país, cerca de 40 millones de personas siguen viviendo por debajo del umbral nacional de pobreza en Bangladesh. Foto: GMB Akrash/Oxfam

ÍNDICE DE COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD (CRI) 2018

Un ranking mundial de Gobiernos basado en lo que están haciendo para reducir la brecha entre ricos y pobres

En 2015, los Jefes de Estado de 193 Gobiernos se comprometieron a reducir la desigualdad para cumplir con el objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si no se reduce la desigualdad, no será posible alcanzar el ODS 1 de eliminar la pobreza. En 2017, Oxfam y Development Finance International (DFI) elaboraron el primer índice para medir el grado de compromiso de los Gobiernos con la reducción de la brecha entre ricos y pobres. El índice se basa en una nueva base de datos que abarca ahora a 157 países, con indicadores que miden la acción de los Gobiernos en cuanto al gasto social, la política tributaria y los derechos laborales, tres áreas consideradas críticas para reducir la brecha entre ricos y pobres.

En esta segunda edición del índice se muestra cómo algunos países tales como Corea del Sur, Namibia y Uruguay están dando grandes pasos para reducir la desigualdad, mientras países como la India o Nigeria reciben una puntuación muy baja. Entre los países ricos, también destaca, por ejemplo, Estados Unidos, como uno de los peor clasificados, lo que demuestra su falta de compromiso para reducir la desigualdad.

El informe recomienda a todos los países que elaboren y pongan en marcha una serie de planes nacionales contra la desigualdad de cara a cumplir con el ODS 10 sobre reducción de la desigualdad. Estos planes deberían garantizar el acceso a una educación y sanidad universales gratuitas y públicas, así como el establecimiento de un piso mínimo de protección social universal. La financiación de dichos planes debería apoyarse en un modelo fiscal más progresivo, que recaude lo suficiente y ponga coto a la evasión y elusión fiscal así como a los privilegios fiscales injustos. Por último, todos los países deben respetar los derechos laborales, garantizar el derecho a la sindicalización, y la igualdad de género en el mercado laboral así como elevar el salario mínimo hasta llegar a un nivel que permita llevar una vida digna.

La página web del Índice CRI, www.inequalityindex.com el informe completo y la nota metodológica pueden consultarse en www.oxfam.org o <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications>

ÍNDICE

Resumen	3
La crisis de desigualdad, la lucha contra la pobreza y el papel de los Gobiernos	3
El índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (CRI)	4
Mejoras en la metodología en esta nueva edición del índice	7
¿Cuáles son las principales conclusiones del Índice CRI?	8
¿Qué países han recibido una mayor puntuación?	8
¿Qué países han mejorado su rendimiento en el último año?	10
¿Qué países han recibido una peor puntuación?	12
¿Qué países han empeorado su rendimiento en el último año?	13
¿Qué tendencias generales emergen del nuevo Índice CRI?	14
Limitaciones del Índice CRI	18
Áreas de mejora y a desarrollar en el futuro	20
Recomendaciones	22
1 Reducir la desigualdad mediante el gasto social	24
2 Reducir la desigualdad mediante políticas tributarias	35
3 El papel del trabajo y los salarios en la reducción de la desigualdad	47
4 Conclusión	55
Anexo 1: resultados del índice de compromiso con la reducción de la desigualdad	56
Resultados por regiones	61
Notas	68

RESUMEN

LA CRISIS DE DESIGUALDAD, LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS

En muchos países del mundo, tanto ricos como pobres, la brecha entre las personas más ricas y el resto de la sociedad ha aumentado rápidamente durante los últimos 30 años.¹ No hacer frente a esta crisis creciente pone en peligro el progreso social y económico y la lucha contra la pobreza. Las investigaciones de Oxfam ponen de manifiesto que, en lo que va de siglo, la mitad más pobre de la población mundial tan solo ha recibido el 1% del aumento de la riqueza global, mientras que el 1% más rico de la población se ha hecho con el 50% de ese aumento.²

La desigualdad nos perjudica a todos. Reduce el crecimiento económico y exagera los problemas de salud y de otra índole.³ Las consecuencias para las personas más pobres del mundo son especialmente graves. Los datos disponibles son claros: no será posible erradicar la pobreza extrema mientras los Gobiernos no aborden la desigualdad y reviertan esta tendencia. De no hacerlo, el Banco Mundial estima que en 2030 cerca de 500 millones de personas seguirán viviendo en condiciones de pobreza extrema.⁴

El aumento de la desigualdad económica socava la lucha contra la desigualdad de género y supone una amenaza para los derechos de las mujeres. El fortalecimiento económico de las mujeres tiene la capacidad potencial de mejorar la vida de muchas de ellas y de contribuir al crecimiento económico. Pero si no se abordan de manera urgente las causas de la desigualdad económica extrema, la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico generado por las mujeres irá a parar a manos de quienes ya están en lo más alto de la escala de riqueza. La desigualdad económica también acentúa otras formas de desigualdad, como las basadas en la casta o la etnia.

Oxfam y Development Finance International (DFI) opinan que la crisis de desigualdad no es inevitable y que los Gobiernos tienen el poder necesario para hacerle frente. La desigualdad es una elección política, tal y como evidencian los resultados de nuestra investigación. Gobiernos de todo el mundo están tomando medidas contundentes para luchar contra la desigualdad. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, es un buen ejemplo, al haber elevado la carga fiscal sobre las rentas más altas, incrementado el gasto público en favor de los sectores más pobres de la población y propiciado un aumento drástico del salario mínimo. Otros también están dando pasos importantes. Etiopía es el sexto país del mundo que más invierte en educación como proporción de su PIB, Chile ha elevado el tipo nominal en el impuesto de sociedades e Indonesia ha incrementado el salario mínimo y el gasto público en sanidad.

Estos avances suponen un vergonzoso contraste con la falta de voluntad de algunos Gobiernos que no están actuando para apoyar al conjunto de su ciudadanía. Nigeria sigue ocupando la última posición de nuestro ranking al no impulsar políticas en defensa de los más pobres del país, a pesar de que el presidente haya afirmado públicamente sentir una gran preocupación por la desigualdad. Hungría ha optado por recortar en un 50% el tipo nominal del impuesto de sociedades, a la vez que las vulneraciones de los derechos laborales en el país han aumentado. En Brasil, el gasto social se ha congelado para los próximos 20 años. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha recortado drásticamente el tipo nominal del impuesto de sociedades, en lo que ha constituido una de las mayores concesiones de la historia al 1% más rico del país.⁵

EL ÍNDICE DE COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD (CRI)

El presente informe presenta la segunda edición del Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (Índice CRI), que clasifica esta vez a 157 países de todo el mundo en función de dicho compromiso. El anexo 1 presenta el ranking general, así como los regionales. El Índice CRI se fundamenta en una base de datos exhaustiva, y que incluye datos de países en los que DFI cuenta tanto con una base empírica como con una red de contactos de investigación sólidas, o en los que Oxfam dispone de programas o afiliados, y que permite realizar una valoración única sobre en qué medida los Gobiernos están haciendo frente a la creciente brecha entre ricos y pobres según su actuación en tres ámbitos políticos fundamentales. La metodología con la que elaboramos el índice ha cambiado considerablemente este año respecto a la versión de 2017, ya que hemos incluido nuevos indicadores sobre mecanismos de elusión fiscal y violencia de género.

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha revisado el Índice CRI en 2017 y en 2018. Tras la revisión de 2017, hemos realizado varias modificaciones conformes a las mejores prácticas en la construcción de indicadores compuestos. Asimismo, hay prevista una serie de ajustes para la edición del índice de 2019, resultado de la revisión de la presente edición. Ambas ediciones del índice se han auditado estadísticamente. En 2018, el Centro Común de Investigación ha llegado a la conclusión de que el CRI es estadísticamente fiable, afirmando que “este índice está marcando el camino para la elaboración de un marco de seguimiento que ayude a identificar las mejores prácticas, así como las deficiencias en las políticas de los Gobiernos a la hora de reducir la brecha entre ricos y pobres”

La auditoría de 2017 está disponible aquí:

<https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb-cri-index-statistical-audit-170717-en.pdf>;

La auditoría de 2018 está disponible aquí: [http://policy-](http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018-a-global-ranking-of-government-620553)

[practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018-a-global-ranking-of-government-620553](http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018-a-global-ranking-of-government-620553)

El Índice CRI mide los esfuerzos de los Gobiernos en tres áreas de políticas públicas, o “pilares”, a saber: el gasto social, el sistema tributario y los derechos laborales. Se han seleccionado estas áreas porque está ampliamente demostrado⁶ que las medidas aplicadas por los Gobiernos al respecto han desempeñado un papel esencial en la reducción de la brecha entre ricos y pobres.

1. Se ha demostrado que el **gasto social** en servicios públicos, tales como educación, salud y protección social, tiene un gran impacto en la reducción de la desigualdad, especialmente para las mujeres y niñas más pobres, ya que son quienes más dependen de dichos servicios. Por ejemplo, un estudio reciente en 13 países en desarrollo que habían reducido sus niveles de desigualdad identificó que el 69% de esta reducción era atribuible a los servicios públicos.⁷ El gasto social casi siempre es progresivo, porque contribuye a reducir los niveles de desigualdad. A pesar de ello, en muchos países, el gasto social podría ser mucho más progresivo y favorecer más a las personas pobres. El gasto social puede desempeñar un papel fundamental a la hora de reducir la cantidad de trabajo no remunerado que a menudo asumen muchas mujeres (lo cual es una de las principales causas de desigualdad de género), mediante un mejor reparto de los cuidados de menores y ancianos, los relativos a la salud y otras tareas domésticas.⁸
2. **Contar con un sistema tributario progresivo**, en el que las grandes empresas y las grandes fortunas tributan más para contribuir a la redistribución de los recursos en la sociedad y financiar así los servicios públicos, es una herramienta clave de los Gobiernos que estén comprometidos con la reducción de la desigualdad. El potencial que presenta el sistema tributario en la reducción de la desigualdad se ha demostrado en los países de la OCDE⁹ y en los países en desarrollo,¹⁰ tal y como destacó el Fondo Monetario Internacional

(FMI) en su edición del Monitor Fiscal de octubre de 2017.¹¹ No obstante, el sistema tributario puede ser progresivo o regresivo, según el diseño por el que opte cada Gobierno. Asimismo, se ha instalado ampliamente la visión de que la fiscalidad es neutral desde el punto de vista del género, por lo que se ha prestado escasa atención a cómo la recaudación fiscal ha ahondado la brecha de género. Por otra parte, las prácticas fiscales nocivas que facilitan la evasión y elusión fiscal también socavan la capacidad de los Gobiernos de aplicar una fiscalidad progresiva.

3. Existen amplias evidencias que demuestran que **salarios más elevados** para los trabajadores y **derechos laborales sólidos, especialmente para las mujeres**, son claves en la reducción de la desigualdad.¹² Los Gobiernos pueden tener un impacto directo en estos aspectos, fijando salarios mínimos y elevando el piso salarial, además de protegiendo los derechos de sindicalización. Estudios del FMI y de otros organismos demuestran que el reciente descenso de la sindicalización está relacionado con el aumento de la desigualdad, ya que los trabajadores pierden poder de negociación y una mayor parte del valor de la producción se destina a los beneficios y a los dueños del capital.¹³ Por otra parte, las mujeres están sobrerrepresentadas en los empleos menos remunerados, con escasa protección y condiciones precarias.¹⁴ Los Gobiernos pueden contribuir a revertir esta situación con la aprobación y aplicación de leyes contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como de leyes que promuevan la igualdad salarial y en los permisos de maternidad y paternidad.

Las acciones en cada una de estas tres áreas se refuerzan mutuamente. Una fiscalidad progresiva es algo bueno en sí mismo, pero si además con lo recaudado se financia un gasto progresivo, el impacto aumenta considerablemente, y el Índice CRI refleja este efecto en los resultados de cada país.

Es evidente que, para abordar la desigualdad, son necesarias también otro tipo de medidas políticas. No obstante, tal y como indica el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, es razonable pensar que las tres variables críticas (gasto social, fiscalidad y empleo) pueden utilizarse como proxy del enfoque general de un Gobierno en la lucha contra la desigualdad.

¿Por qué hacer un seguimiento de las políticas gubernamentales en vez de simplemente observar los niveles de desigualdad?

DFI y Oxfam han decidido medir el compromiso de los Gobiernos con la reducción de la desigualdad por tres motivos.

En primer lugar, porque los Gobiernos de todo el mundo firmaron en 2015 un compromiso para reducir la desigualdad y erradicar la pobreza en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objetivo 10 se centra de manera específica en la reducción de la desigualdad. El Índice CRI contribuirá a la revisión de dicho objetivo, prevista para 2019, al facilitar que la ciudadanía exija cuentas a los Gobiernos sobre el progreso realizado (o la falta del mismo).

En segundo lugar, en DFI y Oxfam estamos convencidos de que las diferencias en los niveles de desigualdad que se dan entre distintos contextos nacionales son la prueba de que la desigualdad no es inevitable; por el contrario, es el resultado de decisiones políticas adoptadas por los Gobiernos. Por supuesto, es necesario considerar los retos propios de cada contexto, así como las ventajas coyunturales en algunos casos. Además, todos los países están expuestos a presiones globales que no pueden controlar en su totalidad (por ejemplo, la presión para disminuir los salarios y los tipos impositivos), y esto es especialmente cierto en los países en desarrollo. El sistema internacional de paraísos fiscales, que socava el margen de maniobra de los Gobiernos, es un ejemplo claro.

No obstante, a pesar de estas cuestiones globales, Oxfam cree que los Gobiernos tienen suficiente poder como para reducir la brecha entre las personas más ricas y las más pobres en

cada uno de sus países. Si no fuera así, no habría mucha diferencia entre las políticas de los distintos países. Por lo tanto, es fundamental medir y hacer un seguimiento de los compromisos políticos de los Gobiernos con la reducción de la desigualdad.

La razón final por la que hemos desarrollado el Índice CRI es que los sistemas disponibles para medir ingresos y riqueza (por ejemplo, las encuestas financieras de hogares a nivel nacional) solo recaban datos de manera ocasional y presentan errores significativos ya que, entre otras cosas, tienden a infravalorar los ingresos y la riqueza de las personas más ricas.¹⁵ Esto significa que los datos disponibles pueden ser deficientes, especialmente para los países más pobres, por lo que son una medida de escasa calidad para exigir a los Gobiernos que rindan cuentas. Es necesario mejorar de manera urgente y significativa la cobertura y la frecuencia de los datos nacionales sobre los niveles de desigualdad.

La edición del año pasado ya analizaba en cierto grado la relación entre los resultados del índice y el nivel de desigualdad en un determinado país.¹⁶ Lo que reflejaban los resultados es que esta relación no era automática, sino mucho más compleja. Ciertos países, como Namibia, presentan un elevado nivel de desigualdad, pero han asumido un gran compromiso para reducirla. Otros, como Nigeria, también presentan una elevada desigualdad y no dan muestras de estar haciendo nada al respecto. Países como Dinamarca tienen unos niveles de desigualdad relativamente bajos gracias a las políticas que han aplicado en el pasado, pero al haberse alejado de ellas progresivamente en la actualidad, la desigualdad ha vuelto a aumentar. Esta situación se da en la mayoría de los países de renta alta, a pesar de que presentan bajos niveles de desigualdad, si bien hay países como Finlandia que siguen comprometidos a mantener la desigualdad a raya.

MEJORAS EN LA METODOLOGÍA EN ESTA NUEVA EDICIÓN DEL ÍNDICE

<p>GASTO EN SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>1 GASTO SOCIAL COMO % DEL GASTO TOTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasto en educación Gasto en salud Gasto en protección social 	<p>PROGRESIVIDAD DE LAS POLÍTICAS FISCALES</p> <p>1 PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA FISCAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipos mínimos y máximos en el impuesto sobre la renta + umbrales Tipos en el impuesto de sociedades Tipos generales IVA, exenciones y umbrales 	<p>DERECHOS LABORALES Y SALARIOS MÍNIMOS</p> <p>1 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y SINDICALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Esfuerzos de los Gobiernos para proteger a los trabajadores/as sobre el papel y en la práctica
<p>2 INCIDENCIA DEL GASTO EN LA DESIGUALDAD (COEFICIENTE DE GINI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasto en educación como % del PIB coeficiente de incidencia en la desigualdad Gasto en sanidad como % del PIB coeficiente de incidencia en la desigualdad Gasto en protección social como % del PIB coeficiente de incidencia en la desigualdad 	<p>2 INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS EN LA DESIGUALDAD (COEFICIENTE DE GINI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Recaudación por IVA como % del PIB Recaudación por el impuesto de sociedades como % del PIB Recaudación por el impuesto sobre la renta como % del PIB Recaudación por impuestos especiales como % del PIB Recaudación por aranceles aduaneros como % del PIB 	<p>2 DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulación sobre mismo salario por mismo trabajo Regulación contra la discriminación por cuestiones de género Leyes contra la violación Leyes contra el acoso sexual Permiso de maternidad y paternidad
	<p>3 RECAUDACIÓN FISCAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Productividad fiscal: Ingresos por IVA, impuesto sobre la renta e impuesto de sociedades comparado con los tipos impositivos, el PIB o el consumo privado Esfuerzo fiscal comparado con el potencial de recaudación <p>4 PRÁCTICAS FISCALES NOCIVAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Prácticas fiscales nocivas Normas para evitar la elusión fiscal Pruebas de impacto negativo 	<p>3 SALARIO MÍNIMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Salario mínimo en divisa local PIB per cápita

La primera edición del Índice CRI se publicó en julio de 2017, y cubría un total de 152 países. Se publicó deliberadamente como versión "beta", para poder recoger comentarios de expertos y expertas de todo el mundo. Las valiosas aportaciones que hemos recibido nos han llevado a incorporar cambios significativos en la edición de este año del índice. La base de la metodología sigue siendo la misma, y se centra en los pilares del gasto social, la fiscalidad y el empleo. No obstante, se han realizado modificaciones e incorporaciones específicas.¹⁷

El cambio más significativo es la incorporación de tres nuevos subindicadores: uno en el pilar de la fiscalidad y dos en el de empleo. Una de las principales observaciones que los expertos y expertas compartieron sobre el índice publicado el año pasado fue que no tenía en cuenta hasta qué punto las prácticas fiscales de determinados países permitían que las empresas (nacionales o de países terceros) evadieran o eludieran impuestos. Como resultado, países como Luxemburgo o los Países Bajos recibieron una puntuación más alta de la que merecían. El papel tan agresivo que han desempeñado los Países Bajos como paraíso fiscal para grandes empresas ha suscitado un acalorado debate en el país, y Oxfam y sus organizaciones socias están presionando al Gobierno para que tome medidas para acabar con esta situación.¹⁸ En la edición de este año, hemos incorporado un nuevo indicador sobre prácticas fiscales nocivas que incorpore esta dimensión.

En cuanto al pilar de empleo, muchas personas indicaron que la violencia y el acoso a las mujeres en el trabajo socava la base de los derechos laborales de las mujeres.¹⁹ En ocasiones, las mujeres trabajadoras pueden sufrir mayores niveles de violencia doméstica como represalia por su mayor autonomía económica.²⁰ En la India, por ejemplo, el 6% de las mujeres entre 15 y 49 años han experimentado violencia sexual conyugal en algún momento a lo largo de su vida (el 5% a lo largo de los últimos 12 meses).²¹ Esto nos ha llevado a elaborar nuevos indicadores sobre la calidad de la legislación contra el acoso y las agresiones sexuales.²²

Además de los nuevos indicadores, hemos trabajado concienzudamente para mejorar las fuentes de los datos y garantizar que utilizamos las fuentes más actualizadas. Hemos incluido datos más actualizados en todos los pilares analizados. En el Índice CRI de 2018, todos los datos sobre fiscalidad y empleo son de 2017, mientras que en la edición de 2017 los datos eran de 2015. Los datos sobre educación y sanidad han pasado de ser de 2014 a 2016 en su gran mayoría, y en el caso de la protección social de 2012 a 2015. Los datos consultados para la elaboración del presente índice tienen fecha anterior al fin de 2017, por lo que aquellos cambios en políticas que hayan ocurrido en 2018 no están incluidos, si bien hacemos referencia a algunos de los más destacados en el texto del informe. A su vez, hemos incluido cinco países más en el índice, hasta alcanzar un total de 157.²³

Debido a los cambios en la metodología y a la mayor calidad de los datos recabados para la edición de este año, la variación en la puntuación de un país respecto de la edición del año pasado no supone un reflejo preciso de su rendimiento. Las fluctuaciones en el ranking de los países son el resultado de una serie de cambios en sus políticas, así como de cambios en la metodología de la investigación.

Por lo tanto, no hemos centrado nuestro análisis en una mera comparación de las puntuaciones de los países entre ambas ediciones del índice. Por el contrario, es posible comparar cambios específicos en políticas entre la anterior y la presente edición del índice, como un incremento del gasto en sanidad, una disminución de los tipos máximos del impuesto sobre la renta o la prolongación del permiso de maternidad, cambios que hemos destacado. A su vez, analizamos algunas de las tendencias generales más destacadas que han emergido desde el primer Índice CRI.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ÍNDICE CRI?

Todos los países podrían hacer más, incluso los que encabezan el índice

Lo primero y más importante es que ningún país lo está haciendo especialmente bien, e incluso aquellos que mejor puntúan tienen margen de mejora. Incluso Dinamarca, el país que encabeza el ranking, no recibe la máxima puntuación posible y tiene margen de mejora. Asimismo, 112 de los 157 países incluidos en el índice hacen menos de la mitad de lo que los países mejor clasificados están haciendo.

¿QUÉ PAÍSES HAN RECIBIDO UNA MAYOR PUNTUACIÓN?

El anexo 1 del informe completo presenta el ranking general del Índice CRI, así como los ranking regionales. La Tabla 1 presenta los diez primeros clasificados en el índice de este año.

Tabla 1: Los diez países que mejor puntúan de un total de 157 países²⁴

	RANKING GENERAL	GASTO EN SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROGRESIVIDAD DE LAS POLÍTICAS FISCALES	DERECHOS LABORALES Y SALARIOS MÍNIMOS
Dinamarca	1	5	2	2
Alemania	2	8	6	4
Finlandia	3	2	8	11
Austria	4	6	9	7
Noruega	5	14	10	1
Bélgica	6	7	5	21
Suecia	7	19	12	5
Francia	8	3	22	16
Islandia	9	24	26	3
Luxemburgo	10	20	34	8

Cuadro 1: El mejor y el peor

Dinamarca encabeza el Índice CRI de este año, al ser el país con la mayor puntuación. El país escandinavo cuenta con algunas de las políticas fiscales más progresivas del mundo. También tiene algunas de las mejores políticas de empleo, y su protección de las mujeres en el espacio laboral es la mejor del mundo.

Nigeria se encuentra en la poco envidiable última posición del índice por segundo año consecutivo. Su gasto social (en salud, educación y protección social) es vergonzosamente bajo, lo que se traduce en unos resultados lamentables para sus habitantes. Uno de cada diez niños en Nigeria muere antes de cumplir 5 años,²⁵ y más de 10 millones de menores no están escolarizados,²⁶ de los cuales el 60% son niñas.²⁷ El Índice CRI refleja que, el año pasado, se produjo un repunte del número de vulneraciones de los derechos laborales en el país. El salario mínimo lleva congelado desde 2011 y el gasto social se ha estancado. El Índice CRI muestra que Nigeria todavía tiene un gran margen para aumentar su recaudación fiscal,²⁸ por lo que también recibe una puntuación muy baja en este ámbito.

No obstante, se acaban de producir mejoras en este sentido en 2018, que se verán reflejadas en el Índice CRI del año que viene. El FMI ha reiterado claramente la importancia de abordar la desigualdad en el país, haciendo referencia a la puntuación recibida por Nigeria en el Índice CRI.²⁹ A su vez, a pesar de que el presidente del país haya declarado que es importante luchar contra la desigualdad, ya que crea inestabilidad política,³⁰ apenas se han tomado medidas.

La mayoría de los países en la parte alta del índice son países de la OCDE, encabezados este año por **Dinamarca**. En este sentido, los resultados son similares a los del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Estos países, que cuentan con una mayor riqueza nacional, tienen un margen mucho más amplio para recaudar más impuestos y de manera más progresiva porque hay más ciudadanos y más empresas con ingresos elevados que pueden pagarlos. Asimismo, tienen más margen para gastar lo recaudado en servicios públicos y protección social. Estos países a la cabeza del ranking también hacen frente a la desigualdad aumentando el salario mínimo y apoyando los derechos laborales y de las mujeres. Por último, el sector informal tiene menos peso que en los países en desarrollo, a pesar de lo cual están aumentando las distintas formas de empleo precario.

Para la mayor parte de los países ricos, el grueso de las políticas que mide el índice fue introducido en un período diferente de la historia, cuando intervenir en estos ámbitos era la manera ampliamente aceptada de hacer lo correcto y de revertir beneficios en términos de progreso social y económico. No obstante, en la actualidad, en muchos países ricos se ha erosionado el apoyo político a estas medidas, y los Gobiernos en el mundo industrializado están revertiendo la progresividad del gasto, los impuestos y los derechos laborales (ver Cuadro 5).

La mayor parte de los países fuera de la OCDE que puntúan alto en el Índice CRI están en América Latina, la región más desigual del mundo (ver Cuadro 4). **Argentina** se encuentra a la cabeza, seguido por **Costa Rica** y **Brasil**. Durante la última década, en todos estos países, los Gobiernos han realizado esfuerzos notables por reducir la desigualdad y la pobreza mediante un gasto redistributivo y (en algunos) elevando el salario mínimo. En Argentina, por ejemplo, el coeficiente de Gini cayó del 0,51 en 2003 al 0,41 en 2013³¹ y el porcentaje de pobreza cayó del 23% al 5,5%, con un 40% de reducción en la desigualdad y un 90% de reducción en la pobreza atribuibles a las políticas redistributivas.³² Lamentablemente, los nuevos Gobiernos en Brasil y Argentina ya han empezado a tomar medidas para revertir muchas de estas políticas. En Brasil, el gasto social ha quedado congelado para los próximos 20 años.³³ En Argentina, la austeridad aplicada por el Gobierno³⁴ ha conllevado grandes recortes en el presupuesto destinado a la protección social (ver Cuadro 3).³⁵

Los países de renta media-baja también tienen la capacidad de mostrar un alto compromiso con la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, el Índice CRI de 2018 muestra que **Lesotho** destina el 14% de su presupuesto nacional a educación y el 12% a sanidad, y cuenta con un sistema tributario progresivo y políticas progresivas sobre sindicalización y derechos laborales de las mujeres. Por su parte, el gasto social en **Georgia** es sólido y progresivo, su recaudación fiscal también es progresiva y ha aumentado considerablemente las partidas presupuestarias destinadas a la educación. Incluso países de renta baja también pueden mostrar un fuerte compromiso con la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, desde la edición de 2017 del Índice CRI, **Etiopía** ha aumentado su presupuesto educativo del 22% al 23%. Este elevado volumen de inversión ha permitido elevar considerablemente el nivel de escolarización de niños y niñas.³⁶

Namibia es uno de los países de África que mejor puntúan en el índice, y ocupa la quinta posición entre los países de renta media. Es un buen ejemplo de la diferencia entre la clasificación en el Índice CRI y otras mediciones tradicionales de desigualdad. A pesar de ser uno de los países más desiguales del mundo, los resultados del Índice CRI reflejan el compromiso del Gobierno de Namibia con la reducción de la desigualdad, sobre todo mediante elevados niveles de gasto social (con la educación secundaria gratuita para todos los estudiantes) y algunas de las políticas tributarias más progresivas. El economista Joseph Stiglitz, entre otros, ha destacado este compromiso y, si bien la desigualdad en el país sigue siendo muy elevada, lleva descendiendo desde 1993 y ya no es el país más desigual del mundo.³⁷ Desde la edición de 2017 del Índice CRI, el Gobierno ha incrementado el gasto destinado a la protección social, y ha elevado considerablemente el salario mínimo. A su vez, un nuevo estudio ha revelado que sus políticas tributarias y de gasto están logrando reducir la desigualdad en gran medida.³⁸

¿QUÉ PAÍSES HAN MEJORADO SU RENDIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO?

Si bien debido a las mejoras en la metodología no podemos hacer una comparación general entre los índices de este año y del anterior, hemos realizado un análisis detallado de aquellos países que han hecho grandes cambios en sus políticas, tanto positivos como negativos. El país que ha realizado cambios más positivos en los tres pilares es **Corea del Sur**.

Cuadro 2: Un compromiso real para reducir la desigualdad en Corea del Sur

Moon Jae-in, al asumir su cargo como presidente de Corea del Sur a principios de 2017, se comprometió a abordar la desigualdad en el país. Los niveles de desigualdad en Corea del Sur han crecido a un ritmo elevado. En las últimas dos décadas, los ingresos de las personas más pobres se habían estancado, mientras que los del 10% más rico de la población habían aumentado a un ritmo del 6% anual, representando a día de hoy el 45% del ingreso nacional.³⁹ Corea del Sur ocupa la penúltima posición de los países de la OCDE en el Índice CRI.

Para tratar de reducir la desigualdad y lograr un crecimiento inclusivo, el presidente Moon ha tomado medidas en los tres pilares analizados en el índice. En su primer año en el cargo, ha materializado su compromiso de aumentar considerablemente el salario mínimo, incrementándolo en un 16,4%.⁴⁰

Asimismo, ha aumentado el tipo del impuesto de sociedades a las empresas más rentables y de mayor tamaño en Corea del Sur, pasando del 22% al 25%, medida con la que se espera recaudar 2300 millones de dólares anuales adicionales.⁴¹ También ha elevado la carga fiscal sobre las rentas más altas, medida que respaldaba el 86% de la población surcoreana.⁴²

Por último, el presidente ha activado un amplio programa de inversión social, medida destacable ya que Corea del Sur es uno de los países de la OCDE que menos invierte en este ámbito.⁴³ Entre las medidas de protección social que se han incrementado, destaca una partida para garantizar la universalidad en las necesidades infantiles.⁴⁴

En su discurso del 21 de septiembre de 2017 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Moon declaró: "Mi Gobierno está adoptando medidas enérgicas para cambiar el paradigma económico con el fin de abordar las desigualdades económicas que lastran el crecimiento y la cohesión social... Es lo que llamamos una 'economía centrada en las personas'".⁴⁵

Además, la edición de 2018 del Índice CRI también muestra que un elevado número de países ha tomado medidas sólidas en una o varias de las áreas cubiertas con respecto al análisis del año anterior, lo que demuestra que es posible lograr avances. **Indonesia** destaca por las medidas que ha adoptado para aumentar considerablemente el salario mínimo y equiparlo en todo el país, así como para aumentar su gasto en sanidad, con el objetivo de avanzar hacia una cobertura sanitaria universal. Pero aún tiene un reto importante por delante y necesita incrementar durante los próximos años el gasto público en sanidad (que hoy se sitúa en un 7% del PIB) para que alcance a toda la población. **Mongolia** y **Guyana** han aumentado sensiblemente la presión fiscal sobre las rentas más altas, y **Malí** y **Colombia** han incrementado el tipo nominal en el impuesto de sociedades. Colombia también ha aumentado su gasto en sanidad, si bien la privatización de la sanidad y los escándalos de corrupción están socavando el beneficio que pueda aportar dicho aumento.⁴⁶ El país latinoamericano también ha ampliado la baja por maternidad, al igual que **Mozambique**, que la ha ampliado en un 50%.

Islandia ha dado un gran impulso a su gasto en protección social, y ha aprobado una ley que obliga a las empresas a obtener un certificado oficial que demuestre la igualdad salarial entre hombres y mujeres.⁴⁷ **Guinea** y **Liberia** han aumentado considerablemente su gasto en educación, si bien en el caso de Liberia es probable que esta medida esté vinculada a la polémica privatización de la educación primaria.⁴⁸

Julius Maada, el nuevo presidente de **Sierra Leona**, ha dado una serie de pasos muy prometedores para abordar la desigualdad en el país, como el aumento del salario mínimo y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y las nuevas medidas para mejorar la recaudación de impuestos, entre las que se incluye la eliminación de incentivos fiscales improductivos. La reciente decisión de hacer que la educación primaria sea gratuita resulta especialmente alentadora.⁴⁹

¿QUÉ PAÍSES HAN RECIBIDO UNA PEOR PUNTUACIÓN?

Tabla 2: Ranking CRI de los diez países que peor puntúan de un total de 157 países

	RANKING GENERAL	GASTO EN SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROGRESIVIDAD DE LAS POLÍTICAS FISCALES	DERECHOS LABORALES Y SALARIOS MÍNIMOS
Bangladesh	148	146	103	148
Singapur	149	91	157	71
Laos	150	153	44	146
Madagascar	151	135	142	143
Bhután	152	81	153	147
Sierra Leona	153	143	132	150
Chad	154	145	138	154
Haití	155	133	145	156
Uzbekistán	156	42	156	132
Nigeria	157	157	104	133

El grado en que los países ricos de la OCDE utilizan las políticas públicas para abordar la desigualdad es muy heterogéneo. Por ejemplo, entre las grandes economías, los Estados Unidos y España se encuentran mucho peor clasificados en el Índice CRI entre los países ricos.

Como destaca este informe, muchos países de renta media tienen margen para hacer mucho más de lo que hacen en la lucha contra la desigualdad. Por ejemplo, Indonesia es hoy en día más rica, en términos de renta per cápita, que Estados Unidos en 1935 cuando este aprobó la Ley de Seguridad Social.⁵⁰ Aun así, Indonesia tiene uno de los niveles de recaudación fiscal más bajos del mundo (tan solo el 11% del PIB), y la nueva ministra de economía se ha marcado como su prioridad el aumento de la recaudación⁵¹. Recientemente, un informe del Center for Global Development ha demostrado que la mayoría de los países en desarrollo podría obtener suficientes recursos propios para eliminar la pobreza extrema a través de la recaudación de impuestos.⁵² Esto coincide con los resultados de las investigaciones de Oxfam sobre desigualdad en los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Turquía y Sudáfrica.⁵³

La **India** también sale mal parada, en el puesto 147 de un total de 157 países según su compromiso para reducir la desigualdad; un resultado muy preocupante dado que la población del país asciende a 1300 millones de personas, muchas de ellas en la extrema pobreza. Oxfam ha estimado que, si la India redujera la desigualdad en una tercera parte, más de 170 millones de personas saldrían de la pobreza.⁵⁴ El gasto del Gobierno en salud, educación y protección social es lamentablemente bajo, y a menudo subvenciona al sector privado.⁵⁵ Las organizaciones de la sociedad civil solicitan de manera recurrente un aumento del gasto público.⁵⁶ En la teoría, la estructura fiscal es razonablemente progresiva, pero en la práctica, buena parte de los impuestos progresivos no se recaudan, como el impuesto a las rentas más altas. En cuestión de derechos laborales y respeto a las mujeres en el espacio laboral, la India también puntúa bajo, consecuencia de que la mayor parte de la fuerza laboral trabaja en el sector agrario y en sectores informales, que carecen de organización sindical y donde no se aplican los derechos de las mujeres.

Cuadro 3: Un giro equivocado en América Latina⁵⁷

En los últimos 15 años, la región latinoamericana ha resistido la tendencia general y ha logrado reducir la desigualdad. Aunque hay algunas excepciones, los Gobiernos de Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador, entre otros, adoptaron fuertes medidas para hacer frente a la desigualdad, sobre todo mediante un aumento de la recaudación pública y del gasto social y, en algunos países, elevando el salario mínimo. Esto se refleja en el Índice CRI, en el que un buen número de países latinoamericanos puntúa relativamente alto.

No obstante, el frenazo en la economía mundial desde 2010 y la caída de los precios de las materias primas (de las que dependen muchos países de la región) han provocado un aumento en los niveles de pobreza desde 2015. En algunos países, esto ha coincidido con un giro de varios Gobiernos hacia el centro-derecha, con menor interés por lo general por reducir la desigualdad. Como resultado, el avance hacia la reducción de la desigualdad se ha paralizado.

El impacto que están teniendo estos cambios políticos aún no se ha visto reflejado en los datos de nuestro índice. Los datos que hemos utilizado este año para esta región pertenecen a 2015, cuando aún no se habían materializado estos recortes. Por lo tanto, prevemos que haya cambios en futuras versiones del índice. Los países que están adoptando medidas regresivas probablemente pierdan posiciones en el índice, a menos que cambien sus políticas, y empezará a notarse un contraste con los países latinoamericanos que sigan una línea más progresiva.

Estas son algunas de las múltiples historias que hay detrás del Índice CRI. En realidad, hay una historia para cada país, y animamos a los lectores a que las compartan con nosotros.⁵⁸

¿QUÉ PAÍSES HAN EMPEORADO SU RENDIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO?

Singapur se encuentra ahora entre los diez últimos puestos en cuanto a reducción de la desigualdad, en parte debido a la inclusión en el índice de un nuevo indicador sobre prácticas fiscales nocivas. Singapur es uno de los países más agresivos en este sentido⁵⁹ El Gobierno ha elevado el impuesto sobre la renta de las personas físicas en un 2%, pero el tipo máximo aplicado a las rentas más altas sigue siendo muy bajo, situándose en el 22%. Su baja puntuación en el índice se debe también a un gasto público social relativamente bajo, ya que solo el 39% del presupuesto nacional se destina a educación, sanidad y protección social en conjunto (muy por debajo del 50% de otros países de renta alta como Corea del Sur o de países de renta media alta como Tailandia). En cuanto a los derechos laborales, no hay igualdad salarial ni leyes que protejan a las mujeres frente a la discriminación; la legislación contra el acoso sexual y la violación es insuficiente, y el salario mínimo solo se aplica a las personas que trabajan como limpiadoras o guardias de seguridad.

Este año, **Hungría** ha reducido a más de la mitad su tipo nominal en el impuesto de sociedades, situándose actualmente en el 9%, el más bajo de la Unión Europea. Se ha producido un repunte de las vulneraciones de los derechos laborales, y una reducción del gasto en protección social. **Croacia** y **Egipto** han reducido los tipos máximos del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades.⁶⁰

Mongolia ha sido el país que más ha reducido su gasto en protección social. El FMI ha obligado recientemente al país a poner fin a su programa de subvención universal por menores a cargo, por lo que es posible que se vayan a producir más recortes próximamente.⁶¹ La República Democrática del Congo también ha recortado su gasto en educación y en sanidad.

¿QUÉ TENDENCIAS GENERALES EMERGEN DEL NUEVO ÍNDICE CRI?

En conjunto, desde la edición del índice de 2017, se ha producido un incremento marginal del porcentaje promedio del **gasto gubernamental** en los tres principales sectores sociales que previenen la desigualdad, pasando del 43,15% al 43,22% de la inversión pública total. Los países que han incrementado más su gasto fueron Guinea, Georgia, Mauritania, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Ucrania, Kazajistán, Liberia, Indonesia y Corea del Sur. En cuanto a los países de la OCDE, los que más han aumentado su gasto en estos sectores son Islandia, Portugal y Eslovenia.

- El gasto en **educación** ha pasado de un promedio del 14,7% al 14,8% del presupuesto nacional. Los aumentos más considerables se han producido en Georgia, Santa Lucía, Guinea, San Vicente y las Granadinas, la República Dominicana, Liberia, Uruguay, Santo Tomé y Príncipe, Bhután y Camerún. Por su parte, la República Democrática del Congo, Vanuatu y Singapur registraron algunas de las bajadas más drásticas.
- El gasto promedio en **sanidad** ha subido del 10,36% al 10,6%, con los mayores aumentos en Kazajistán, Colombia, Lituania, Georgia, Santo Tomé y Príncipe, Tailandia, Níger, Jamaica, Laos e Indonesia. Entre los países que más han recortado el gasto en sanidad se encuentran Australia y la República Democrática del Congo.
- En cuanto a la **protección social**, el gasto promedio parece mantenerse en torno al 18,5% del presupuesto nacional. De los países de la OCDE, Islandia, Australia, Chipre, Letonia y Portugal han aumentado su gasto en este sector. A su vez, desde la entrada de los nuevos Gobiernos en Corea del Sur e Indonesia, ambos países han aumentado sensiblemente su gasto en protección social. En el otro extremo se encuentran China, Mongolia y Serbia, con algunos de los recortes más marcados.

La sección 1 del informe sobre gasto social recoge los diez países que más han incrementado y disminuido el gasto en educación, sanidad y protección social.

El impacto del gasto sobre la desigualdad también ha aumentado en cierto modo, con una reducción potencial del índice de Gini nacional del 18%, frente al 17,7% en la edición de 2017 del Índice CRI.⁶²

Los avances a la hora de hacer que el sistema tributario sea más progresivo han sido desiguales:

- Algunos países como Brasil, Rumanía y Trinidad redujeron el año pasado el tipo general del **IVA - impuesto sobre el valor añadido**, pero otros tantos lo incrementaron (especialmente Colombia y Sri Lanka). A su vez, determinados países, como Burkina Faso y Senegal, aplicaron exenciones en este tipo de impuesto de manera más favorable para los sectores más pobres de la población, y Camboya elevó el umbral mínimo para su aplicación, logrando que los pequeños comerciantes queden exentos. En general, el tipo medio bajó ligeramente al 15,5%.
- En lo que respecta al tipo nominal del **impuesto de sociedades**, el promedio global disminuyó ligeramente, pasando del 24,65% al 24,48%. Si bien en 2017, 15 países aplicaron rebajas frente a los 10 que lo subieron, algunos de los recortes aplicados solo afectaban a pequeñas empresas (como es el caso en Australia), lo que podría ser algo positivo⁶³, y la mayoría fueron relativamente pequeños, por debajo de 2,5 puntos porcentuales. Estos recortes han sido más frecuentes en países con economías más avanzadas.⁶⁴ Hungría se sitúa en cabeza con el peor rendimiento en el impuesto de sociedades, al haber disminuido el impuesto de sociedades del 19% al 9% de golpe, si bien varios otros países como Israel, Noruega, Pakistán, España y el Reino Unido han ido reduciéndolo de manera gradual a lo largo de los últimos 4 a 8 años, por lo que la reducción acumulada es muy significativa. Por otra parte, Colombia, Malí, Jordania, Grecia y Perú son algunos de los países que lo han aumentado. No obstante, estos datos positivos se ven eclipsados por el recorte que los

Estados Unidos ha aplicado en el impuesto de sociedades a nivel federal, pasando del 35% al 21%. Este cambio aparecerá reflejado en la edición de 2019 del Índice CRI, y la gran pregunta es si muchos países seguirán su ejemplo (hasta ahora, y basándonos en los códigos fiscales de 2018, no parece que vaya a ser así, ya que solo Argentina y Bélgica han disminuido el tipo del impuesto de sociedades, mientras que Burkina Faso, Ecuador, Corea del Sur, Letonia y Taiwán lo han subido).

- El promedio de los tipos más altos del **impuesto sobre la renta de las personas físicas** ha aumentado ligeramente, pasando del 30,5% al 30,8% en 2017. Entre los Gobiernos que aumentaron los tipos impositivos más altos en el período 2016-17 se encuentran Mongolia, Guyana, Uruguay, Austria, Sudáfrica, Jamaica y Zambia. Por otra parte, tanto Chile como Croacia y Egipto redujeron los tipos marginales. Entre los países que han subido tipos para las rentas más altas en 2018 (subidas no incluidas en el índice de este año, pero que sí lo estarán en la edición del año que viene) destacan Barbados, Colombia, Ghana, Corea del Sur, Letonia (que ha pasado de aplicar una estructura fiscal plana a una progresiva), Filipinas y Sri Lanka. Todavía hay dos países que no aplican ni el impuesto de sociedades ni el impuesto sobre la renta de las personas físicas (Bahréin y Vanuatu), y otros dos que no aplican el impuesto sobre la renta de las personas físicas (Maldivas y Omán), por lo que los sistemas fiscales de estos países resultan altamente regresivos.

Sin embargo, paralelamente al aumento de los tipos impositivos, la eficacia en la recaudación de los impuestos más progresivos ha disminuido, cayendo en un 3% en términos de productividad. Por otra parte, países como Luxemburgo, Togo, Fiji, Japón, Bolivia y Ucrania lograron aumentar su recaudación fiscal sensiblemente en 2017.

Debido a esta menor recaudación fiscal en conjunto, el impacto de los impuestos en la lucha contra la desigualdad también ha perdido fuerza, por lo que se espera que los sistemas tributarios contribuyan a reducir la desigualdad en un 2,7%, frente al 3,5% el año pasado. Es evidente que se puede mejorar ampliamente el impacto de los impuestos en la reducción de la desigualdad. En un tono más positivo, cabe destacar que países como Marruecos, China y Ucrania también han logrado disminuir la regresividad de su diseño tributario al haber aumentado la recaudación que proviene de los impuestos progresivos y disminuido la de los regresivos.

En cuanto al **empleo**, no hay cambios significativos por lo general, pero se han producido avances positivos en cuanto a los salarios mínimos desde el año pasado:

- La Global Labour University afirma que los países han mejorado ligeramente su rendimiento en cuanto a **derechos laborales**, pasando de una puntuación de 4,107 a 4,165 en una escala del 1 al 10.⁶⁵ Este aumento se debe casi en su totalidad a la reducción de la incidencia de vulneraciones de las leyes que rigen la sindicalización y los derechos de los trabajadores. No obstante, ningún país ha mejorado su marco jurídico en este sentido, y ninguno de los países que prohíben la sindicalización independiente ha modificado su legislación (Bielorrusia, China, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Iraq, Laos, Libia, Qatar, Arabia Saudí, Sudán, Siria, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam).
- En lo que respecta a los **derechos laborales de las mujeres**, muy pocos países (Barbados, Liberia y Lituania, únicamente) han introducido nuevas leyes contra la discriminación y en pro de la igualdad salarial desde 2015. Por lo tanto, el número de países que cuentan con leyes al respecto sigue siendo bajo (27 y 23, respectivamente). Al contrario de lo que ocurre con los derechos laborales en su concepto más amplio, no existe ningún sistema global para medir si se están aplicando este tipo de leyes (así como las leyes analizadas en el nuevo indicador sobre violencia contra las mujeres del Índice CRI de 2018), y si están contribuyendo a mejorar las vidas de las mujeres.⁶⁶
- Los avances en cuanto a los permisos por maternidad y paternidad han sido mucho más numerosos, habiéndose registrado en al menos 13 países. Entre ellos, destacan Bhután y la India, que doblaron el permiso de maternidad y paternidad en 2016 y 2017, respectivamente; Mozambique, que ha aumentado el permiso de maternidad en un 50%, y

Paraguay, que a partir de noviembre de 2018 aumentará la prestación por el permiso del 75% del sueldo al 100%. Colombia, la República Dominicana e Israel han aumentado ligeramente sus permisos de maternidad (si bien en el caso de la República Dominicana esto ha sucedido 15 años después de que el país ratificara el convenio al respecto de la OIT), Chipre ha introducido un permiso de paternidad de 14 días y España ha más que duplicado su permiso de paternidad respecto de 2016 hasta llegar a los 35 días en 2017, añadiendo una semana más en 2018. Nueva Zelanda está incrementando de manera gradual el permiso de maternidad, de las 18 semanas actuales a las 26 previstas para 2022, y se están haciendo esfuerzos a nivel parlamentario en Guyana y Filipinas para lograr un permiso de duración similar. No obstante, sigue habiendo cinco países (Lesoto, Papúa Nueva Guinea, Surinam, Tonga y los Estados Unidos) que no cuentan con un permiso de maternidad o paternidad reglamentario aplicable a todos los trabajadores.

- Más de la mitad de los países han elevado los **salarios mínimos** a un ritmo más rápido que el PIB per cápita. Los aumentos más notables se han producido en Corea del Sur e Indonesia (del 16% y el 9%, respectivamente), así como en Burkina Faso, Madagascar, Malí, Gambia, Kiribati, Sierra Leona, Timor Oriental, Ecuador, El Salvador y Costa Rica. De los países de la OCDE, Portugal, Malta y Japón también han aumentado sensiblemente su salario mínimo. Otros países están tomando grandes medidas para cambiar sus sistemas: Indonesia está intentando homogeneizar los sueldos, aumentándolos con mayor celeridad en las zonas más pobres; Austria aprobó el año pasado el reemplazo de la negociación de salarios por sector por un salario mínimo aplicable a nivel nacional, y la India ha introducido un mínimo nacional para limitar las divergencias entre las regiones. Otros países se encuentran en proceso de introducir un salario mínimo nacional (como es el caso de Sudáfrica, que planea introducirlo en 2019, en medio de un acalorado debate al respecto) o al menos aplicable a ciertos sectores (por ejemplo, en el sector textil en Camboya). Estas iniciativas ponen presión en aquellos países que todavía no cuentan con un salario mínimo (como Yibuti o Sudán del Sur), o donde están limitados a determinados sectores (Camboya, Santa Lucía, Singapur, Tonga o Jordania).

Aparte de estas nuevas tendencias, las siguientes conclusiones generales a las que llegamos en la edición del índice en 2017 siguen estando vigentes:

- Varios países tienen un desempeño relativamente bueno en cuanto a la escala del gasto social. En promedio, los 157 países evaluados están invirtiendo más en protección social (18% de sus presupuestos) que en educación (14,8%) o salud (10,6%). Los niveles de gasto promedio en educación y salud siguen muy por debajo de los compromisos asumidos por varios países como parte de las declaraciones de Abuja e Incheon (20% y 15%, respectivamente).⁶⁷ En la mayoría de los países de renta baja y media-baja, el gasto en protección social se sitúa muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para contar con una protección social básica, tal y como estima la Comisión de Michelle Bachelet (que sitúa estos niveles mínimos entre el 3 y el 5% del PIB).⁶⁸ La mayoría de los países del mundo deben aumentar de manera drástica su gasto en los tres sectores.
- Son varios los países que están haciendo bastante poco por asegurar que su gasto social beneficie a los sectores más pobres de su ciudadanía en mayor medida que a los ricos y que, por lo tanto, reduzca la desigualdad. En 85 de los países analizados, el gasto social está reduciendo el coeficiente de Gini en menos de una décima. Los países deben de hacer un esfuerzo mucho mayor para asegurar que su gasto social tenga un impacto en los sectores más pobres de su población proporcionando unos servicios públicos universales y gratuitos, que constituyen la mejor herramienta para reducir la desigualdad.
- En cuanto al sistema tributario, por lo general los tipos del impuesto de sociedades han disminuido ligeramente desde la anterior edición del Índice CRI, destacando que determinados países con fuertes economías los han reducido (o planean hacerlo), en un contexto global en el que continúa la carrera a la baja para reducir este tipo de impuesto. Por otra parte, en general se ha producido un ligero incremento en los tipos marginales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, si bien la tendencia a largo plazo es incierta. Para revertir la carrera a la baja, es necesario aumentar la progresividad tanto del

impuesto de sociedades como del impuesto sobre la renta personal, asegurando una mayor contribución fiscal de las rentas más altas y las grandes empresas. En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, de carácter mucho menos progresivo, los tipos han dejado de subir, tras haber alcanzado niveles ya elevados en varios países. Pero está por ver si las enormes bajadas de impuestos que los Estados Unidos han anunciado en sus presupuestos de 2018 marcarán la tendencia en otros lugares. En muchos países, sigue siendo esencial rediseñar el sistema tributario para garantizar unos impuestos progresivos más elevados, y hacer que el impuesto sobre el valor añadido sea menos regresivo, no aplicándolo a productos alimentarios de la canasta básica y eximiendo del mismo a los pequeños comerciantes.

- La mayoría de los países también tiene un resultado muy negativo en cuanto a la recaudación del impuesto sobre la renta y de sociedades: el nivel promedio de recaudación se encuentra claramente por debajo del 15% del total de ingresos fiscales, frente al 40% del impuesto sobre el valor añadido. Para mejorar el impacto de los impuestos en la desigualdad, los países deben recaudar una proporción mucho mayor de su potencial de recaudación de impuestos provenientes de las empresas y de los individuos, mediante una reducción de las exenciones y exoneraciones para las grandes empresas y las grandes fortunas, renegociando los acuerdos fiscales y poniendo fin a los paraísos fiscales.
- En cuanto al empleo, el salario mínimo promedio se sitúa apenas justo por encima de la mitad del PIB nacional per cápita. Más del 80% de los 157 países analizados disponen de leyes que obligan a aplicar una igualdad salarial y que protegen contra la discriminación laboral por género (un dato mucho más elevado que el año pasado gracias a nueva investigación primaria). No obstante, tan solo el 45% de los países cuenta con legislación adecuada sobre el acoso sexual y un 40% contra la violación, y las leyes sobre igualdad de género se aplican deficientemente en la mayoría de los países. En promedio, la puntuación de los países en el indicador del CRI sobre derechos laborales es de tan solo 6,4 sobre 10, con una puntuación mucho más baja en cuanto a aplicación de las leyes que en su propia existencia. Además, en todo el mundo, el 9% de la fuerza laboral no disfruta de derechos laborales porque se encuentra en situación de desempleo, mientras que el 38% a menudo solo dispone de derechos laborales mínimos al trabajar en el sector informal. Un 35% adicional ha visto mermar sus derechos a causa de los contratos “no estandarizados”. Los países deben aumentar sus salarios mínimos, fortalecer las leyes de equidad de género, aplicar las leyes sobre derechos laborales de manera mucho más rigurosa, y extender los derechos laborales y los salarios mínimos a los trabajadores con contratos “atípicos”.

Los patrones varían considerablemente entre países con diferentes niveles de ingresos.

- Los países en desarrollo invierten el 16% de su presupuesto en educación, en comparación con el 12% que gastan los países de la OCDE. Sin embargo, cuanto más baja es la renta de un país, menos se dedica a salud (el 8% en países de renta baja, comparado con un 15% en países de la OCDE) y a protección social (el 7% en países de renta baja, frente al 37% en países de la OCDE).
- Los países en desarrollo (especialmente los países de renta baja), a menudo tienen sistemas fiscales más progresivos sobre el papel que los países de la OCDE, debido a las exenciones en el impuesto sobre el IVA para los bienes de consumo básicos y para el pequeño comercio, y porque el tipo nominal en el impuesto de sociedades suele ser más elevado. No obstante, los países de la OCDE reducen la desigualdad de manera más eficaz utilizando el diseño tributario, ya que su recaudación por el impuesto sobre la renta es más eficiente. Las prioridades de los países difieren en función de su nivel de renta: los países en desarrollo (en especial, los de renta media) deberían recaudar más impuestos sobre la renta personal y de sociedades; los países de la OCDE deben mejorar su estructura fiscal, revisando la aplicación de tipos en el IVA para productos básicos en favor de las personas en situación de pobreza, y revirtiendo la carrera a la baja en el impuesto de sociedades; y los países de la OCDE y de renta media-alta deben poner fin a sus prácticas fiscales nocivas que merman la capacidad recaudatoria de otros países por la actividad empresarial.

- Los países OCDE puntúan en general mucho más alto que los países en desarrollo en cuanto a derechos laborales y de género, especialmente por contar con leyes al respecto y con permisos de maternidad y paternidad remunerados. Por otro lado, los países de renta baja obtienen mejores resultados en cuanto a salarios mínimos reglamentarios, gracias a que un pequeño número de Gobiernos ha aprobado, con visión de futuro, subidas en el salario mínimo (aunque la capacidad de hacer cumplir con estos salarios es débil). Un gran número de países en desarrollo todavía necesita adoptar y aplicar leyes que garanticen los derechos laborales y de género, mientras que muchos países de la OCDE y de renta media deben centrarse en aumentar el salario mínimo.

LIMITACIONES DEL ÍNDICE CRI

El Índice CRI es una herramienta sencilla que concentra en una única medida cómo los países están luchando contra la desigualdad. Las siguientes secciones analizan las limitaciones específicas de cada uno de los tres pilares, pero hay también algunos factores limitantes generales que cabe señalar.

Es evidente que el índice nunca va a poder sustituir el conocimiento específico de cada contexto, ni la historia del camino seguido por cada país en la reducción de la desigualdad, ni un análisis detallado de las propuestas de cada Gobierno. En la medida de lo posible, Oxfam ha trabajado con colegas en cada uno de los países para reflejar los esfuerzos de sus Gobiernos de la manera más fiel posible, y en varios países DFI y Oxfam están elaborando informes nacionales sobre desigualdad que son mucho más exhaustivos. En la herramienta en línea que acompaña al índice [\[link\]](#), se han añadido secciones explicativas adicionales sobre los países con enlaces a las medidas que están tomando para luchar contra la desigualdad a nivel nacional.

No obstante, en un índice tan amplio como este, algunos países pueden verse recompensados o penalizados de manera injusta (ver Cuadro 4). Pero en conjunto, DFI y Oxfam consideran que el índice ofrece una base sólida con la que calibrar el compromiso de los Gobiernos para abordar la crisis de desigualdad.

Cuadro 4: Gobiernos que viven de las rentas: cuando el compromiso no es real

Desde DFI y Oxfam hemos denominado a este índice el Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (CRI), ya que queremos destacar cuando los Gobiernos asumen un papel proactivo y propositivo, comprometidos en la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, esto entraña dificultades. A pesar de que utilizamos los datos más actualizados disponibles, algunos Gobiernos pueden obtener un reconocimiento por compromisos derivados de políticas o enfoques de Gobiernos anteriores. En algunos casos, los Gobiernos actualmente en el poder se oponen abiertamente a dichas políticas, e incluso tratan de revertirlas.

En un gran número de países ricos, muchas de las políticas que hacen que estos países reciban una buena puntuación se aplicaron en otras épocas, y se encuentran seriamente amenazadas en la actualidad. En el Reino Unido, por ejemplo, a pesar de que todavía existan bastiones del estado de bienestar, como el Servicio Nacional de Salud, que posicionan a este país en un lugar relativamente favorable en el ranking, los recientes Gobiernos que han estado en el poder (de todos los espectros políticos) se han mostrado poco dispuestos a incluir la reducción de la desigualdad entre sus principales objetivos.⁶⁹ Algunos expertos han destacado cómo las políticas fiscales actuales y los recientes recortes en prestaciones sociales contribuirán significativamente al incremento previsto de la desigualdad en el futuro.⁷⁰

Dinamarca encabeza el índice, gracias a un sistema tributario con tipos altos y progresivos, un elevado gasto social y una sólida protección de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, los últimos Gobiernos han dado un giro en estos tres ámbitos, con vistas a liberalizar la economía danesa, hasta el punto que investigaciones recientes indican que las reformas de los últimos 15 años han producido un aumento de la desigualdad en el país de casi el 20% entre 2005 y 2015.⁷¹

Por su parte, las arraigadas instituciones alemanas de bienestar reducen significativamente la desigualdad. Sin embargo, desde principios de los años 90, las rentas más altas han absorbido la mayor parte del ingreso generado en el país, lo que ha aumentado la desigualdad en el nivel de ingresos antes de la redistribución por parte del Estado. A su vez, las reformas fiscales regresivas de los últimos 20 años han socavado el impacto redistributivo de las políticas gubernamentales.⁷² En conjunto, estos factores han producido un incremento de la desigualdad. El Gobierno francés está descendiendo puestos de manera gradual en el ranking sobre la capacidad de su sistema tributario desde la reforma que llevó a cabo en 2017 para bajar el tipo del impuesto de sociedades del 33% al 28%. Está previsto que este impuesto siga bajando progresivamente hasta el 25% en 2022. Junto con la eliminación del impuesto sobre la riqueza y el incremento de los impuestos regresivos, la reforma en Francia ilustra la tendencia global hacia la adopción de sistemas fiscales más regresivos. Esto se verá reflejado en la próxima edición del índice a medida que se vaya percibiendo el impacto que van teniendo estas medidas en la recaudación pública.

De manera similar, en América Latina, se han elegido recientemente Gobiernos que no mantienen el mismo nivel de compromiso que sus predecesores con la reducción de la desigualdad y que incluso, en algunos casos, están dando pasos para revertir políticas progresivas.

No obstante, la mayoría de los datos recabados para el índice son recientes y se obtienen a partir de los presupuestos nacionales, lo que permite que el índice pueda actualizarse cada año, y que los países suban o bajen en el ranking en función de los cambios en sus políticas. Si un país aumenta sustancialmente el salario mínimo o incrementa el gasto en educación en los siguientes presupuestos, se verá recompensado con un aumento en la puntuación del Índice CRI. Con el tiempo, esto permitirá hacer una valoración más precisa del nivel de compromiso de los Gobiernos.

El índice CRI se centra sobre todo en las medidas redistributivas que pueden adoptar los Gobiernos, y no en aquellas que pueden evitar el aumento de la desigualdad desde el inicio. Si bien contempla la capacidad de los Gobiernos para intervenir y hacer mercados laborales más justos, no incorpora, por ejemplo, la gobernanza corporativa (para reducir el excesivo control que tienen los accionistas sobre la economía), ni la distribución de la tierra, o la política industrial, como elementos que contribuyen a una mayor igualdad. La situación de países como Sudáfrica, donde la desigualdad está aumentando a pesar de puntuar relativamente bien en el Índice CRI, sólo se puede explicar si se tienen en cuenta estos factores estructurales. Los informes de Oxfam *Una economía para el 99%*⁷³ y *Premiar el trabajo, no la riqueza*⁷⁴ también abordan estos asuntos directamente.⁷⁵

La falta de datos ha impedido incluir estas políticas estructurales y otros posibles indicadores, ya que el índice pretende incluir el mayor número de países posible. Muchos indicadores potenciales no se han podido utilizar porque los datos disponibles solo abarcaban un pequeño número de países, generalmente ricos. Es urgente hacer un esfuerzo masivo y concertado para mejorar los datos sobre desigualdad y sobre los factores que la determinan, especialmente en países pobres. También es fundamental contar con datos desglosados por género. Más adelante en el informe, se presentan algunos ámbitos adicionales que el índice puede explorar en futuras ediciones.

Por último, el Índice CRI no pretende abarcar a todos los actores que intervienen en la lucha contra la desigualdad. Otros actores importantes, como el sector privado y las

instituciones internacionales (como el Banco Mundial o el FMI), desempeñan un papel importante, así como también las grandes fortunas. Si bien las campañas de Oxfam y las de sus aliados se dirigen a todos estos actores, los Gobiernos siguen siendo la pieza fundamental que puede hacer posibles los cambios. Un Gobierno democrático y responsable es la mejor herramienta para lograr una sociedad más equitativa, y si los Gobiernos de todo el mundo no hacen un esfuerzo mucho mayor en estos tres ámbitos de políticas, la crisis de desigualdad continuará.

ÁREAS DE MEJORA Y A DESARROLLAR EN EL FUTURO

Desigualdad económica y género

Dentro de cada una de las tres áreas (gasto social, política tributaria y empleo), las medidas para combatir la desigualdad económica se solapan considerablemente con medidas para combatir la desigualdad de género. La desigualdad de género acentúa la creciente brecha entre ricos y pobres, mientras que la creciente desigualdad dificulta la lucha por la igualdad de género en todo el mundo. En sus recientes investigaciones, Oxfam⁷⁶ ha demostrado que la lucha contra la desigualdad económica está estrechamente relacionada con la lucha contra la desigualdad de género. Las mujeres son las más afectadas por los sistemas fiscales regresivos y la baja inversión pública, y ocupan mayoritariamente los trabajos peor remunerados y más precarios, mientras que las leyes y las convenciones sociales limitan su capacidad para organizarse y luchar por sus derechos. Además, se hacen cargo de la mayor parte de los trabajos de cuidados no remunerados y, por tanto, son las más afectadas cuando los servicios públicos no están financiados adecuadamente, lo que empeora la desigualdad.

Cada sección de este informe contiene subsecciones específicas sobre igualdad de género. Lamentablemente, debido a limitaciones en la disponibilidad de los datos, por ahora solo se pueden aplicar indicadores específicos al pilar del empleo. En la edición de este año, hemos incorporado dos nuevos indicadores al pilar sobre derechos laborales: permiso de maternidad y paternidad, y protección legal para la igualdad salarial, contra la discriminación de género y contra el acoso sexual y la violación. Si bien existen bases de datos con estadísticas sobre género (como la del Banco Mundial sobre Mujer, Empresa y Legislación, o el Índice de Instituciones Sociales y de Género de la OCDE), no hemos podido utilizar estos datos total o parcialmente debido a problemas con su fiabilidad y antigüedad; tampoco hemos podido corroborar exhaustivamente los indicadores de género con nuestros programas nacionales para la actual versión del índice debido a limitaciones de tiempo. Tampoco se dispone de suficientes datos fiables de suficientes países como para evaluar el gasto o la recaudación desde una perspectiva de género en la construcción del índice. Solo una cantidad relativamente pequeña de países se ha comprometido a elaborar presupuestos con perspectiva de género, por lo que no es posible hacer comparaciones generales sobre hasta qué punto las políticas fiscales y de gasto luchan contra la desigualdad de género, si bien el impacto positivo de los presupuestos con perspectiva de género es bien conocido.

No obstante, se están desarrollando iniciativas para subsanar las brechas de género en la información disponible, y es posible que los datos que se obtengan a partir de ellas se puedan utilizar para mejorar futuras ediciones del Índice CRI. Por ejemplo, ONU Mujeres está ayudando a recabar datos sobre la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, lo que está específicamente relacionado con el indicador de los ODS sobre el seguimiento de la asignación de fondos públicos para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A su vez, este organismo está colaborando con la División de Estadística de las Naciones Unidas en la iniciativa Pruebas y Cifras para la Igualdad de Género (EDGE, por sus siglas en inglés) a fin de mejorar la integración de las diferencias de género en los análisis estadísticos. Oxfam apoya firmemente la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y la recopilación de datos desglosados por género; la falta de este tipo de datos puede impedir que los países comprendan el impacto de la desigualdad sobre las mujeres y las niñas, lo que

provocaría que los programas y políticas no tuvieran perspectiva de género y, en última instancia, el recrudecimiento de la desigualdad de género.

Desigualdad económica y juventud

Las desigualdades entre las personas jóvenes y las mayores están aumentando en todo el mundo. La creciente acumulación de la riqueza en manos de unas pocas personas en lo más alto de la distribución de ingresos ha generado una situación presente muy complicada y un futuro incierto para la mayoría de las personas jóvenes. La desigualdad económica extrema inhibe la movilidad social,⁷⁷ lo que significa que los hijos de padres pobres continuarán siendo pobres. Salvo aquellos que provienen de entornos privilegiados, las personas jóvenes en muchos países tienen menos oportunidades de aprovechar sus capacidades y su talento debido a la enorme y creciente brecha entre las personas ricas y el resto.

Los hombres y mujeres jóvenes se enfrentan a grandes dificultades, si bien a menudo estas difieren en su naturaleza. Estas dificultades se ven exacerbadas por la combinación de desigualdades por motivo de etnia, edad, género y de otra índole. Por ejemplo, cuando la educación no es gratuita ni de fácil acceso, es más probable que las mujeres jóvenes sean quienes se vean excluidas; asimismo, los servicios públicos que más necesitan las mujeres jóvenes, como los relativos a la planificación familiar, tienen una carencia crónica de financiación, lo que dificulta que puedan salir de la pobreza. Por otra parte, por ejemplo, en Estados Unidos, la capacidad de los hombres y mujeres jóvenes de ascender o mantenerse económicamente puede verse afectada por factores que están fuera de su control, como la discriminación racial. Los hombres jóvenes tienen muchas más probabilidades de morir de manera violenta,⁷⁸ a menudo a manos de la policía. En un estudio elaborado por el Equality of Opportunity Project, los investigadores encontraron que los jóvenes amerindios y negros estadounidenses tienen muchas más probabilidades de descender socioeconómicamente que los de otras etnias, incluso cuando su situación inicial partía de un nivel superior.⁷⁹

Un gasto social y una fiscalidad progresivos pueden contrarrestar la creciente desigualdad entre personas jóvenes y mayores, al disminuir la riqueza que se traspasa entre generaciones directamente, y al utilizar la recaudación para aumentar el gasto en servicios de educación, salud y en el resto de servicios públicos que necesitan tanto los hombres como las mujeres jóvenes. Del mismo modo, unos derechos laborales fuertes son fundamentales para ayudar a los jóvenes a recibir un salario justo. Muchos salarios mínimos no aplican a las personas jóvenes, por lo que los criterios de elegibilidad deben ampliarse.

Desigualdad económica, captura de las élites y participación política

Hace varias décadas, Louis Brandeis, antiguo juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pronunció la famosa frase: "Podemos tener democracia, o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unas pocas personas, pero no podemos tener ambas cosas a la vez". En todo el mundo, ante la creciente distancia entre las élites y el resto de la sociedad, los políticos están tomando medidas que merman los derechos democráticos y cierran los espacios para la sociedad civil.⁸⁰ Fomentar procesos inclusivos de toma de decisiones políticas respecto a los derechos y la representación de las personas es un fin en sí mismo, pero también es esencial para garantizar las mejores políticas. Por el contrario, procesos de toma de decisiones políticas dominados por las élites debilitan la democracia y han demostrado favorecer la adopción de políticas que benefician sobre todo a esas élites.⁸¹ A menudo, la captura política y la reducción del espacio de la sociedad civil afectan especialmente a las mujeres en situación de pobreza y marginalidad, que se enfrentan a grandes dificultades para estar presentes en los procesos políticos.⁸²

En la actualidad, el Índice CRI no incorpora ninguna medición de apertura política ni de corrupción. Muchos de los países que puntúan peor también son países con elevados niveles de corrupción y bajos niveles de participación política. Suelen presentar también elevados niveles de control del Gobierno, de los medios de comunicación y de los negocios por parte de

las élites, utilizando redes de patronazgo y clientelismo. Si bien el índice no mide estas dinámicas directamente, hay una relación entre un deficiente desempeño de los Gobiernos y el nivel de corrupción y de débil gobernanza. Esta relación es algo que DFI y Oxfam pretenden analizar en profundidad en los próximos años, quizá mediante la incorporación de indicadores de corrupción o de gobernanza y de participación, así como de participación de las mujeres.

Otras políticas con impacto en la desigualdad

El gasto social, la política tributaria y los derechos laborales no son las únicas áreas sobre las que los Gobiernos pueden actuar para reducir la desigualdad. Otras políticas, como por ejemplo las relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (Pymes), el desarrollo rural o la inclusión financiera, pueden tener y de hecho influyen sobre la desigualdad. Sin embargo, la adopción de medidas concertadas respecto al gasto, la fiscalidad y los derechos laborales es una característica común de los casos con éxito de reducción de la desigualdad, y cualquier intervención gubernamental que quiera abordar la desigualdad debe priorizar la acción en estos tres ámbitos.

RECOMENDACIONES

1. Acción política

Los Gobiernos deben mejorar drásticamente sus esfuerzos por realizar un gasto progresivo, diseñar un sistema tributario progresivo, aplicar unos salarios progresivos y ofrecer protección a los trabajadores, como parte de los planes nacionales de reducción de la desigualdad en virtud del ODS 10.

De cara a la revisión del ODS 10 prevista para julio de 2019, los países deben elaborar planes nacionales que demuestren cómo van a reducir la desigualdad. Dichos planes deben incluir un aumento de la imposición a las grandes empresas y grandes fortunas, y debe terminarse con la evasión y la elusión fiscal, así como con la dañina “carrera a la baja” en la tributación empresarial. El gasto en servicios públicos y protección social debe aumentarse y mejorarse. Debe hacerse un seguimiento sistemático del gasto público, garantizando la participación de la ciudadanía en la supervisión del presupuesto. Los trabajadores necesitan estar mejor remunerados y mejor protegidos. Es necesario comprender y abordar la situación de las mujeres y las niñas, concentradas en los puestos peor remunerados y en los empleos más precarios, así como el papel que desempeña el trabajo de cuidados no remunerado en la economía.

2. Mejora de los datos

Los Gobiernos, las instituciones internacionales y otros actores deben trabajar conjuntamente para mejorar de manera rápida y radical los datos disponibles sobre desigualdad y las políticas relacionadas, y para hacer un seguimiento preciso y regular de los avances en la reducción de la desigualdad.

A lo largo del presente informe, hemos destacado las múltiples áreas en las que las dificultades en la obtención de datos disponibles impiden hacer una valoración sólida de los avances en la reducción de la desigualdad. Sin embargo, es indispensable que la ciudadanía entienda las políticas que adoptan los Gobiernos, cómo estas afectan a los resultados, y que exija a sus Gobiernos que rindan cuentas por ello. Los datos disponibles sobre desigualdad siguen siendo deficientes e irregulares; los datos oficiales sobre gasto, fiscalidad y políticas de empleo deberían recopilarse regularmente como parte del proceso de seguimiento de los ODS. Es esencial disponer de datos desglosados por sexo. Además, es necesario proporcionar datos sobre otros aspectos adicionales (especialmente sobre el impacto de determinadas políticas sobre el género y los jóvenes, pero también sobre el gasto en protección social, los impuestos sobre los rendimientos del capital y sobre la riqueza y la propiedad, salarios mínimos, y empleo no estandarizado).

3. Impacto político

Los Gobiernos y las instituciones internacionales deben analizar el impacto distributivo de todas y cada una de las propuestas políticas, y basar sus decisiones sobre las mismas en el impacto que tienen en la reducción de la desigualdad.

Los datos no sirven de mucho si no se analiza el impacto de las políticas en la reducción de la desigualdad. Es necesaria una inversión mucho mayor en el análisis del impacto de las políticas gubernamentales en la desigualdad; dicho análisis debe realizarse en más países, de manera más regular, y sobre un espectro más amplio de políticas. Debe darse especial prioridad al análisis de la composición del gasto y su impacto contra la desigualdad, el impacto del sistema tributario contra la desigualdad y la estimación de la brecha fiscal, el comportamiento de los paraísos fiscales, las tendencias, cobertura y cumplimiento de los derechos laborales y la igualdad de género y el derecho a un salario mínimo en todos los países.

1 REDUCIR LA DESIGUALDAD MEDIANTE EL GASTO SOCIAL

Índice CRI 2018

En 2017, el gasto promedio destinado a los sectores de la salud, la educación y la protección social aumentó ligeramente; en algunos países el aumento fue notable, como en Indonesia, Corea del Sur, Georgia y Guinea, y en otros el gasto se ha recortado mucho, como en RDC, Mongolia y Serbia.

Impacto del gasto social en la reducción de la desigualdad en todo el mundo: base empírica

El gasto social es un instrumento fundamental en toda política fiscal redistributiva. El nivel de desigualdad en una sociedad antes de aplicar impuestos y transferencias se denomina “desigualdad de mercado”. La experiencia demuestra que el gasto social puede tener un impacto muy grande sobre la desigualdad de mercado de los ingresos, tanto a través de transferencias indirectas (como el gasto en servicios de salud y educación), como de transferencias directas (gasto en protección social, ayudas y subvenciones).

Cuando los Gobiernos proporcionan servicios públicos, especialmente de salud⁸³ y educación, y cuando estos servicios están fuertemente subsidiados o son gratuitos, las mujeres y los hombres más pobres no tienen que destinar sus escasos ingresos a pagar por ellos, lo cual resulta en una contribución a los ingresos de los hogares más pobres equivalente a sus ingresos ordinarios.^{84,85}

Además del impacto positivo de este tipo de servicios “en especie”, la redistribución y la reducción de la desigualdad puede ser aún mayor si los Gobiernos proporcionan transferencias de efectivo directas, mediante programas de bienestar social como los sistemas de ayudas frente a circunstancias imprevistas, o para elevar los ingresos de los hogares más pobres.⁸⁶ El gasto en protección social puede tener un efecto redistributivo de los ingresos de las personas más ricas hacia los hogares más pobres, contribuyendo así a reducir la desigualdad y construir una sociedad mejor para el conjunto de la sociedad.⁸⁷

Las mujeres y las niñas más pobres son las más beneficiadas de unos servicios de salud y educación de calidad, universales y equitativos, tal y como se explica en el apartado sobre género más adelante en esta sección.

Existen numerosos datos empíricos a lo largo del tiempo y en distintos países sobre el impacto distributivo positivo del gasto social. Prácticamente ninguna economía avanzada ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad con un bajo nivel de gasto social.⁸⁸ Los datos de más de 150 países, tanto ricos como pobres, durante un periodo de más de 30 años,⁸⁹ demuestran que, en general, la inversión en salud, educación y protección social reduce la desigualdad. Asimismo, se ha demostrado que, en promedio, los servicios públicos reducen la desigualdad de ingresos en un 20% en los países de la OCDE,⁹⁰ y un estudio de 13 países en desarrollo demostró que el gasto en educación y salud es responsable del 69% de la reducción total de la desigualdad.⁹¹ Datos sobre el impacto de las políticas fiscales en 25 países de renta media y baja demuestran que las transferencias directas y el gasto en educación y salud tienen un efecto igualador.⁹²

Varios Gobiernos nacionales se han comprometido a aumentar el gasto en salud y educación. En 2001, todos los Gobiernos africanos se comprometieron en la Declaración de Abuja a aumentar el gasto en salud hasta alcanzar el 15%. Y en 2015, 160 Gobiernos se comprometieron en la Declaración de Incheon a destinar hasta el 20% de sus presupuestos a

la educación.⁹³ Desde 2012, un total de 185 países han adoptado la Recomendación 202 (R202) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pisos de Protección Social, según la cual cada país debe ofrecer acceso a servicios de salud y un ingreso mínimo garantizado para las personas desempleadas, menores, ancianos, personas con alguna discapacidad y personas que no puedan disfrutar de unos ingresos que garanticen una vida digna. En 2016, las Naciones Unidas anunciaron el Pacto Mundial para la Protección Social Universal,⁹⁴ con el objetivo de apoyar a los países en desarrollo a aplicar la Resolución 202 y alcanzar el ODS 1.3 sobre protección social.⁹⁵

La calidad del gasto es importante

Más allá de los niveles generales de gasto, los datos empíricos de distintos países en todo el mundo demuestran que la manera en que los Gobiernos distribuyen el gasto entre distintos sectores sociales y dentro de cada sector es un factor determinante. Existe una diferencia enorme entre países y dentro de los mismos para los distintos sectores, así como entre los distintos tipos de gasto social. Algunos países presentan niveles de gasto elevados, pero el dinero no se gasta manera progresiva, por lo que no logran tener el impacto que podrían sobre la desigualdad; mientras que otros gastan menos, pero de manera más efectiva.

Educación

A pesar de los logros alcanzados en materia de educación en todo el mundo, muchos países siguen teniendo importantes déficits en materia de calidad y equidad en el sistema educativo. Seis de cada diez menores (617 millones en todo el mundo) no adquieren las competencias básicas de lectura y cálculo matemático, a pesar de que dos tercios de estos menores estén escolarizados.⁹⁶ Si la tendencia mundial se mantiene, el 75% de los países no logrará alcanzar la educación secundaria universal hasta después de 2030; en los países de renta más baja, menos del 10% de los jóvenes habrán adquirido las competencias básicas de la educación secundaria.⁹⁷

En 2015, 180 Gobiernos firmaron el Marco de Acción para la Educación 2030, y se comprometieron a ofrecer 12 años de educación gratuita y obligatoria para todos los menores; sin embargo, menos de la mitad de estos países ofrecen 12 años de educación gratuita, y poco más de la mitad ofrecen al menos 10 años. Más de una cuarta parte de los países no ofrecen educación secundaria gratuita; y solo cuatro de diez países en África sí lo hacen.⁹⁸ En los últimos años, muchos países de renta media y baja han experimentado nuevos modelos de educación basados en el acceso a escuelas privadas a precio reducido para los alumnos más pobres (las denominadas “escuelas de tasas bajas”, LFPS por sus siglas en inglés).⁹⁹ Sin embargo, numerosos estudios en todo el mundo demuestran que la introducción del pago de tasas en la educación (tanto formal como informal, privada o pública) excluye a los menores más pobres, en especial a las niñas, del acceso a la educación.¹⁰⁰

El gasto en educación infantil y primaria suele beneficiar a las personas más pobres en los países de renta media y baja; el gasto en educación secundaria es, en general, neutro, mientras que el gasto en educación terciaria es a menudo regresivo.¹⁰¹ A pesar de ello, el gasto suele desviarse hacia la educación terciaria. Con demasiada frecuencia, la respuesta es privatizar la educación terciaria o aumentar considerablemente las tasas, a pesar de que esto suele excluir aún más a los estudiantes más pobres, exacerbando aún más la vulnerabilidad de las niñas. Es importante buscar un equilibrio para que la educación terciaria sea accesible sin desviar demasiados recursos públicos de la educación básica.

Salud

El gasto en salud puede contribuir de manera significativa a la reducción de la desigualdad, pero ello depende en gran medida de cómo se realice el gasto. Por ejemplo, tendrá un impacto limitado en la desigualdad si el gasto se inclina hacia las zonas más ricas o los cuidados hospitalarios, alejándose de los centros de atención primaria en zonas más pobres. Cada año,

100 millones de personas se ven arrastradas por debajo del umbral de pobreza tras hacer frente a los gastos de salud, y muchos millones más retrasan o evitan solicitar asistencia médica porque no pueden costearla.¹⁰² El gasto en salud tiene importantes consecuencias en la desigualdad de género, tal y como se explica más abajo en la sección sobre género.

De nuevo, los seguros de salud, que suelen ofrecerse como solución, pueden exacerbar la desigualdad al dirigir el gasto público en salud hacia las personas que pueden permitirse pagar regularmente un seguro, dejando fuera a muchas de las personas más pobres y vulnerables. Los seguros privados de salud contribuyen a aumentar la desigualdad en los países con amplios sectores de economía informal. En Ghana, por ejemplo, el sistema de seguros de salud del Gobierno lleva 15 años funcionando; a él acceden sobre todo las familias más ricas,¹⁰³ y tan solo cubre al 37% de la población del país.¹⁰⁴ Es frecuente que las mujeres queden excluidas de estos seguros, y en algunos países donde sí están cubiertas, tienen que hacer frente a unas primas más altas o no son elegibles debido a su condición previa, por ejemplo si están embarazadas o si han sido víctimas de violencia sexual.¹⁰⁵ Por el contrario, algunos de los países más pobres, incluso con amplios sectores de economía informal, han demostrado que es posible implantar un sistema de salud universal, equitativo y gratuito, financiado por completo a través de la recaudación de impuestos.

Protección social

El papel que desempeña el gasto en protección social en la reducción de la pobreza varía mucho de un país a otro. En los países de la OCDE, las transferencias de ingresos han desempeñado un papel histórico en la reducción de la desigualdad. Actualmente, el conjunto de sistemas de transferencia de efectivo, los impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social contribuyen a reducir la desigualdad de mercado para la población activa en los países de la OCDE en algo más de un 25%, en promedio. En todos los países, el grueso de la redistribución (alrededor del 72%) se logra mediante transferencias monetarias.¹⁰⁶ Las pensiones en los países de la OCDE se calculan en función de los ingresos previos, por lo que son menos redistributivas,¹⁰⁷ aunque siguen jugando un papel igualador.¹⁰⁸ Desde mediados de los años 90, el efecto redistributivo de los impuestos ha disminuido con la caída de los ingresos en muchos países.¹⁰⁹

Los sistemas de protección social han demostrado reducir la desigualdad en algunos países en desarrollo, pero en general, la inversión en protección social sigue siendo baja en la mayoría de los países.^{110,111} Durante los últimos 20 o 30 años, algunos países de renta media y baja han realizado importantes esfuerzos para ampliar la protección social. Más de 20 países, tanto de renta media como de renta baja, casi han logrado la cobertura universal de las pensiones, mediante una combinación de sistemas contributivos y tributarios. Sin embargo, en otros países, la mayor parte de la protección social consiste en sistemas no contributivos, financiados a través de impuestos o por donantes, y dirigidos a la población más pobre. Este tipo de sistemas son por lo general pequeños, a corto plazo, limitados en su alcance geográfico y/o sin una base jurídica y financiera estable, por lo que no sirven como políticas estructurales para la reducción de la desigualdad y la pobreza. Su impacto está también limitado por el hecho de que, aunque en principio vayan dirigidos a las poblaciones más pobres y vulnerables, la dificultad en llegar hasta estas poblaciones a menudo resulta en que muchas de estas personas queden excluidas. El doble objetivo de los sistemas contributivos para trabajadores formales y asistencia social para los más pobres, además, genera una brecha en la cobertura de quienes quedan en medio, dejándolos en una situación de vulnerabilidad y desprotección.¹¹²

La protección social puede tener un impacto importante en la desigualdad de género y, sobre todo, en los cuidados no remunerados. Estos impactos se explican con más detalle en la sección sobre género más abajo.

Los sistemas contributivos (como la seguridad social, especialmente las pensiones) tienden a favorecer a los hogares más ricos, sobre todo en los países en desarrollo ya que, por lo general, solo las personas con situación laboral estable en el sector formal pueden acceder a

ellos. Los trabajadores con empleos precarios o informales suelen quedar excluidos. El Índice de Protección Social del Banco Asiático de Desarrollo señalaba en 2013 que el 83% de los beneficiarios de protección social en la región no eran personas pobres, y que esto se debía a la predominancia de los sistemas de seguros sociales tales como las pensiones contributivas.¹¹³

Los datos indican que los sistemas de bienestar universales redistribuyen mejor que los sistemas diseñados para beneficiar a las personas más pobres.¹¹⁴ Por ejemplo, a menudo los mecanismos de cobertura universal en base a categorías y no a niveles de pobreza (tales como ayudas para las madres y los menores) resultan más efectivos. Un ejemplo ilustrativo es el programa *Monthly Benefit for Poor Families* (ayuda mensual para familias pobres) en Kirguistán, que ofrecía 13 dólares mensuales a familias con menores en situación de pobreza, pero que llegaba a menos del 20% de las familias del decil más pobre de la población, al estar la prestación supeditada a la comprobación de los recursos de las familias. Por este motivo, el Gobierno decidió reemplazar este sistema por una cobertura universal para menores, como un primer paso hacia la construcción de un sistema de protección social inclusivo que contemple todo el ciclo vital de las personas. No obstante, durante una misión al país para evaluar sus préstamos, el FMI presionó al Gobierno para que modificara la ley sobre ayudas universales a la infancia y reintrodujera un sistema dirigido a las personas más pobres, como una medida de ahorro.¹¹⁵

Casi todos los países de renta media podrían disponer de programas de protección social mucho más amplios. De hecho, un análisis de la OIT sobre opciones para aumentar el espacio fiscal en países de renta baja y renta media demuestra que, para la mayoría de los países, es factible establecer un piso mínimo de protección social universal.¹¹⁶

Las decisiones sobre el gasto suelen estar sujetas a la influencia de intereses especiales

Con demasiada frecuencia, en muchos países, las decisiones sobre la asignación de recursos están dominadas por intereses especiales y malas decisiones políticas que aumentan la desigualdad. Las élites y los fuertes intereses pueden “capturar” las políticas e inclinar a su favor las prioridades de gasto.¹¹⁷ Por ejemplo, en Chile, algunos estudios demuestran que cuando se introdujeron vales en el sistema educativo, las clases medias y altas se apropiaron de la mayor parte de los beneficios, lo que contribuyó a una profunda estratificación del sistema educativo.¹¹⁸ A menudo, las partidas de gasto se dirigen de manera desproporcionada a zonas con mayor densidad de población, a zonas urbanas o más ricas, o a zonas favorecidas políticamente por los partidos gobernantes. Por ejemplo, en Senegal, más de la mitad de los recursos públicos están concentrados en la capital, Dakar, donde tan solo vive una cuarta parte de la población.¹¹⁹ Para hacer frente a estas desigualdades geográficas, el gasto público debe distribuirse atendiendo a fórmulas más equitativas. Algunos países, como Brasil y Perú,^{120,121} han desarrollado sistemas de adjudicación del gasto para compensar las desventajas geográficas, lo que ha demostrado tener un impacto igualador sobre el gasto social de estos países.

Los sistemas centrados en la equidad son especialmente importantes en países con grupos étnicos marginados o fuertes disparidades geográficas, que pueden precisar de medidas especiales para compensar la desigualdad.¹²²

Estas variaciones aparecen en estudios que demuestran el impacto del gasto sobre la desigualdad, mediante análisis sobre la repercusión de los beneficios. El proyecto sobre el Compromiso con la Equidad (CEQ, por sus siglas en inglés) ha demostrado las grandes diferencias entre los países latinoamericanos: Uruguay alcanza unos niveles de redistribución del gasto más elevados, mientras los logros en redistribución de Bolivia son escasos (comparados con un gasto social más alto).¹²³ El Índice CRI utiliza este análisis de la repercusión de los beneficios.

Para definir los indicadores para este pilar, DFI ha recopilado los datos disponibles más recientes extraídos de la información presupuestaria disponible. Estos datos se han completado con otras fuentes, especialmente la OIT, que amablemente ha permitido a DFI y a Oxfam consultar sus bases de datos.

Género, juventud, gasto social y protección social

Impacto sobre las mujeres

Existe un amplio solapamiento y numerosas sinergias positivas entre el impacto del gasto social en la desigualdad de género y en la desigualdad económica. Las mujeres y las niñas que viven en la pobreza son quienes más pueden beneficiarse de unos servicios de salud y educación de calidad, universales y equitativos. El acceso a la educación puede aumentar las oportunidades económicas para las mujeres, reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres, y puede aumentar el poder de decisión de las mujeres dentro del hogar.¹²⁴ Si todas las niñas completaran la educación primaria, la mortalidad materna disminuiría en dos tercios, salvando la vida de 189.000 mujeres cada año.¹²⁵ El acceso universal a servicios de salud de calidad puede transformar la vida de las mujeres, otorgándoles un abanico más amplio de elección y reduciendo el riesgo de contraer enfermedades prevenibles, o incluso el riesgo de morir durante el embarazo o el parto.¹²⁶

En muchos países, es cada vez más habitual que los servicios públicos estén sujetos a algún tipo de pago, que los deja fuera del alcance de la mayoría de los jóvenes, lo cual supone un desperdicio de su talento y una gran pérdida para el conjunto de la sociedad. La ausencia de un sistema de educación universal y gratuito a menudo hace que las niñas y chicas jóvenes pierdan oportunidades educativas, ya que las familias dan prioridad a la educación de los varones.¹²⁷ Los jóvenes, especialmente las chicas, salen perdiendo cuando se recorta el gasto en este sector, o cuando la educación es accesible solo para quienes pueden asumir el coste. Una educación primaria universal y gratuita es vital, especialmente para lograr que las niñas y las jóvenes tomen el control de sus vidas; ayuda a prevenir el matrimonio infantil, y permite a las mujeres tener menos hijos y asegurarse una posición económica más sólida en la sociedad.¹²⁸ Existen numerosos datos que demuestran que la inversión en el capital humano de la infancia y la juventud es una de las estrategias más poderosas para romper el vínculo entre la desigualdad económica y la falta de movilidad intergeneracional.¹²⁹ Invertir en los primeros años de la educación puede tener, por tanto, un gran impacto en la reducción de la desigualdad, otorgando a los menores en mayor situación de pobreza más posibilidades al inicio de sus vidas.¹³⁰

El gasto en salud tiene repercusiones muy importantes para las mujeres y las niñas. Además, las mujeres suelen proporcionar servicios de cuidados de salud no remunerados para sus familias, por lo que cuentan con menos tiempo para desempeñar trabajos remunerados. Con frecuencia, las mujeres emplean sus ingresos para pagar por los servicios de salud y, para las mujeres en situación de pobreza, esto reduce aún más los recursos de que disponen para cubrir sus propias necesidades.¹³¹

Cuando el diseño del gasto social tiene perspectiva de género, puede tener un gran impacto en la vida de las mujeres. En India, el programa *Midday Meal* ayudó a aligerar las cargas de las madres trabajadoras al aportar a sus hijos un almuerzo en el colegio.¹³²

Por el contrario, cuando no se ofrecen estos servicios, las mujeres asumen una doble carga por su papel como cuidadoras: en 66 países, las mujeres emplean como mínimo diez semanas adicionales cada año en trabajos no remunerados, lo que limita el tiempo y las posibilidades de percibir un sueldo digno.¹³³ La cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres es enorme y, por lo general, no está reconocido; los servicios públicos pueden suponer un gran apoyo a las mujeres y las familias.¹³⁴ Los menores también padecen las consecuencias de la falta de servicios de cuidados adecuados. Al menos 35,5 millones de niños y niñas menores de

5 años se quedan habitualmente solos o bajo el cuidado de otro menor. Los niños y niñas más pobres, en los países más pobres, tienen más probabilidades de quedarse solos.¹³⁵

Presupuestos con perspectiva de género

Dadas las enormes disparidades de género en el acceso a los servicios y en los resultados del desarrollo, es imperativo aumentar y mejorar el gasto en la elaboración de los presupuestos. Una manera en que los Gobiernos pueden mejorar la orientación del gasto hacia las necesidades de las mujeres es mediante la elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Hacerlo puede ayudar a analizar el impacto de los presupuestos actuales y a aumentar el gasto dirigido directamente a las mujeres, tales como la educación, la salud materna, los derechos reproductivos y la lucha contra la mutilación genital femenina, los abusos sexuales y la violencia contra las mujeres. Analizar el gasto una perspectiva de género también puede ayudar a garantizar que el gasto tenga el impacto deseado en términos de equidad y acceso a los servicios.

En todo el mundo se han realizado grandes esfuerzos para promover la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y para analizar en qué medida el gasto se dirige de manera directa o indirecta a las mujeres. Un informe reciente del FMI¹³⁶ señala numerosos ejemplos positivos, e indica que los presupuestos con perspectiva de género pueden promover la igualdad de género. Si bien las políticas específicas varían, los datos empiezan a dejar claro cómo esta importante herramienta puede ayudar a garantizar que la elaboración de presupuestos nacionales tenga en cuenta las necesidades de las mujeres y apoye sus derechos.¹³⁷

¿Cuáles son los resultados del Índice CRI para el pilar de gasto?

Tabla 3: Resultados del Índice CRI para gasto – primeros y últimos diez países

PAÍSES MEJOR CLASIFICADOS (GASTO EN SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL)		PAÍSES PEOR CLASIFICADOS (GASTO EN SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL)	
Polonia	1	República del Congo	148
Finlandia	2	Nepal	149
Francia	3	Vanuatu	150
Irlanda	4	India	151
Dinamarca	5	Afganistán	152
Austria	6	Laos	153
Bélgica	7	Pakistán	154
Alemania	8	República Democrática del Congo	155
República Checa	9	Myanmar	156
Japón	10	Nigeria	157

Algunos países hacen uso del gasto social como estrategia para redistribuir la riqueza y los ingresos, lo cual tiene un impacto importante sobre la desigualdad. En la parte superior de la clasificación hay dos grandes grupos de países. Primero, destaca un grupo de países de la OCDE, conocidos por su compromiso firme y a largo plazo con las inversiones sociales; este grupo incluye Finlandia, Alemania y Dinamarca.¹³⁸ El segundo es un grupo de países con un gasto elevado (e ingresos altos¹³⁹) en América Latina.

Costa Rica, que ocupa el quinto lugar en el pilar de gasto social para la región latinoamericana, obtiene buenos resultados en gasto público progresivo.¹⁴⁰ Sus inversiones han hecho posible construir un sistema de salud universal de gran calidad, con resultados que no tienen nada que envidiar (e incluso superan) a los de algunos de los países más ricos del mundo.¹⁴¹ Además, la adopción de importantes medidas de protección social, con carácter progresivo, contribuyen a la redistribución de ingresos¹⁴² y desempeñan un papel clave en la cohesión social.¹⁴³

Uruguay¹⁴⁴ ocupa la tercera posición, con un gasto elevado en salud y educación, y con unos sistemas de protección social bien desarrollados y con una amplia cobertura.¹⁴⁵ Argentina es el país que mejor puntúa en el Índice CRI 2018 respecto al gasto dentro de los países latinoamericanos, y es reconocida por el diseño progresivo de su gasto social. Sin embargo, los recortes en el gasto incluidos en las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno actual amenazan con revertir esta tendencia;¹⁴⁶ si bien los datos empleados en el Índice CRI 2018 corresponden a 2015, por lo que estos recortes no se ven reflejados aún en los resultados del Índice, sí lo estarán en los próximos años.¹⁴⁷ Se ha demostrado que el gasto social de estos tres países en su conjunto tiene un gran impacto en la reducción de la desigualdad,¹⁴⁸ constituyendo una tendencia emergente en América Latina, donde el gasto público es responsable de hasta un 20% de la disminución de la desigualdad desde el año 2000.¹⁴⁹ No obstante, con el giro hacia políticas de centro-derecha en muchos de estos países, está por ver si el gasto social se mantiene a niveles tan elevados. Los datos sobre gasto para la región de América Latina en la presente edición del Índice CRI no son lo suficientemente actuales como para constatar si es así, pero cualquier cambio será recogido en futuras revisiones del índice.

En general, persisten grandes diferencias entre los niveles y tipos de gasto social en todos los niveles de ingreso. Entre los países que obtienen buenos resultados en el pilar del gasto, el PIB per cápita oscila considerablemente, lo cual demuestra que no hay una relación directa entre el nivel del PIB y el nivel de gasto social.

Una mención especial la merecen los países de renta baja que, sin embargo, tienen niveles de inversión social elevados, en un esfuerzo por utilizar sus limitados recursos para reducir la desigualdad. Etiopía es un buen ejemplo, con una sexta posición mundial en el subindicador correspondiente a la educación. Lo más destacable de Etiopía es que, como ocurre con otros países de renta baja que obtienen buenos resultados en el CRI, destina mucho más a políticas redistributivas y pro-pobres que lo que dedicaron muchos países ricos cuando se encontraban en una fase similar de desarrollo.¹⁵⁰ Por su parte, Camboya obtiene buenos resultados en cuanto a reducción de la desigualdad, pero lo hace con un nivel de gasto social muy bajo.

Por el contrario, algunos países de renta media invierten hoy en día mucho menos de lo que invertían los países actualmente ricos cuando estaban en una fase similar de su desarrollo económico. Por ejemplo, Indonesia es más rica hoy (en términos de ingreso per cápita) que los EE.UU. cuando aprobó la Ley de Seguridad Social en 1935.¹⁵¹ El Presidente Jokowi se ha comprometido públicamente a reducir la desigualdad: desde la primera edición del Índice CRI en 2017, su Gobierno ha aumentado el gasto en salud y el salario mínimo, lo cual es un paso en la buena dirección,¹⁵² pero necesita hacer mucho más para aumentar la recaudación fiscal, que se sitúa en un mero 11% del PIB.

Este es el caso también de Nigeria, Pakistán e India, todos ellos países de renta media, que podrían permitirse elevar su gasto actual en salud, educación y protección social, lo que explica que obtengan unos resultados muy bajos en la presente edición del índice. La población de estos tres países asciende a 1 600 millones de personas, por lo que, si quisieran, podrían lograr un impacto enorme en la reducción de la pobreza y la desigualdad mundial. Curiosamente, en los tres países se ha visto un rápido aumento de la educación privada, en ausencia de una buena provisión de servicios por parte del Estado, lo que redundará en una mayor desigualdad económica y de género.¹⁵³

Nigeria ocupa el último lugar del índice en cuanto a gasto social, con unos resultados en materia social muy pobres para sus ciudadanos. Más de diez millones de menores en Nigeria no están escolarizados, el 60% de los cuales son niñas.¹⁵⁴ Menos del 1% de las niñas más pobres consigue terminar la educación secundaria, frente a un 27% de los niños.¹⁵⁵ Nigeria tiene un ingreso per cápita similar al de Bolivia y, sin embargo, en Nigeria uno de cada diez menores muere antes de cumplir los 5 años, frente a uno de cada 27 menores en Bolivia.¹⁵⁶

También hay casos atípicos en este ámbito, es decir, Gobiernos que realizan un gasto elevado en servicios sociales, pero sin que se traduzca en una disminución de la desigualdad (o al

menos sin favorecer a las personas más pobres). El ejemplo más claro es el de EE.UU., con un gasto en salud muy elevado (incluso para los estándares de los países más ricos de la OCDE) y unos indicadores de gasto total en salud favorables, y sin embargo los datos indican que dicho gasto tiene un impacto mucho menor en la reducción de la desigualdad que en otros países de la OCDE.¹⁵⁷ Esto se debe en gran parte al complejo sistema de privatización de la salud en los EE.UU. y al elevado coste de los servicios de salud,¹⁵⁸ y puede tener un impacto devastador: en 2013, dos millones de norteamericanos cayeron en banca rota a causa de las facturas por servicios médicos, y la deuda médica se ha convertido en la causa principal de la bancarrota personal.¹⁵⁹

¿Qué países protagonizaron los mayores aumentos y los mayores recortes en el gasto?

Esta sección presenta los diez países donde más ha aumentado el gasto, y los diez países donde más se ha recortado, en cada una de las tres áreas: educación, salud y protección social. Para consultar la clasificación de los 157 países, ver el Anexo 1.

Tabla 4: Gasto en educación – los mayores incrementos y recortes, Índice CRI 2017-2018

RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE MÁS HAN INCREMENTADO SU GASTO (%)		RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE MÁS HAN RECORTADO SU GASTO (%)	
Georgia	+5,96	República Democrática del Congo	-8,76
Santa Lucía	+5,85	Singapur	-5,61
Guinea	+5,46	Vanuatu	-5,52
San Vicente y las Granadinas	+4,66	Sierra Leona	-5,12
República Dominicana	+4,40	Namibia	-3,95
Liberia	+4,06	República Kirguisa	-3,71
Uruguay	+3,62	Zambia	-3,70
Santo Tomé y Príncipe	+3,07	Zimbabwe	-3,61
Bhután	+3,03	Samoa	-3,29
Camerún	+3,01	Mali	-3,26

Tabla 5: Gasto en salud – los mayores incrementos y recortes, Índice CRI 2017-2018

RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE MÁS HAN INCREMENTADO SU GASTO (%)		RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE MÁS HAN RECORTADO SU GASTO (%)	
Kazajstán	+4,14	Samoa	-9,76
Colombia	+4,11	República Democrática del Congo	-4,82
Lituania	+3,71	San Vicente y las Granadinas	-3,64
Georgia	+3,45	Barbados	-2,94
Líbano	+3,29	Australia	-2,81
Santo Tomé y Príncipe	+3,25	Benín	-2,63
Indonesia	+3,22	Vanuatu	-2,45
Tailandia	+3,20	Yibuti	-2,37
Níger	+2,99	Gambia	-2,15
Jamaica	+2,86	Singapur	-2,06

Tabla 6: Gasto en protección social – los mayores incrementos y recortes, Índice CRI 2017-2018

RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE MÁS HAN INCREMENTADO SU GASTO (%)		RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE MÁS HAN RECORTADO SU GASTO (%)	
Ucrania	+15,10	Mongolia	-5,45
Vietnam	+8,52	Serbia	-4,83
Islandia	+7,32	Azerbaiyán	-4,28
Trinidad y Tobago	+7,11	Tayikistán	-3,67
Australia	+7,05	Malta	-3,40
Chipre	+5,90	China	-3,32
Angola	+4,95	Ghana	-3,26
Barbados	+4,82	Afganistán	-3,00
Bielorrusia	+4,39	República del Congo	-2,95
Bhután	+4,39	Bulgaria	-2,56

¿Qué miden realmente los indicadores sobre gasto social del CRI?

El pilar sobre gasto social del CRI se compone de dos mediciones: el nivel de gasto total, y el impacto de dicho en la reducción de la desigualdad.

Indicador 1: Nivel de compromiso de los Gobiernos con el gasto en educación, salud y protección social

Este indicador mide el gasto total para cada uno de los tres sectores (salud, educación y protección social), como porcentaje del presupuesto total anual de los Gobierno. Se escogió esta medida por ser la más indicada para valorar el *compromiso* de los Gobierno con el gasto en estos sectores, preferible a otras medidas como el porcentaje del PIB o el gasto per cápita, que hubieran penalizado a los países de renta baja, beneficiando a los de renta alta que pueden recaudar más y, por tanto, gastar más.

El Índice examinó el porcentaje de gasto total de los Gobiernos en educación y salud en cada uno de los 157 países, en base a las cifras de los presupuestos más recientes (de 2017), siempre que estuvieran disponibles. Más del 90% de los datos correspondientes a educación y salud pertenecen al periodo 2015–17, pero solo el 70% de los datos de protección social son recientes. Esto indica la necesidad de apoyar a la OIT en el seguimiento del gasto en protección social.

Indicador 2: Progresividad del gasto en educación, salud y protección social

Dentro de un mismo sector, el gasto puede ser progresivo o, en algunos casos, regresivo. En general, en los tres sectores analizados en este informe, el gasto en salud y educación es ligeramente más progresivo que el gasto en protección social, ya que el gasto es mayor tanto en términos relativos como absolutos en aquellos servicios de los que hacen uso con mayor frecuencia las mujeres y los hombres que viven en situación de pobreza. Este es el caso de la educación primaria y la asistencia sanitaria primaria.

El segundo indicador en el pilar de gasto pretende recoger los distintos impactos que este puede tener, midiendo el impacto real o probable del gasto sobre la desigualdad en cada país y para cada uno de los tres sectores. La medición se ha realizado, siempre que ha sido posible, en base a estudios nacionales.¹⁶⁰ Cuando no ha sido posible acceder a este tipo de estudios, el Índice ha utilizado las estimaciones mundiales disponibles más fiables.¹⁶¹

Limitaciones del Índice CRI respecto a los indicadores de gasto social

El Índice CRI mide los compromisos presupuestarios en dos tercios de los países, y el gasto real en el tercio restante. No es posible obtener datos precisos y actualizados sobre gasto real, especialmente en los países pobres. A menudo, existen discrepancias entre lo presupuestado y lo que en realidad se gasta. Raras veces se hacen públicas las cantidades ejecutadas y, cuando se hacen, suelen publicarse después de transcurrido bastante tiempo. DFI y Oxfam trabajan con organizaciones en todo el mundo para hacer un seguimiento del gasto presupuestario y para exigir a los Gobiernos que rindan cuentas cuando no cumplen con el gasto comprometido,¹⁶² pero esto no se puede reflejar de manera directa en el índice.

La elaboración del índice no incluyó ninguna medida directa sobre la calidad de los servicios. Si tuvimos en cuenta, por ejemplo, los niveles de gasto de los hogares en servicios de salud, o cuánto gastan en educación terciaria, pero llegamos a la conclusión de que no era recomendable o técnicamente posible incluir estas mediciones en esta fase del índice.¹⁶³ En su lugar, decidimos incluir el impacto del conjunto de los servicios: esto es, en qué medida el gasto en cada área se gestiona para reducir la desigualdad. Esto constituye un buen proxy para la calidad de los servicios ya que, si un país tiene un gasto elevado en salud, pero con poco impacto en la desigualdad, es razonable concluir que ese gasto no está ayudando todo lo que pudiera a las personas más pobres frente a las ricas.

Cabe señalar que los estudios sobre impacto no están disponibles para todos los países incluidos en el índice; en los casos en los que sí se dispone de dichos estudios, estos se han utilizado, pero cuando no están disponibles, hemos utilizado los datos de un estudio mundial de 150 países durante 30 años, para establecer los niveles medios de incidencia en la educación, la salud y la protección social.¹⁶⁴

El Índice CRI todavía no cuenta con un indicador sobre género en el pilar de gasto. Esto se debe a que, de momento, no existen datos suficientes. Algunos estudios del FMI, ONU Mujeres y otros indican que, en breve, podría haber suficientes datos disponibles, en cuyo caso las próximas ediciones del índice podrán incluir un indicador sobre género para el pilar de gasto.

Cuadro 5. Aumento del gasto en vivienda: una buena manera de reducir la desigualdad

El coste de la vivienda es la partida más cuantiosa de los presupuestos de muchos hogares pobres en todo el mundo. Además, especialmente para los 900 millones de personas que viven en barrios marginales, una vivienda precaria es una de las causas principales de los problemas de salud, lo cual supone un coste añadido. Por lo tanto, el gasto público en vivienda puede aumentar de manera muy significativa los ingresos disponibles de los hogares; como resultado, este gasto (especialmente en la construcción y mantenimiento de viviendas sociales) reduce la desigualdad de ingresos más que el gasto en educación, salud o protección social.¹⁶⁵

El gasto público en vivienda (en concreto en construcción y mantenimiento) solo se recoge parcialmente en el Índice CRI: se incluyen las ayudas a la vivienda, pero no el gasto en construcción y mantenimiento de vivienda pública.¹⁶⁶ No obstante, DFI ha recopilado este año datos sobre gasto real en vivienda para 79 países, en base a datos del ADB, la Comisión Económica para América Latina y Caribe (ECLAC/CEPAL), Eurostat, el FMI y la OCDE. Un total de 59 de estas variables son del año 2016, 19 son de 2015 y una de 2014.

Panamá cuenta con la mayor partida presupuestaria destinada a vivienda entre los 79 países, y Honduras la más baja. Entre medias, hay algunas tendencias generales interesantes.

Casi todos los países que destinan una gran parte de su presupuesto a vivienda son países en desarrollo, incluidos países en Asia (China, Tayikistán, Singapur, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Georgia, Bután, Tailandia y Myanmar); América Latina (Panamá, México, Argentina, Trinidad, Costa Rica, Bolivia y Chile); y África (Sudáfrica, Seychelles, Egipto y Mauricio). La mitad de estos países son de renta media, y una cuarta parte de ellos son de renta alta o media-baja. Solo tres países de la OCDE (Chile, Chipre y México) se encuentran entre el tercio que mejor puntúa.

Por otro lado, el 80% de los países que menos presupuesto destinan a la vivienda son países de la OCDE (con Grecia, Dinamarca, Suiza, Israel y Bélgica con los niveles más bajos). Solo cinco países de renta media de los 35 ocupan una posición en el tercio más bajo. Los tres países de renta baja en este grupo están repartidos entre los grupos con resultados más positivos, medios y bajos.

En todos los países de la OCDE, nuestros cálculos indican que el gasto en vivienda se ha reducido sustancialmente en las últimas décadas, desde alrededor de un 5% del PIB en los años 70 a tan solo el 0,7% en 2016. Esto refleja una tendencia más amplia en muchos países a abandonar las políticas de vivienda social (construida por organizaciones públicas o sociales) para abrazar sistemas de ayudas a la construcción privada de vivienda accesible mediante avales o ayudas a las personas sin recursos para afrontar el coste de la vivienda. Este modelo, mercantil y privatizado, es mucho menos efectivo a la hora de reducir la desigualdad y la pobreza. Nuestros cálculos indican que el gasto en vivienda también ha caído en Asia, desde un 4% del PIB aproximadamente en el año 2000 a un 3% en 2015, si bien en América Latina ha aumentado cerca de un 1% del PIB, hasta alcanzar el 3,7%.

Hay otras áreas de gasto que son importantes en la reducción de la desigualdad, y que tampoco han sido incluidas en el Índice CRI, tales como el gasto en el sector agrario y en vivienda (ver cuadro 5). Nuestra intención es incluir estos ámbitos en futuras ediciones del informe, incluso si no ha sido posible incluirlos en el propio índice.

Por último, el Índice CRI no pretende medir otros gastos públicos “negativos”, tales como el presupuesto militar o el pago de la deuda externa, que a menudo son partidas importantes. El pago de la deuda ha vuelto a convertirse en una importante pérdida de recursos para los países en desarrollo,¹⁶⁷ con Kenia, por ejemplo, destinando casi el 50% de sus ingresos al pago de la deuda.¹⁶⁸

2 REDUCIR LA DESIGUALDAD MEDIANTE POLÍTICAS TRIBUTARIAS

Índice CRI 2018

El Índice CRI 2018 ha incorporado en este pilar un nuevo indicador que mide las prácticas tributarias nocivas, para reflejar en qué medida los países se comportan de manera permisiva con la evasión y la elusión fiscal. En cuanto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), apenas ha habido variaciones respecto al año pasado, con ciertos aumentos de los tipos en algunos países, y con bajadas en otros tantos. En relación al impuesto de sociedades (IS), los tipos se han mantenido estables respecto a la edición del índice de 2017. Destaca Hungría por sus malos resultados, con una reducción del IS del 19% al 9%. Respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el promedio de los tipos máximos ha continuado su ascenso, ya que Gobiernos de todo tipo de países han seguido aumentando los tipos. Entre tanto, la recaudación de estos impuestos más progresivos ha continuado bajando en su conjunto, alejándose de su potencial para reducir la desigualdad.

Impacto de la fiscalidad progresiva en la reducción de la desigualdad en todo el mundo: base empírica

La recaudación fiscal a través de un sistema tributario progresivo, es decir, de manera que quienes más ganan soporten una mayor carga fiscal, tiene un impacto clave en la desigualdad. Por ello, exigir una fiscalidad progresiva es una parte muy importante de las campañas de Oxfam para reducir la desigualdad. La fiscalidad desempeña un triple papel en la lucha contra la desigualdad en la sociedad. Primero, al recaudar más de quienes más tienen, la fiscalidad contribuye directamente a reducir la brecha entre ricos y pobres. Segundo, si los recursos recaudados mediante una fiscalidad progresiva se emplean en beneficio de las personas en mayor situación de pobreza, se contribuye a reducir la desigualdad. Y tercero, la fiscalidad puede desempeñar un papel fundamental en estructurar la economía de manera que se reduzcan las desigualdades de mercado, al disminuir los incentivos a los beneficios excesivos, a la rentabilidad de los accionistas y a las primas que reciben los ejecutivos. La fiscalidad puede utilizarse también para incentivar la inversión en nuevas tecnologías y distintos tipos de negocio que permitan a los trabajadores recibir una parte de los beneficios, tener una mayor participación en las empresas y ayudar a construir una economía más sostenible y humana.

La primera medida que deben tomar los países es adoptar un sistema tributario progresivo sobre el papel. Esto significa que los tipos impositivos sean mayores para quienes más ganan, así como que los umbrales y las exenciones sean de carácter progresivo. No obstante, muchos países suspenden en este primer paso, al establecer tipos impositivos muy bajos para las empresas y las rentas más altas. Bulgaria, por ejemplo, aplica un tipo plano de IRPF del 10% para cualquier nivel de ingresos, y un tipo de impuesto de sociedades del 10%. La tendencia general es negativa, ya que muchos países se han sumado a una carrera a la baja en los tipos impositivos, junto con otras medidas de exenciones e incentivos fiscales. En 1990, el tipo medio en el impuesto de sociedades en los países del G20 era el 40%, y en 2015, el 28,7%.¹⁶⁹ En la República Dominicana, el volumen de exenciones otorgadas cada año a las empresas del sector turístico, la industria, y las empresas en zonas francas o cerca de la frontera hubiera sido suficiente para aumentar el presupuesto en salud del país en un 70,3%, o para multiplicar por cinco el presupuesto dedicado al abastecimiento de agua en 2017.¹⁷⁰

No obstante, contar con un sistema fiscal progresivo sobre el papel tan solo es el primer paso. Obviamente, lo que refleje el papel es irrelevante si los Gobiernos recaudan los impuestos de manera regresiva. Datos sobre productividad fiscal muestran que, por cada aumento del PIB, los países recaudan, de media, alrededor del 40% del IVA e impuestos a las ventas que deberían, pero solo el 14% del impuesto de sociedades y el IRPF. Esto es un problema

especialmente grave en los países de renta baja, donde solo se recauda alrededor del 10% de cada dólar adicional del PIB. Como el IVA es un impuesto regresivo en casi todos los casos, una mayor recaudación por IVA hace que el sistema sea más regresivo en su conjunto.

La falta de recaudación suele deberse a las muchas exenciones y acuerdos favorables que hacen que las personas más ricas y las grandes empresas no paguen lo que les corresponde. También se debe a al efecto de factores internacionales, como la red mundial de paraísos fiscales y el secreto bancario que les ampara, que hacen posible la evasión y la elusión fiscal. Por todo ello, el impacto que tienen los impuestos sobre la desigualdad hoy en día puede distar mucho de lo que el sistema tributario de un país establezca sobre el papel.

Por último, los países deben recaudar de la manera más progresiva posible. La recaudación fiscal de muchos países es realmente baja. La recaudación de la India apenas representa el 17,7% de su PIB; Indonesia recauda el 11%, mientras Sudáfrica logra recaudar el 24,7%. Si Indonesia aumentara su recaudación en tan solo un 2% del PIB, podría más que duplicar su gasto en salud.¹⁷¹ Muchos países optan por aumentar su recaudación mediante el IVA, que es un impuesto regresivo que puede aumentar la desigualdad.

Estos hechos explican nuestra elección de indicadores para el pilar de fiscalidad del Índice CRI, que miden:

- En qué medida un país diseña su sistema tributario con una intención progresiva;
- En qué medida la recaudación es progresiva;
- La cantidad de impuestos recaudados en relación a su potencial;
- Si un país promueve o no prácticas tributarias nocivas.

Para evaluar si un sistema tributario es progresivo en distintos países, DFI y Oxfam han elaborado una gran base de datos fiscales de 157 países en el marco del Índice CRI. Se trata de la primera base de datos pública con información exhaustiva sobre tipos impositivos y umbrales; con una mayor cobertura geográfica sobre diferentes tipos de impuestos, y los datos más recientes sobre la recaudación real respecto a la recaudación potencial.

Cuadro 6: El observatorio de Justicia Fiscal

Oxfam se ha asociado con la Red de Justicia Fiscal de África para desarrollar el Observatorio de Justicia Fiscal (FTM, por sus siglas en inglés).¹⁷² El FTM utiliza una metodología detallada para realizar una valoración exhaustiva de los sistemas fiscales nacionales, tanto de la recaudación como del gasto público, complementando así al Índice CRI al aportar una clasificación más detallada sobre uno de los ámbitos específicos de la lucha contra la desigualdad: la justicia fiscal. Los informes nacionales¹⁷³ de diversos países en desarrollo desvelan algunas tendencias.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales es un problema muy importante, ya que el número de contribuyentes en países como Bangladesh o Pakistán es muy bajo. En lugar de ampliar la base fiscal haciendo que las empresas y los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales, los países tienden a depender del IVA y otros impuestos indirectos. Pakistán ha aumentado su dependencia de los impuestos indirectos en un 48% durante los últimos tres años. Si bien la tributación indirecta es más fácil de aplicar y recaudar, es enormemente regresiva e impone una carga fiscal desproporcionada sobre los grupos más pobres de la sociedad.

Todos los países sufren pérdidas importantes de recaudación a causa de numerosas exenciones fiscales (sobre todo las que benefician a las grandes empresas) que no benefician a las personas más pobres, sino que ayudan a aumentar los ingresos y beneficios de los más ricos. Por ejemplo, Uganda dejó de recaudar un 15,7% entre 2010 y 2017 a causa de los incentivos y exenciones fiscales.¹⁷⁴ Los países deben realizar sus propios estudios antes de aplicar exenciones.

A pesar de que la riqueza y el patrimonio constituyen oportunidades reales para aumentar la recaudación, apenas están sujetos a tributación. Esto se debe a la fragilidad de las administraciones tributarias, a la elusión fiscal por parte de las personas más ricas, y en general a unos niveles bajos de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Una administración tributaria solvente es fundamental para aumentar la recaudación de impuestos necesarios para financiar los servicios públicos.

El enfoque de género no suele tenerse en cuenta en los sistemas tributarios, y como consecuencia, las mujeres y las niñas se ven obligadas a tributar de manera injusta, mientras que necesitan unos servicios públicos mejor financiados. Una política interesante elaborada en Bangladesh es la adopción de un umbral más bajo de ingresos exentos de tributación para las mujeres, teniendo en cuenta la brecha salarial y su mayor participación en empleos informales en la economía.¹⁷⁵ Las administraciones públicas deben tomar medidas para introducir la perspectiva de género en las políticas públicas, al mismo tiempo que deben afrontar las limitaciones culturales y religiosas para promover la participación de las mujeres en la sociedad y en el mercado laboral.

Por último, un sistema tributario solo podrá ser justo si el proceso de recaudación es transparente y los datos fiscales son de acceso público. El derecho de la ciudadanía a la información debe aplicarse a las políticas fiscales. Los Gobiernos deben recopilar y publicar la información sobre los sistemas tributarios de manera que sea accesible para su análisis (por ejemplo, con datos desglosados) y fácil de entender por el público en general.

El enfoque del FTM se ha elaborado mediante un proceso participativo, basándose en la experiencia de organizaciones locales e internacionales. El uso de un marco de análisis común permite hacer comparaciones entre políticas y prácticas fiscales a lo largo del tiempo y entre países. En 2016, Oxfam publicó el informe *Fair Tax Monitor Composite Report*¹⁷⁶ con conclusiones generales e informes nacionales para Bangladesh, Pakistán, Senegal y Uganda.

Actualmente, se está revisando el FTM para incluir países en desarrollo con distintos contextos sociales y económicos, ampliando así la base de sistemas fiscales a comparar, lo que aporta una mayor relevancia al proyecto. Se espera que, en breve, se publique la siguiente serie de informes nacionales, que incluirán Camboya, Nigeria, Vietnam, Túnez y los Territorios Ocupados Palestinos.

Las políticas fiscales también exacerban la desigualdad de género y entre los jóvenes

En casi todos los países, la manera en la que están diseñadas las políticas fiscales empeora la desigualdad de género.¹⁷⁷ Esto ocurre cuando las mujeres son consideradas un mero añadido a sus esposos al establecer los umbrales tributarios, o cuando las parejas están obligadas a tributar conjuntamente. También está relacionado con el diseño del sistema tributario: las exenciones y la elusión fiscal de las grandes empresas hacen que, en muchos países, los pequeños negocios que suelen gestionar las mujeres soporten de facto una mayor carga tributaria, mientras que las grandes empresas (gestionadas habitualmente por hombres) soporten una carga tributaria menor, al igual que ocurre con los ingresos derivados del alquiler de tierras o propiedades, que reciben por lo general los hombres. La mayoría de los países también recaudan impuestos sobre las ventas y el IVA. Estos suelen gravar más a las mujeres, que gastan una proporción mayor de sus ingresos en productos de consumo para sus familias, algo que puede aliviarse mediante exenciones para productos básicos y alimentos.¹⁷⁸

Las políticas fiscales pueden aplicarse de manera que beneficien o discriminen a las y los jóvenes. Los hombres y mujeres jóvenes suelen estar al cargo de pequeños negocios y consumir una mayor parte de sus ingresos, por lo que los impuestos indirectos como el IVA les afectan más. En concreto, las mujeres jóvenes se ven afectadas en mayor medida, ya que suelen sufrir una doble discriminación por su edad y su género.

Resulta escandaloso que muy pocos Gobiernos realicen estudios de manera regular sobre el impacto de sus políticas tributarias sobre el género y la juventud (como sí se hace respecto al gasto)¹⁷⁹, y que, como consecuencia, no existan bases de datos de países que puedan utilizarse para analizar el impacto de las políticas tributarias sobre la desigualdad de género. Existen algunas honrosas excepciones en este panorama: por ejemplo, el Gobierno sueco elabora su propio análisis de género sobre el impacto de cada presupuesto, y en países como Sudáfrica y el Reino Unido, organizaciones de la sociedad civil elaboran sus propios análisis del impacto potencial de los cambios en las políticas tributarias sobre las mujeres, y realizan sugerencias sobre presupuestos alternativos con perspectiva de género.¹⁸⁰ En general, diseñar el sistema fiscal para hacerlo más progresivo, asegurando que los impuestos más progresivos sean los que verdaderamente se recaudan, ayudaría a combatir la desigualdad de género. No obstante, todos los Gobiernos deberían abordar sus políticas fiscales desde una perspectiva que abarque las cuestiones de género y juventud para garantizar que reduzca la desigualdad.

¿Cuáles son los resultados generales para el pilar de fiscalidad en el Índice CRI?

Tabla 7: Ranking en materia de políticas fiscales en el Índice CRI: los diez países mejor y peor clasificados

PAÍSES MEJOR CLASIFICADOS (PROGRESIVIDAD DE LAS POLÍTICAS FISCALES)		PAÍSES PEOR CLASIFICADOS (PROGRESIVIDAD DE LAS POLÍTICAS FISCALES)	
Australia	1	Letonia	148
Dinamarca	2	Bahréin	149
Sudáfrica	3	Guinea	150
Georgia	4	Guinea-Bissau	151
Bélgica	5	Omán	152
Alemania	6	Bhután	153
Malawi	7	Belice	154
Finlandia	8	Kosovo	155
Austria	9	Uzbekistán	156
Noruega	10	Singapur	157

La conclusión más destacable es que ninguno de los 157 países realiza un buen desempeño en cuanto a reducción de la desigualdad mediante sus políticas fiscales. En general, la puntuación media es de 0,6 sobre 1, lo que indica que los países tienen mucho margen de mejora. El desempeño es especialmente malo en cuanto al impacto del sistema tributario sobre la desigualdad, ya que casi todos los países siguen teniendo sistemas tributarios regresivos, con una elevada dependencia de la tributación indirecta. Sin embargo, algunos países han logrado disminuir su Gini mediante las políticas fiscales, incluso sin llegar a recaudar todo lo que deberían (en promedio, la mayoría apenas recauda dos terceras partes de su potencial). Esto demuestra que los países con una estructura fiscal progresiva y que realizan importantes esfuerzos para recaudar, pueden lograr tener un impacto muy relevante en la reducción de la desigualdad gracias a su política fiscal.

En general, en cuanto a tributación, los datos indican que la mayor parte de los países que tienen un buen desempeño son países de renta alta de la OCDE. Sus puntuaciones reflejan en gran parte la incidencia de carácter más progresivo de sus sistemas tributarios en la reducción de la desigualdad: recaudan una proporción mayor proveniente de los impuestos sobre la renta, de naturaleza más progresiva, sobre una base fiscal más amplia compuesta por individuos y empresas con suficientes ingresos para tributar. Además, suelen tener un buen resultado en cuanto a la recaudación (a pesar de algunas excepciones notables, como los EE.UU.). El país de renta baja con mejor resultado es Malawi, con un sistema fiscal

relativamente progresivo sobre la renta de las personas físicas, y una recaudación relativamente alta respecto a su potencial.

Entre los países que peores resultados obtienen están Bahréin y Vanuatu, que no aplican el impuesto sobre las rentas de las personas físicas ni de sociedades. Otros países con resultados flojos tienen tipos impositivos muy bajos o planos (es el caso de países de Europa del Este y antiguos Estados Independientes de la Commonwealth) y recaudan muy pocos impuestos, haciendo que todo su sistema tributario sea mucho menos progresivo. Muchos de estos países obtienen también unos resultados muy pobres en cuanto a la recaudación real en relación a su potencial.

¿Cuáles son las tendencias principales?

Algunos países como Brasil, Rumanía y Trinidad redujeron el año pasado el tipo general del **IVA - impuesto sobre el valor añadido**, pero otros tantos lo incrementaron (especialmente Colombia y Sri Lanka). A su vez, determinados países, como Burkina Faso y Senegal, aplicaron exenciones en este tipo de impuesto de manera más favorable para los sectores más pobres de la población, y Camboya elevó el umbral mínimo para su aplicación, logrando que los pequeños comerciantes queden exentos. En general, el tipo medio bajó ligeramente al 15,5%.

En lo que respecta al tipo nominal del **impuesto de sociedades**, el promedio global disminuyó ligeramente, pasando del 24,65% al 24,48%. Si bien en 2017, 15 países aplicaron rebajas frente a los 10 que lo subieron, algunos de los recortes aplicados solo afectaban a pequeñas empresas (como es el caso en Australia), lo que podría ser algo positivo,¹⁸¹ y la mayoría fueron relativamente pequeños, por debajo de 2,5 puntos porcentuales. Estos recortes han sido más frecuentes en países con economías más avanzadas.¹⁸² Hungría se sitúa en cabeza con el peor rendimiento en el impuesto de sociedades, al haber disminuido el impuesto de sociedades del 19% al 9% de golpe, si bien varios otros países como Israel, Noruega, Pakistán, España y el Reino Unido han ido reduciéndolo de manera gradual a lo largo de los últimos 4 a 8 años, por lo que la reducción acumulada es muy significativa. Por otra parte, Colombia, Malí, Jordania, Grecia y Perú son algunos de los países que lo han aumentado. No obstante, estos datos positivos se ven eclipsados por el recorte que los Estados Unidos ha aplicado en el impuesto de sociedades a nivel federal, pasando del 35% al 21%. Este cambio aparecerá reflejado en la edición de 2019 del Índice CRI, y la gran pregunta es si muchos países seguirán su ejemplo (hasta ahora, y basándonos en los códigos fiscales de 2018, no parece que vaya a ser así, ya que solo Argentina y Bélgica han disminuido el tipo del impuesto de sociedades, mientras que Burkina Faso, Ecuador, Corea del Sur, Letonia y Taiwán lo han subido).

Tabla 8: Aumentos y rebajas en el Impuesto de Sociedades (IS), 2017

PRINCIPALES INCREMENTOS EN EL TIPO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES		PRINCIPALES RECORTES EN EL TIPO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES	
Colombia	+9%	Hungría	-10%
Jordania	+5%	Francia	-5,3% *
Malí	+5%	Chad	-3%
Sudán del Sur	+5%	Noruega	-3%
Grecia	+3%	España	-2,5%
Eslovenia	+2%	Egipto	-2,5%
Perú	+1,5%	Israel	-2,5%
Japón	+1%	Australia	-2,1% *
Chile	+1%	Luxemburgo	-2%
Marruecos	+1%	Croacia	-2%
		Tayikistán	-2%
		Vietnam	-2%
		Reino Unido	-1%

*pequeñas empresas

Respecto al **impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)**, la tendencia predominante en los últimos años de aumentar los umbrales máximos ha continuado en 2017, con un aumento de tipos máximos desde el 30,5% al 30,8%. Un buen número de Gobiernos de países con niveles de renta muy distintos ha aumentado sus tipos máximos en el IRPF entre 2016 y 2017, con Mongolia y Guayana a la cabeza. Muchos menos Gobiernos (tan solo Chile, República del Congo, Croacia y Egipto) han reducido sus tipos máximos. Si miramos los datos de 2018, que serán incluidos en la próxima edición del CRI, ningún país hasta la fecha ha reducido sus tipos en el IRPF, a excepción de EE.UU. Entre los países que han aumentado los tipos en 2018 están Colombia, Ghana, Corea, Letonia (que ha dado un giro de un sistema tributario plano a uno progresivo), Filipinas y Sri Lanka.

Tabla 9: Aumentos y rebajas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 2017

MAYORES INCREMENTOS EN LOS TIPOS MÁXIMOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		MAYORES REDUCCIONES EN LOS TIPOS MÁXIMOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	
Mongolia	+15%	Chile	-5%
Guyana	+10%	República del Congo	-5%
Uruguay	+6%	Croacia	-3%
Austria	+5%	Egipto	-2%
República Centroafricana	+5%		
Bangladesh	+5%		
Jamaica	+5%		
Sierra Leona	+5%		
Sudáfrica	+5%		
Tonga	+5%		
Trinidad y Tobago	+5%		
Grecia	+3%		
Malasia	+3%		
Zambia	+2,5%		
Singapur	+2%		

Todavía hay dos países que no aplican ni el impuesto de sociedades ni el impuesto sobre la renta de las personas físicas (Bahréin y Vanuatu), y otros dos que no aplican el impuesto sobre la renta de las personas físicas (Maldivas y Omán), por lo que los sistemas fiscales de estos países resultan altamente regresivos.

Sin embargo, paralelamente al aumento de los tipos impositivos, la eficacia en la recaudación de los impuestos más progresivos ha disminuido. Esto se ve bien en la tendencia que muestra el indicador T3 del CRI, según el cual la efectividad de la recaudación se mide por la productividad, y esta ha caído alrededor de un 2%. La productividad del IVA y del impuesto de sociedades ha caído en ambos casos en más de un 3%, mientras que la del IRPF se ha mantenido más o menos igual, a pesar del aumento de los tipos. En su conjunto, los cambios en la productividad del impuesto de sociedades indican un descenso en la recaudación proveniente de la explotación minera en países como Kazakstán y Níger, debido a la caída de los precios mundiales de los minerales. Por otro lado, países como Togo, Fiya, Japón, Bolivia y Ucrania han logrado aumentar su recaudación de manera notable en 2017. Que la productividad del impuesto de sociedades y del IRPF se mantenga de manera continuada a niveles muy bajos, subraya la necesidad de poner fin a las prácticas fiscales nocivas, a los paraísos fiscales y a la evasión y elusión fiscal.

Debido a la caída en la productividad tributaria, el indicador T2 del CRI, sobre el impacto de los impuestos sobre la desigualdad también ha disminuido. Como resultado, se espera que los sistemas tributarios contribuyan a reducir la desigualdad apenas en un 2,7%, por debajo del 3,5% del año pasado. No obstante, países como Marruecos, China y Ucrania han logrado reducir la regresividad de su sistema tributario.

¿Qué miden realmente los indicadores del CRI sobre impuestos?

Indicador 1: ¿Es progresivo el sistema tributario?

Para evaluar si los países diseñan su sistema tributario de manera progresiva, el Índice analiza la progresividad de los tres tipos de impuestos principales en casi todos los países: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades¹⁸³ y el IVA o los impuestos sobre las ventas.

Informes de la OCDE y el FMI muestran una tendencia muy clara entre 1990 y 2005, en la que los Gobiernos han reducido los tipos en el impuesto sobre la renta y aumentado el IVA, reduciendo la progresividad del sistema tributario. Muchos países también están recortando el impuesto de sociedades; por ejemplo, el Gobierno británico ha anunciado que pretende rebajar el impuesto de sociedades desde el 19% de 2017 al 17% en 2020.¹⁸⁴ Se ha anunciado esta rebaja a pesar de que todos los informes indican que niveles más bajos del impuesto de sociedades no son determinantes en las decisiones sobre inversión que adoptan las empresas.¹⁸⁵ Son muchos los países que podrían tomar medidas para aumentar la progresividad de sus sistemas tributarios. Podrían, por ejemplo, aumentar los tipos impositivos del impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, que actualmente son muy bajos o nulos, disminuir los elevados tipos del IVA, reducir los umbrales impositivos más altos para garantizar que el 10% más rico tribute de manera justa, o excluir productos de consumo básicos y a los pequeños comerciantes de la obligación de pagar el IVA.

Indicador 2: ¿Es progresiva la recaudación fiscal?

Para evaluar en qué medida la recaudación fiscal es progresiva, el índice toma en cuenta la contribución de cada tipo de impuesto en la recaudación total, y su impacto real o potencial sobre la desigualdad, en base a numerosos estudios recientes tanto mundiales como nacionales. La incidencia se mide en función de la composición de la recaudación en cada país, que comprende el IVA, los impuestos indirectos, impuestos aduaneros, contribuciones a la seguridad social, IRPF e impuesto de sociedades. Para el IVA hemos tenido en cuenta también si se han adoptado o no medidas que atenúen la carga sobre las personas más pobres, tales como umbrales más altos para la obligatoriedad del pago de impuestos, o exenciones para alimentos y otros productos básicos.¹⁸⁶

En general, los resultados son decepcionantes, ya que el desempeño de la mayoría de los países deja mucho que desear. Las posiciones más bajas del índice las ocupan países de Europa del Este (como Serbia, Ucrania, Hungría y Bielorrusia) y Asia Central, todos ellos con una escasa recaudación a través del impuesto sobre la renta, con una dependencia casi completa de los impuestos indirectos y, en algunos casos, con un sistema de contribuciones a la seguridad social regresivo.

Cuadro 7: ¿Por qué los tipos impositivos reales suelen ser mucho menores para las grandes empresas y las personas más ricas?

El tipo impositivo real que se aplica en un país puede depender de muchos factores, lo que hace que la contribución real acabe siendo, con frecuencia, muy inferior a lo establecido. En la India, el tipo nominal en el impuesto de sociedades es del 34,6%, pero el real se sitúa en torno al 23%.¹⁸⁷ Un estudio reciente elaborado por Oxfam y la CEPAL señala que el IRPF efectivo para el 10% más rico de la sociedad en 16 países de América Latina es de tan solo un 5%.¹⁸⁸

El Índice CRI no mide los tipos impositivos reales directamente, ya que no hay datos disponibles para un número suficiente de países. No obstante, sí refleja en cierta medida la relación entre la recaudación por el IVA frente a la recaudación real por el impuesto sobre la renta y sobre sociedades.

Hay tres mecanismos principales que permiten a las personas más ricas y las grandes empresas tributar a tipos mucho más bajos de lo que les correspondería.

Exenciones e incentivos fiscales para las grandes empresas: este es uno de los principales motivos por los que los países no recaudan impuestos de las empresas de manera progresiva. Informes sobre exenciones fiscales en 35 países calculan que el volumen de exenciones fiscales equivale a entre un 2% y un 10% del PIB cada año (entre un 15% y un 33% de la recaudación anual estatal).¹⁸⁹ El Banco Mundial ha calculado que Kenia destina 330 millones de dólares a ventajas fiscales para las grandes empresas, casi el doble de lo que invierte en educación primaria gratuita.¹⁹⁰ En una encuesta realizada por el Banco Mundial a inversores en África Oriental, el 93% respondió que habrían seguido invirtiendo de todas las maneras, incluso si no hubiera posibilidad de disfrutar de esas ventajas fiscales.¹⁹¹ Existen también ventajas fiscales para individuos, como por ejemplo las desgravaciones por hipotecas, pensiones, seguros privados y otros, que suelen beneficiar sobre todo a las personas más pudientes, rebajando de manera significativa su factura fiscal.

Evasión y elusión fiscal: la elusión (a menudo legal) y la evasión (ilegal por definición) de impuestos por parte de las grandes empresas cuesta tanto a los países en desarrollo como a los países ricos miles de millones de dólares al año. La práctica totalidad de estas prácticas las llevan a cabo los sectores más ricos de la sociedad, lo que resta mucha progresividad al sistema fiscal.¹⁹² Es también la razón principal por la que la recaudación fiscal de los países por el impuesto sobre la renta y el de sociedades es muy inferior a la que deberían, reduciendo drásticamente los recursos disponibles para hacer frente a la desigualdad.

Algunos países, como las Islas Caimán o Singapur, incentivan estas prácticas al ofrecer tipos impositivos muy bajos, convirtiéndose de facto en paraísos fiscales que permiten la evasión y la elusión fiscal. Otros, como Suiza, acuerdan amplias baterías de exenciones y acuerdos fiscales, actuando también de facto como paraísos fiscales.¹⁹³

Acuerdos fiscales: Los acuerdos fiscales detraen recursos vitales de los países más pobres (y de muchos países ricos también) que pueden representar hasta el 3% del PIB anual, frente a unas ratios de recaudación del 15–20% del PIB en la mayor parte de los países de renta baja.¹⁹⁴ Esto constituye un elemento muy importante también para hacer frente a la desigualdad, ya que prácticamente todos los recursos perdidos por estos acuerdos corresponden al impuesto de sociedades y las tasas sobre las ganancias del capital, ambos de naturaleza progresiva. Algunos países pobres, como Ruanda, han cancelado o renegociado sus acuerdos para poder aumentar los impuestos, y algunos países de renta media, como la India, han solicitado negociar acuerdos que protejan su base fiscal.¹⁹⁵ Es necesario que todos los países ricos y los paraísos fiscales revisen sus acuerdos para que dejen de privar a los países pobres de los recursos a los que tienen derecho.

Indicador 3: ¿Los países adoptan prácticas fiscales nocivas?

Este año hemos decidido añadir un nuevo indicador construido que se apoya en otros estudios realizados por Oxfam y otros para identificar si los países han adoptado prácticas fiscales nocivas, las cuales se utilizan para reducir la factura fiscal de las empresas. Algunos ejemplos incluyen la concesión de exenciones fiscales por patentes empresariales u otros activos intangibles como marcas, que permiten a las empresas reducir drásticamente su factura fiscal. Es el caso de Luxemburgo, por ejemplo. Otros métodos incluyen la exención temporal de impuestos sobre los intereses, lo que hace que una división de la empresa realice préstamos a otra división, a un interés mayor, para luego solicitar la exención sobre esos intereses. Estos son apenas dos ejemplos de cómo los países pueden reducir considerablemente el tipo impositivo real que pagan las empresas.

Nuestro indicador de prácticas fiscales nocivas no permite definir si un país es un paraíso fiscal o no, pero lo cierto es que los paraísos fiscales suelen adoptar varias de estas prácticas en uno

o varios ámbitos. Hemos optado por utilizar la terminología habitual sobre prácticas fiscales perjudiciales, empleada, entre otros, por el Foro de la OCDE sobre Prácticas Fiscales Nocivas y otras evaluaciones relacionadas, y el análisis de la Comisión Europea que sirvió de base para la elaboración de su lista negra de paraísos fiscales.¹⁹⁶ Nos hemos asegurado de incluir prácticas concretas que a veces no quedan recogidas por dichos organismos, como por ejemplo los incentivos a las patentes, acuerdos fiscales sobre el exceso de beneficios y similares, o deducciones de los intereses teóricos. También hemos evaluado las medidas preventivas contra prácticas fiscales nocivas, como la regulación por el control de empresas extranjeras, medidas contra la evasión y la elusión fiscal, límites a los intereses o impuestos de salida. A su vez, se han utilizado indicadores económicos que miden “el flujo de ingresos provenientes de pasivos”, como los *royalties*, el volumen de comercio de bienes y servicios y la inversión extranjera directa (IED) para estimar en qué medida hay un volumen de operación comercial excesivo comparado con la actividad económica real. Hemos analizado conjuntamente todos estos factores para otorgar a cada país una puntuación para este indicador.

El resultado, tal y como muestra la Tabla 8, es que países con prácticas fiscales nocivas, como Malta, Luxemburgo y los Países Bajos, han desaparecido de los diez primeros puestos, y en su lugar han entrado países como Malawi, Finlandia y Austria. El penoso papel que desempeñan los Países Bajos como paraíso fiscal se ha convertido en un tema candente en el país, y Oxfam y sus aliados están presionando al Gobierno para que adopte medidas que terminen con estas prácticas.¹⁹⁷

Tabla 10: Los países mejor clasificados en materia de fiscalidad, tras el ajuste por prácticas fiscales nocivas

PAÍSES MEJOR CLASIFICADOS EN EL RANKING DE FISCALIDAD ANTES DEL INDICADOR DE PRÁCTICAS FISCALES NOCIVAS	PAÍSES MEJOR CLASIFICADOS EN EL RANKING DE FISCALIDAD DESPUÉS DEL INDICADOR DE PRÁCTICAS FISCALES NOCIVAS
Malta	Australia
Sudáfrica	Dinamarca
Luxemburgo	Sudáfrica
Australia	Georgia
Bélgica	Bélgica
Georgia	Alemania
Países Bajos	Malawi
Dinamarca	Finlandia
Alemania	Austria
Canadá	Noruega

Australia ocupa la primera posición en este pilar del Índice CRI 2018, pero esto se debe sobre todo a que otros países obtienen peor puntuación debido a sus prácticas fiscales nocivas.¹⁹⁸ El país¹⁹⁹ ocupa el puesto 40 en cuanto a esfuerzos de recaudación, y el 35 en cuanto a la progresividad de su sistema tributario, muy por detrás de otros países de la OCDE. En la actualidad, hay algunas iniciativas para hacer el impuesto sobre la renta de las personas físicas más progresivo, pero está por ver si Australia se compromete a cumplir con los informes país por país sobre el comportamiento fiscal de las grandes empresas. Por lo tanto, el país podría hacer mucho más por mejorar su sistema tributario para luchar contra la desigualdad.

Indicador 4: ¿Es suficiente la recaudación de los países?

Este indicador muestra en qué medida los países recaudan todo lo que deben. La recaudación es vital para que los países tengan fondos suficientes para financiar políticas que reduzcan la desigualdad. También ayuda a entender las diferencias entre los indicadores 1 y 2, ya que los países que recaudan de manera menos eficiente suelen, por lo general, fallar en la recaudación

progresiva del impuesto sobre la renta y son, de hecho, menos progresivos que lo que su sistema tributario describe sobre el papel.

Para valorar si los países recaudan lo suficiente, no basta con fijar objetivos en relación al PIB, ya que ello no refleja las grandes diferencias que hay entre distintas estructuras económicas ni los esfuerzos de recaudación que realizan países con ingresos similares. Hay dos maneras de hacerlo:

1. En cuanto a los esfuerzos de recaudación, los expertos utilizan un cálculo de la “productividad de los impuestos”, que compara la cantidad recaudada por cada impuesto con la cantidad que podría recaudar un país según sus tipos impositivos y la base impositiva máxima. Esto muestra las pérdidas en recaudación debidas a exenciones, elusión y evasión fiscal y recaudación ineficiente.
2. Para ajustar la recaudación real respecto de la potencial según la estructura económica, el Centre d’Études et de Recherches sur le Développement International (CERDI) y el FMI han elaborado un cálculo adicional del “esfuerzo fiscal comparado con el potencial”²⁰⁰ que analiza 148 países, y mide el margen de mejora de la política fiscal.

La recaudación fiscal proveniente de las industrias extractivas son una fuente de ingresos muy importante para muchos países en desarrollo. Sin embargo, debido a su volatilidad, no los hemos incluido en el análisis del CRI para el cálculo del “esfuerzo fiscal” (ver Cuadro 8).

Hemos combinado estas dos estimaciones para obtener la imagen más completa posible sobre si los países recaudan todo lo que podrían. La recaudación fiscal de dos tercios de los países analizados en el índice es menos del 25% de lo que recaudan los países con mejor rendimiento en este indicador. Por lo tanto, a escala mundial, tanto en países ricos como pobres se podría recaudar mucho más e invertir en medidas cuyo impacto contra la desigualdad está comprobado.

Cuadro 8: Gravar a las industrias extractivas

La recaudación fiscal proveniente de las industrias dedicadas a la explotación de recursos naturales no renovables, o industrias “extractivas” (tales como petróleo, gas o minerales) es la fuente principal de ingresos de muchos países en desarrollo.

Sin embargo, gravar a las industrias extractivas resulta muy complejo. En la mayoría de los países, consiste en una mezcla de ingresos tributarios y no tributarios. La recaudación fiscal suele provenir mayoritariamente del impuesto de sociedades, mientras que los ingresos no tributarios son los royalties, primas, tasas y beneficios o dividendos de las empresas estatales. La proporción de los ingresos de las actividades extractivas provenientes de los distintos tipos de fuentes varía enormemente de un país a otro.

Las distintas proporciones reflejan las distintas estrategias de los Gobiernos para obtener unos ingresos razonables de las industrias extractivas. Debido a la diversidad de fuentes de ingresos, a las fluctuaciones de precios de las materias primas y a la gran inversión inicial que requiere la extracción y los largos periodos de amortización, la recaudación proveniente de la industria extractiva puede ser muy volátil. Con frecuencia, el sector de las extractivas disfruta de exenciones de impuestos y de contratos opacos, y es uno de los sectores más proclives a la evasión y elusión de impuestos. Todas estas características hacen que la valoración de la progresividad fiscal para este sector sea muy complicada.

El Índice CRI es por tanto muy cauteloso a la hora de abordar la recaudación fiscal proveniente de las industrias extractivas. Tal y como hacen el resto de análisis mundiales, y debido a su volatilidad, el análisis del CRI excluye la recaudación proveniente de las industrias extractivas del cálculo de “esfuerzo recaudatorio”. La diferente composición de la recaudación proveniente de las industrias extractivas es muy variada y no impacta en el indicador sobre “incidencia fiscal”, ya que el impuesto de sociedades (el único ingreso de las industrias extractivas que se incluye en el cálculo) tiene un impacto prácticamente nulo sobre la desigualdad, debido en parte a la evasión y la elusión fiscal. Como resultado, tal y como se ha construido el índice CRI, este no penaliza a los países con ingresos no tributarios provenientes de las industrias extractivas. No obstante, DFI y Oxfam son conscientes de que sería deseable realizar un análisis más minucioso, preferiblemente basado en la proporción de recursos provenientes de las industrias extractivas que cada Gobierno recauda en su conjunto por vía tributaria o no tributaria. Este tipo de cálculo no se ha realizado para todos los países, pero DFI y Oxfam quisieran utilizar este tipo de estimaciones en ediciones futuras del Índice CRI.

Fuentes: La fuente de datos para este cuadro es la Base de Datos de Recaudación del ICTD 2016, disponible en <http://www.ictd.ac/datasets/the-ictd-government-revenue-dataset>

Oxfam et al. (2017). *La Transparence à l'état brut : décryptage de la transparence des entreprises extractives*. https://www.oxfamfrance.org/sites/default/files/file_attachments/la_transparence_a_letat_brut_one_oxfam_sherpa.pdf

Limitaciones de los indicadores sobre fiscalidad del Índice

El pilar del CRI sobre fiscalidad se compone de datos de los países sobre IVA, impuesto de sociedades e impuesto sobre la renta, y en cierta medida sobre impuestos indirectos, aduaneros y contribuciones a la seguridad social. Hasta el momento, no incluye datos sobre otros impuestos tales como sobre los rendimientos del capital, la riqueza o la propiedad. Esto significa que países como Nueva Zelanda, que no aplican impuestos sobre los rendimientos del capital, obtienen una puntuación más alta en el índice que si esos tipos de impuestos se hubieran incluido. Se pretende incorporar este tipo de impuestos en versiones futuras del índice.

El pilar del CRI sobre fiscalidad no incluye cifras concretas sobre tipos impositivos efectivos (ver Cuadro 7), ya que, simplemente, no están disponibles. Sin embargo, el segundo indicador refleja esto de manera indirecta, ya que analiza cuánto recauda un Gobierno por cada tipo de impuesto. Si el tipo nominal en el impuesto de sociedades de un país es muy alto, pero el tipo efectivo es muy bajo, esto se ve reflejado en el hecho de que la recaudación por el impuesto de sociedades es mucho más baja de lo esperado. El nuevo indicador incorporado este año para medir las prácticas fiscales nocivas permitidas por los Gobiernos contribuye a mitigar el uso de tipos impositivos nominales en nuestro análisis, al reconocer que el sistema fiscal de un país y las políticas relacionadas pueden influir sobre las bases imponibles de otros países.

Para varios países, las contribuciones a la seguridad social son una fuente muy importante de recursos públicos, y si se establecen con un tipo plano, significa que son muy regresivas. No hemos incluido datos sobre contribuciones a la seguridad social en el primer subindicador fiscal ya que, a día de hoy, no hay suficientes datos disponibles para todos los países donde esto supone un problema. Están incluidos en el segundo indicador, que aborda el impacto de la fiscalidad sobre la desigualdad. Intentaremos incluir estos impuestos en la siguiente edición del índice.

Cuadro 9: La necesidad apremiante de gravar la riqueza

La desigualdad de riqueza es extrema y va en aumento.²⁰¹ Para un número creciente de expertos de todo el mundo, gravar la riqueza sería una de las mejores maneras de reducir la desigualdad.²⁰² En los próximos años, nos gustaría incluir en el Índice CRI un análisis de los impuestos sobre la riqueza. Este año hemos podido hacer un estudio preliminar sobre estos impuestos en 32 países, elegidos para representar un conjunto de países de interés especial para las regiones donde trabaja Oxfam y con distintos niveles de renta.²⁰³ Oxfam también ha analizado los impuestos sobre la riqueza en varios países donde trabaja.²⁰⁴ A estos análisis hemos añadido otras fuentes secundarias. Las conclusiones principales son:

- **Los impuestos sobre rendimientos del capital** existen en el 90% de los países analizados. Sin embargo, en muchos países son mucho más bajos que los impuestos sobre la renta, de manera que los contribuyentes con frecuencia declaran ingresos como rendimientos del capital para reducir su factura fiscal.
- **Los impuestos sobre ingresos financieros** varían para distintos tipos de ingresos (ingresos por dividendos o participaciones, intereses sobre depósitos o bonos, ganancias de los planes de pensiones o de fondos de inversión). En general, muchos países no aplican impuestos progresivos sobre ingresos financieros, pero deberían.
- **Los impuestos sobre transacciones financieras** existen en muchos países, sobre participaciones, stocks u otros activos. El FMI ha demostrado que son impuestos muy progresivos.²⁰⁵
- **Los impuestos sobre la propiedad** existen en casi todos los países analizados y son el tipo más común de impuesto sobre la riqueza. Los tipos impositivos sobre la propiedad varían del 0,1% en los Países Bajos al 5% en Senegal.
- Tres cuartas partes de los países analizados tienen **impuesto de sucesiones**. Si están bien diseñados y bien aplicados (con medidas para evitar su elusión por parte de las personas más ricas), estos impuestos pueden ser clave para hacer frente a la desigualdad intergeneracional. En la práctica, varían mucho. Corea del Sur aplica los tipos impositivos más altos y más progresivos, mientras en Italia son muy bajos y planos. En general, los países en desarrollo tienen unos tipos mucho más bajos que los de los países de la OCDE, aunque algunos países de la OCDE han suprimido el impuesto de sucesiones (como Australia).
- Tan solo nueve países siguen aplicando **impuestos sobre la riqueza (no sobre la propiedad)**. Esto supone un descenso importante desde los 14 países que los aplicaban en 1990²⁰⁶, si bien desde la crisis financiera en 2007–08 Argentina, Islandia, Portugal y España han reestablecido “temporalmente” impuestos sobre la riqueza. Anteriormente, muchos países gravaban también la riqueza de las empresas (sus activos), lo que a menudo generaba muchos más ingresos que los impuestos individuales sobre la riqueza (Luxemburgo llegaba a recaudar un 3% del PIB de esta manera).

Apenas hay datos fiables disponibles sobre la **proporción de recaudación total** derivada de los impuestos sobre la riqueza. Nuestro análisis demuestra que la recaudación varía mucho, de un 0,5% a un 5% del PIB. Está claro que, en la mayoría de los países, hay un gran potencial para gravar más la riqueza y una urgencia por hacerlo para luchar contra la desigualdad.

3 EL PAPEL DEL TRABAJO Y LOS SALARIOS EN LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

ÍNDICE CRI 2018

El Índice CRI 2018 ha añadido dos nuevos subindicadores para este pilar, a fin de incorporar la legislación contra la violación y el acoso sexual. Respecto a los derechos laborales, la mejora desde el año pasado ha sido leve. Muy pocos países han aprobado medidas más duras contra la discriminación, pero ha habido un aumento en el derecho de permiso por maternidad o paternidad en algunos países. Más de la mitad de los países ha aumentado el salario mínimo por encima del aumento del PIB per cápita desde la edición de 2017 del índice, con algunos incrementos notables en Corea del Sur e Indonesia.

Impacto del trabajo y los salarios sobre la reducción de la desigualdad en todo el mundo: base empírica

En los últimos 30 años, destaca una tendencia que ha empeorado la desigualdad de ingresos: la caída de la participación de los trabajadores y trabajadoras en el ingreso nacional (en forma de salarios y beneficios), en contraste con el aumento de la participación del capital (en forma de dividendos, intereses y los beneficios acumulados por las empresas).²⁰⁷ Dicha tendencia se observa tanto en países pobres como en ricos: la participación del trabajo ha disminuido en prácticamente todos los países de la OCDE durante las últimas tres décadas²⁰⁸ y en dos terceras partes de los países de renta media y baja entre 1995 y 2007.²⁰⁹

El aumento de la participación del capital es consecuencia de las ventajas obtenidas por los dueños del capital, que les ha permitido aumentar los retornos (aumentando por tanto los ingresos derivados de las participaciones y el ahorro y no de los salarios). Por ejemplo, en los años 70, el 10% de los beneficios obtenidos por las empresas en el Reino Unido repercutía sobre los accionistas; hoy en día, los accionistas perciben el 70%, lo que deja muy poco margen a la mejora de los salarios o para invertir con miras al futuro.²¹⁰

Entretanto, los salarios de los trabajadores y trabajadoras no logran aumentar al ritmo que crece la economía. Una preocupación concreta es que los salarios no varían con la productividad,²¹¹ lo que supone una fractura del vínculo entre productividad y prosperidad. En EE.UU., la productividad neta creció en un 72,2% entre 1973 y 2014, y sin embargo, el salario por hora para un trabajador medio (ajustado por la inflación) aumentó tan solo en un 8,7%.²¹² Si bien en las últimas décadas los salarios en muchos países en desarrollo han aumentado, lo que ha contribuido a una importante reducción de la pobreza, no lo han hecho al ritmo que han aumentado los ingresos de quienes más ganan.²¹³ Oxfam lleva tiempo haciendo campañas para proteger y reivindicar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras con salarios más bajos y de las pequeñas empresas, y tratar de revertir esta preocupante tendencia.

Los Gobiernos desempeñan un papel fundamental en la protección de las trabajadoras y trabajadores. Pueden establecer el salario mínimo y obligar a que se cumpla, para reducir la desigualdad y garantizar un nivel de vida digno. Pueden adoptar y aplicar medidas que garanticen la igualdad de género en el espacio de trabajo. También pueden proteger los derechos de asociación de los trabajadores y trabajadoras y garantizar el apoyo a los sindicatos, en lugar de reprimirlos o eliminarlos. El Índice CRI aspira a medir hasta qué punto los Gobiernos están cumpliendo con esta responsabilidad.

Investigaciones realizadas por Oxfam indican que, en todo el mundo, los salarios que reciben las mujeres no les permiten salir del círculo de la pobreza, incluso cuando reciben el salario

mínimo y trabajan muchas más horas de las establecidas.²¹⁴ El problema estriba en que, en muchos países, el salario mínimo no se corresponde con el salario necesario para vivir si se tiene en cuenta el número de personas cuyas vidas dependen del salario de una persona trabajadora.²¹⁵ En algunos sectores, los salarios reales han disminuido, a mitad que un mayor número de personas poco o semicualificadas compiten por empleos de baja calidad, debido a la falta de alternativas y al aumento de los flujos migratorios. Un análisis de 2013 demuestra que los salarios reales en Bangladesh, México, Honduras, Camboya y El Salvador (todos ellos con un sector textil importante) han disminuido una media del 14,6% entre 2001 y 2011.²¹⁶ Alrededor del 80% de la fuerza de trabajo en el sector textil son mujeres.²¹⁷

Se ha producido un marcado descenso en el porcentaje de trabajadoras y trabajadores afiliados a los sindicatos en los países desarrollados, así como un estancamiento en los porcentajes de sindicación en los países en desarrollo.²¹⁸ Hay numerosas pruebas que demuestran²¹⁹ que el nivel de sindicación de la fuerza laboral es un factor determinante para que los trabajadores y trabajadoras puedan demandar salarios más altos y mejores condiciones laborales. La negociación colectiva que realizan los sindicatos suele aumentar los salarios de los sectores correspondientes en un 20%, y arrastra al alza los salarios en el resto de los sectores.²²⁰ Sin embargo, en muchos países en desarrollo nunca ha habido sindicatos fuertes y, en algunos países, los derechos de asociación están siendo reprimidos. Por tanto, la vía para hacer frente a la desigualdad negociando el equilibrio entre el peso del trabajo y del capital en la economía cada vez se encuentra con más obstáculos.

En el otro extremo del abanico de salarios, los altos directivos no dependen de la representación sindical, sino de su poder e influencia individuales para establecer sus propias retribuciones en negociación con los consejos de administración de las empresas, que a menudo están formadas por los directivos de otras empresas. Las retribuciones de los altos directivos se han hecho cada vez más complejas, con el cobro de bonificaciones y opciones que complementan los paquetes salariales.²²¹ Hay numerosos indicios que indican que la desigualdad entre el promedio de las retribuciones de los directores generales y de los trabajadores y trabajadoras sigue aumentando. Por ejemplo, en 2017, las remuneraciones de los directores ejecutivos británicos de las mayores empresas que cotizan en bolsa aumentaron más de seis veces más rápido que el salario medio, cuyo aumento no llegó ni a alcanzar a la inflación.²²²

Los Gobiernos también deben garantizar que los trabajadores y trabajadoras sean remunerados de manera justa, y que la retribución de los directivos y de los dueños del capital no sea excesiva. Las empresas y los inversores deben demostrar su contribución al desarrollo de los países, y al cumplimiento de las obligaciones de los Estado en materia de derechos humanos. Algunos Gobiernos han reconocido recientemente esta obligación, tal y como establecen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresa y los Derechos Humanos, adoptando nuevas medidas legales sobre la debida diligencia con respecto a los derechos humanos.²²³ Los niveles de las remuneraciones de los altos directivos y de los retornos a los dueños del capital deberían incluirse en las medidas sobre cumplimiento de los derechos humanos a lo largo de todas las cadenas de suministro en el mundo.

Un salario mínimo adecuado es un factor fundamental en las estrategias nacionales para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, KPMG estima que un aumento del salario mínimo en el Reino Unido al nivel de salario digno sacaría a seis millones de personas de la pobreza.²²⁴ Otros calcularon en su día que con la aprobación de la Ley sobre salario mínimo en el Reino Unido en 1998 se perderían un millón de empleos; sin embargo, los datos indican que no hubo ningún impacto negativo sobre el empleo, y sí hubo un efecto positivo sobre la reducción de la desigualdad salarial y el aumento del nivel de vida de los trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos.²²⁵ En Ecuador, entre 2007 y 2015, el Gobierno aumentó el salario mínimo por encima del aumento del coste de vida, de manera que un hogar medio con 1,6 personas asalariadas pudo, por primera vez, hacer frente al coste de la canasta básica de bienes y servicios (que sirve como indicador del salario digno).²²⁶

Los Estados pueden sentirse forzados a competir entre sí debido a la presión a que les someten las grandes empresas, pero coordinar un esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre los salarios puede constituir una medida poderosa. En Asia, Indonesia ha sugerido la aplicación de un salario mínimo regional para evitar la competencia a la baja entre países, que suele resultar en salarios de pobreza para los trabajadores y trabajadoras.²²⁷ Esto sería aún más efectivo si se hiciera en colaboración con los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Género, juventud, trabajo y salarios

Las mujeres ocupan la mayor parte de los empleos peor remunerados del mundo, y se concentran de manera desproporcionada en los empleos más inseguros del sector informal.²²⁸ En Asia, por ejemplo, el 75% de las mujeres en edad de trabajar lo hace en el sector informal, sin tener acceso a ningún tipo de beneficio básico, tales como baja por enfermedad remunerada, permiso por maternidad o pensión.²²⁹ Con frecuencia, las mujeres reciben un salario inferior al de los hombres por realizar un mismo trabajo, aunque trabajen más horas. En la India, por ejemplo, la brecha salarial asciende al 32,6%.²³⁰ Incluso en sociedades que se considera que han alcanzado un nivel alto de igualdad de género, sigue habiendo una importante brecha salarial y de poder por razón de género.²³¹

Las mujeres también soportan la inmensa mayoría del trabajo de cuidados no remunerado (alrededor de 3,2 veces más que los hombres)²³² y suelen tener una representación menor en los espacios de trabajo, por lo que les resulta más difícil poder negociar por unas condiciones de empleo decentes. El trabajo de cuidados no remunerado aporta un gran beneficio a la sociedad, pero no se tiene en cuenta en el cálculo económico del PIB.²³³ Es fundamental que las mujeres no sean discriminadas en el espacio de trabajo, y que se reconozca, disminuya y redistribuya la responsabilidad que asumen en el trabajo de cuidados no remunerado. La brecha salarial en el trabajo de cuidados no remunerado se está cerrando, pero a un ritmo tan lento que, de seguir así, la OIT calcula que harán falta 210 años para que se cierre totalmente.²³⁴

La situación de muchas y muchos jóvenes sigue siendo muy precaria. Casi 70 millones de jóvenes trabajan y siguen viviendo en la pobreza, sobreviviendo con menos de 2 dólares al día. Alrededor del 77% de los y las jóvenes trabaja en la economía informal, frente a al 58% de la población adulta activa. Más de tres de cada cuatro jóvenes que no tienen un empleo, ni educación, ni formación, son mujeres.²³⁵

¿Cuáles son los resultados generales y las tendencias para el pilar sobre empleo y salarios del Índice CRI?

Tabla 11: Derechos laborales y salario mínimo según el Índice CRI

PAÍSES MEJOR CLASIFICADOS		PAÍSES PEOR CLASIFICADOS	
Noruega	1	Bangladesh	148
Dinamarca	2	Benín	149
Islandia	3	Sierra Leona	150
Alemania	4	Níger	151
Suecia	5	Etiopía	152
Estonia	6	Burkina Faso	153
Austria	7	Chad	154
Luxemburgo	8	Tonga	155
Suiza	9	Haití	156
Israel	10	Burundi	157

Los diez países que mejores resultados obtienen en este pilar son países de la OCDE. Entre los países en desarrollo que mejor puntúan, están Túnez y Lesotho. Algunos de los países con peor puntuación, como Suazilandia y Egipto, son conocidos por su débil legislación laboral y por las vulneraciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, mientras otros (como Bangladesh) lo son por sus malas prácticas laborales.²³⁶

El empleo y los salarios constituyen el único ámbito del CRI para el cual hay datos disponibles para suficientes países como para elaborar tres indicadores sobre género: permisos por paternidad/maternidad, la existencia de leyes contra la violación y la existencia de leyes contra el acoso sexual. Atendiendo a nuestro indicador sobre género y trabajo, se observa una gran variedad en la duración de los permisos de maternidad y paternidad en los 157 países cubiertos por el índice: desde 480 días en Suecia, por ejemplo, a ninguno en los Estados Unidos.

Respecto a los **derechos laborales**, la Global Labour University (GLU) indica que ha habido una leve mejora en los resultados obtenidos por los países, pasando de 4,107 en 2015 a 4,165 en 2016 (en una escala del 1 al 10). Esto se debe casi en su totalidad a los países que han reducido el número de casos de vulneraciones de derechos laborales y sindicales. Por otro lado, prácticamente ningún país ha mejorado su legislación, y ninguno de los países que prohíben la sindicalización independiente han modificado su regulación (Bielorrusia, China, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Iraq, RDP Laos, Libia, Qatar, Arabia Saudí, Sudán, Siria, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam).

En cuanto a los **derechos laborales de las mujeres**, hay pocos países (solo Barbados, Liberia y Lituania), que hayan aprobado medidas más fuertes contra la discriminación laboral y por la igualdad salarial desde 2015. Por lo tanto, todavía hay 27 y 23 países respectivamente que no aplican este tipo de medidas. Asimismo, según los nuevos indicadores incluidos sobre leyes contra la violación y el acoso sexual, el panorama es aún peor, ya que solo el 40% ha aprobado leyes contra la violación y solo el 45% leyes contra el acoso sexual. Es alarmante que, al contrario de lo que ocurre con los derechos laborales en general, no haya un sistema que mida si este tipo de legislación (y las leyes evaluadas en el nuevo indicador sobre violencia contra las mujeres) realmente se cumple y si mejora la vida de las mujeres.²³⁷ De hecho, está claro que se incumplen de manera sistemática, y esto requiere la adopción urgente de medidas en todo el mundo, tales como la certificación sobre igualdad salarial introducida por Islandia en 2018.²³⁸

Se han conseguido logros más notables en materia de **permisos por maternidad/paternidad**, con mejoras en al menos 13 países. Entre ellos, destacan Bhután y la India, que doblaron el permiso de maternidad y paternidad en 2016 y 2017, respectivamente; Mozambique, que ha aumentado el permiso de maternidad en un 50%, y Paraguay, que a partir de noviembre de 2018 aumentará la prestación por el permiso del 75% del sueldo al 100%. Colombia, la República Dominicana e Israel han aumentado ligeramente sus permisos de maternidad (si bien en el caso de la República Dominicana esto ha sucedido 15 años después de que el país ratificara el convenio al respecto de la OIT), Chipre ha introducido un permiso de paternidad de 14 días y España ha más que duplicado su permiso de paternidad desde 2016 hasta llegar a los 35 días en 2018. Nueva Zelanda está incrementando de manera gradual el permiso de maternidad, de las 18 semanas actuales a las 26 previstas para 2022, y se están haciendo esfuerzos a nivel parlamentario en Guyana y Filipinas para lograr un permiso de duración similar. No obstante, sigue habiendo cinco países (Lesotho, Papúa Nueva Guinea, Surinam, Tonga y los Estados Unidos) que no cuentan con un permiso de maternidad o paternidad reglamentario aplicable a todos los trabajadores.

Sobre el **salario mínimo**, más de la mitad de los países los han aumentado más que el PIB per cápita desde la edición del año pasado de nuestro índice. Entre las subidas más notables destacan Corea del Sur e Indonesia, con un aumento del salario mínimo del 16% y el 9% respectivamente, y aumentos de más del 20% del PIB per cápita en la República Centro Africana, Ucrania, Guinea-Bissau, El Salvador, Santo Tomé y Príncipe, Costa de Marfil, Namibia, Malasia y Seychelles. De los países de la OCDE, Portugal, Malta y Japón también han aumentado sensiblemente su salario mínimo. Otros países están tomando grandes medidas para cambiar

sus sistemas: Indonesia está intentando homogeneizar los sueldos, aumentándolos con mayor celeridad en las zonas más pobres; Austria aprobó el año pasado el reemplazo de la negociación de salarios por sector por un salario mínimo aplicable a nivel nacional, y la India ha introducido un mínimo nacional para limitar las divergencias entre las regiones. Otros países se encuentran en proceso de introducir un salario mínimo nacional (Sudáfrica para 2019) o al menos en algunos sectores (por ejemplo, Camboya para el sector textil). En este contexto, los países que no hayan subido anualmente su salario mínimo (32 en 2017) deberían hacerlo. Más importante aún, los países que aún no apliquen un salario mínimo (como Yibuti o Sudán del Sur) o que lo tengan solo para algunos sectores (Camboya, Santa Lucía, Singapur, Tonga o Jordania) deberían sentir la presión para introducirlos inmediatamente.

Cuadro 10: Modalidades atípicas de empleo y desigualdad²³⁹

El trabajo “atípico” se refiere al empleo temporal, a tiempo parcial, contratos de cero horas, así como al autoempleo. Este tipo de empleo representa, en promedio, alrededor del 35% de todo el empleo en los países de la OCDE, y más de la mitad del empleo en muchos de los países fuera de la OCDE. El Gobierno de Honduras, por ejemplo, promueve este tipo de contratos de manera proactiva. El porcentaje de la población con este tipo de empleos ha aumentado en varios países de la OCDE y en muchas economías emergentes desde 2008, aunque algunos países han adoptado normas para restringir su alcance.

El trabajo atípico puede, en cierta medida, ser positivo para los niveles de empleo, al aportar flexibilidad (para empleadores y trabajadores), por ejemplo, para contratar a más trabajadores en condiciones que se adecúan a sus necesidades. Sin embargo, en casi todos los países, las personas en este tipo de trabajos no disfrutan de todos los derechos laborales y de sindicación (incluido el permiso por maternidad / paternidad remunerado, u otros derechos relativos a la igualdad de género, o un salario mínimo) a los que los empleados a tiempo completo y con contratos indefinidos tienen derecho por ley, y que se usan como criterios para evaluar los resultados en el Índice CRI.

Mujeres y jóvenes predominan en esta categoría de empleos, lo que significa que sufren en mayor medida la falta de ingresos y la protección. En algunos países, otras categorías de trabajadores, tales como los jóvenes y refugiados, tampoco disfrutan de estos derechos. En otros, los trabajadores de algunas industrias concretas o de las zonas económicas especiales se ven privados de sus derechos al estar sujetos a contratos de trabajo no convencional.

Las personas con empleos atípicos suelen ganar menos por un mismo trabajo (un 30% menos en promedio en los países de la OCDE, y un 60% menos en países en desarrollo), y suelen estar en una situación laboral mucho más precaria o vulnerable, con largos periodos de subempleo en relación al número de horas que desearían trabajar. Como resultado, organizaciones como la OIT y la OCDE, han decidido que el “empleo atípico” es uno de los factores que potencian la desigualdad en todos los países, polarizando las diferencias entre los empleos con salarios altos y bajos. Esto tiene un impacto negativo concreto sobre la desigualdad de género y por edad, por ejemplo, y es la causa de aproximadamente el 20% de la desigualdad en los países de la OCDE.

Por lo tanto, DFI y Oxfam habrían deseado descontar más las puntuaciones por empleo en el Índice CRI, para cubrir el nivel de empleo atípico en cada país (que se sumaría a las penalizaciones por niveles de desempleo y trabajo informal), a fin de reflejar de manera más precisa la escasa cobertura de derechos laborales que hay en muchos países, y presionar a los Gobiernos a reflexionar sobre cómo ampliar los derechos de los trabajadores y trabajadoras con este tipo de contratos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que ha realizado recientemente la OIT para ampliar el número de países analizados, no existen datos sobre el peso del empleo atípico para la mitad de los países del Índice CRI. Para apoyar la puesta en práctica del Objetivo 8 de los ODS sobre trabajo decente, debería ser prioritario financiar la OIT y otras organizaciones para recopilar datos que permitan hacer una valoración más precisa del grado en que los trabajadores y trabajadoras se benefician de los derechos laborales que reducen la desigualdad.

¿Qué es lo que realmente miden los indicadores del Índice CRI sobre empleo y salarios?

El Índice CRI mide tres áreas de políticas sobre empleo y salarios sobre las que un Gobierno puede actuar para reducir la desigualdad. Estas han sido seleccionadas como indicadores adecuados para los que existen datos cuantitativos, y cada uno de ellos debidamente justificados.

Al contrario de lo que ocurre con los indicadores de gasto y tributación, los indicadores de empleo y salarios se centran sobre todo en las medidas de carácter legal adoptadas por los Gobiernos. La pertinencia de su impacto sobre la desigualdad depende en gran medida de lo eficientes que sean las políticas que se lleven a cabo, lo cual requiere un control profesional y un nivel de recursos adecuado, así como la capacidad y la voluntad política de investigar y penalizar el incumplimiento por parte de los empleadores. Las vulneraciones de las leyes sobre empleo y salarios deberían medirse y registrarse, con datos desglosados por sexo siempre que sea posible.

Indicador 1: ¿En qué medida están protegidos los derechos de los trabajadores y trabajadoras?

Este indicador puntúa las medidas que están tomando los Gobiernos para reforzar los derechos laborales y sindicales, así como su eficacia al hacerlo, dado que suele haber una brecha considerable entre lo que dicta la ley y lo que sucede en la práctica. Los datos para este indicador se han obtenido de los indicadores sobre derechos laborales empleados por la GLU y por el Center for Global Workers' Rights de la Penn State University. Dichos indicadores analizan en profundidad los datos sobre el respeto de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva en cada país, si bien no evalúan el cumplimiento del Protocolo de la OIT sobre el Convenio sobre el trabajo forzoso (2014).²⁴⁰

Indicador 2: ¿En qué medida están protegidas las mujeres por la ley?

Este indicador puntúa a los países en función de si tienen legislación en vigor sobre igualdad salarial (mismo salario por mismo trabajo) y en contra de la discriminación en el espacio de trabajo, así como de la duración del permiso por paternidad o maternidad, y de si existen ayudas para el cuidado infantil. En esta edición del índice hemos incorporado dos nuevos subindicadores para valorar en qué medida los Gobiernos cuentan con legislación en vigor contra la violación y el acoso sexual. Estas son las piezas básicas para medir el compromiso con una mayor equidad económica para las mujeres en el ámbito laboral. Si bien casi todos los países tienen legislación vigente, existe todavía un número elevado de países que no disponen de legislación al respecto o la legislación con la que cuentan es insuficiente. Por supuesto, que haya legislación vigente no implica que esta se cumpla. En muchos países, las mujeres simplemente no tienen acceso a las instancias judiciales para que se cumpla la ley. Al contrario de lo que ocurre con otros indicadores del Índice CRI, todavía no disponemos de los medios necesarios para hacer seguimiento del nivel de cumplimiento de la legislación sobre género en un número suficiente de países. No obstante, hemos decidido que es mejor incluir estos datos ahora, aun sabiendo que el hecho de que exista legislación no implica que estas políticas sean una realidad social para las mujeres.

Indicador 3: ¿En qué medida el salario mínimo tiene un nivel adecuado?

Este indicador pretende medir el salario mínimo acordado por cada Gobierno, tal y como prevea la legislación correspondiente, como proporción del PIB (por ejemplo, el valor del salario mínimo comparado con el salario medio). Un salario mínimo es el punto de partida legal para la negociación salarial, y protege a las personas más vulnerables frente a la explotación laboral y los salarios de pobreza. Sin embargo, para que este indicador contribuya a reducir la desigualdad, es necesario analizar no solo si el salario mínimo está por encima del umbral de la pobreza (lo cual es obviamente necesario para disminuir la pobreza), sino en qué medida

contribuye a cerrar la brecha entre los salarios más bajos y los más altos. Dada la escasez de datos sobre los ingresos más altos, este indicador compara el salario mínimo con el PIB per cápita para cada país.

Limitaciones de los indicadores sobre empleo y salarios del Índice CRI

Hubiera sido preferible comparar el salario mínimo con el salario medio en un país, como indicador más adecuado de desigualdad, pero no hay datos disponibles sobre salarios medios para un número suficiente de países.

A menudo, hay una gran diversidad en el derecho al salario mínimo. En Bangladesh, por ejemplo, las personas que trabajan en la industria textil tienen derecho a 5300 takas (68 dólares) mensuales, el salario mínimo más bajo en todo el mundo en el sector textil, y muy por debajo del umbral internacional de pobreza;²⁴¹ sin embargo, trabajadores y trabajadoras en otros sectores del país tan solo tienen derecho a 1 500 takas (19 dólares) al mes. El salario mínimo en Bangladesh solo se revisa cada cinco años, aunque en 2013 la presión internacional tras el colapso de la fábrica del Rana Plaza provocó un aumento tres años después del anterior.²⁴²

El no respeto del salario mínimo es una práctica habitual, llegando a ser endémica en muchos países. Por ejemplo, un estudio sobre los salarios del sector textil en diez países asiáticos encontró que, de las 100 empresas analizadas, más de la mitad pagaba por debajo del salario mínimo (en su mayoría, en relación con las horas extra trabajadas) y casi la mitad no pagaba las contribuciones a la seguridad social.²⁴³ Esto, a pesar de ser el sector más controlado por las auditorías encargadas por las marcas internacionales.

El uso del salario mínimo como indicador plantea otros problemas. En numerosos países, hay una edad mínima para acceder al salario mínimo, lo que significa que con frecuencia los jóvenes quedan excluidos y solo tenga derecho a un salario aún más bajo. Además, rara vez se aplica el salario mínimo al sector informal de la economía (el cual engloba la mayor parte de la fuerza laboral en casi todos los países en desarrollo, así como a la mayoría de las mujeres que trabajan). Por este motivo, hemos ajustado los datos para tener en cuenta los niveles de informalidad en la economía, de manera que no se aplica el salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras en el sector informal. También hemos tenido en cuenta si el salario mínimo aplica solo a algunos sectores del trabajo formal, como, por ejemplo, el sector público. (Este filtro por informalidad se ha aplicado a otros dos indicadores en esta sección, como se explica a continuación). Muchos de los países más pobres cuentan con un porcentaje muy alto de sus trabajadores en el sector informal, por lo que este ajuste ayuda a tener una imagen más precisa. Sin embargo, a pesar de este ajuste, como el salario mínimo se expresa como una proporción del PIB, algunos de los países pobres obtienen puntuaciones “altas” porque su PIB es relativamente bajo, y no porque el salario mínimo sea relativamente alto.

Los datos para los indicadores de género sobre legislación en materia de violación y acoso sexual provienen de la base de datos del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) de la OCDE, dentro del subíndice sobre restricción de la integridad física.²⁴⁴ Los indicadores sobre legislación contra la violación y acoso sexual en el espacio de trabajo se recogen en la medida en que la seguridad de las mujeres y su integridad física son aspectos fundamentales de la desigualdad de género. Los datos del SIGI abarcan casi todos los países incluidos en el Índice CRI, y son válidos a fecha 2014. Para los países no abarcados por el SIGI, hemos utilizado datos de los informes nacionales anuales sobre derechos humanos elaborados por el Departamento de Estado de los EE.UU.²⁴⁵ Además, a la luz del movimiento #MeToo, que está suscitando debates y conversaciones en todo el mundo para poner fin a la violencia sexual, hemos revisado fuentes actuales para verificar si alguno de los países incluidos en el CRI ha aprobado desde 2014 nuevas leyes contra la violación y el acoso sexual, para asegurarnos de que el Índice esté actualizado.

Ajuste por informalidad y desempleo

Como la legislación analizada en estos indicadores solo cubre a los trabajadores y trabajadoras en activo, en muchos países las legislaciones analizadas no tienen efecto sobre un gran parte de la población (en su mayoría mujeres) que trabajan en el sector informal, que se ve desprovista de estos derechos fundamentales. Por lo tanto, hemos ajustado cada uno de los indicadores en función del porcentaje de empleos que son “informales”, según la definición de la OIT.²⁴⁶ Un país en que el empleo informal suponga la mitad del empleo verá su puntuación recortada a la mitad.

En países como España, con una tasa de desempleo elevada, las disposiciones legales laborales no llegan a una proporción significativa de la población. Como resultado, la puntuación obtenida para cada indicador se ha vuelto a ajustar por la tasa de desempleo nacional; por ejemplo, un país con un 10% de desempleo tendrá una reducción del 10% en su puntuación.²⁴⁷

No ha sido posible ajustar más los resultados para reflejar el número de personas inscritas en situación de empleo activo pero con contratos de cero horas u otros tipos de empleos atípicos, un problema creciente en cada vez más países. No existen datos disponibles para un suficiente número de países como para poder hacer este ajuste (ver Cuadro 11).

4 CONCLUSIÓN

La desigualdad es una opción política

El Índice CRI 2018 demuestra claramente que los Gobiernos pueden elegir: pueden adoptar medidas para reducir la brecha entre ricos y pobres, o pueden optar por políticas que aumentan la desigualdad.

El índice demuestra que numerosos Gobiernos toman las decisiones adecuadas, optando por medidas que reducen la desigualdad, lo cual pone en evidencia a los Gobiernos que no lo hacen. La crisis de desigualdad lastra el progreso, y hay que hacerle frente. Hacemos un llamamiento a todos los Gobiernos para que tomen medidas de manera urgente.

Recomendaciones para los Gobiernos

1. Acción política

Los Gobiernos deben mejorar drásticamente sus esfuerzos por realizar un gasto progresivo, diseñar un sistema tributario progresivo, aplicar unos salarios progresivos y ofrecer protección a los trabajadores, como parte de los planes nacionales de reducción de la desigualdad en virtud del ODS 10.

2. Mejorar los datos

Los Gobiernos, las instituciones internacionales y otros actores deben trabajar conjuntamente para mejorar de manera rápida y radical los datos disponibles sobre desigualdad y las políticas relacionadas, y para hacer un seguimiento preciso y regular de los avances en la reducción de la desigualdad.

3. Impacto de las políticas

Los Gobiernos y las instituciones internacionales deben analizar el impacto distributivo de todas y cada una de las propuestas políticas, y basar sus decisiones sobre las mismas en el impacto que tienen en la reducción de la desigualdad.

ANEXO 1: RESULTADOS DEL ÍNDICE DE COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

A continuación, se presenta la clasificación general del Índice CRI para cada país y para cada región del mundo en 2018. Cada país recibe una puntuación entre 0 y 1 para cada indicador, y la clasificación en cada indicador depende de dicha puntuación. La media de estas puntuaciones otorga la posición general en el Índice CRI. Para algunos países, puede ocurrir que la clasificación en cada uno de los pilares sea peor que su clasificación general si la puntuación media es elevada.

Dinamarca, por ejemplo, que ocupa la primera posición en la clasificación general (ver Tabla 1), se sitúa en los puestos 5, 2 y 1 en los pilares de fiscalidad, gasto social y derechos laborales respectivamente, de manera que su puntuación media es suficientemente alta como para colocarlo en esa primera posición.

Tabla A1: Resultados de Dinamarca, por pilar y general

País	Gasto en salud, educación y protección social	Progresividad de las políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking general CRI 2018
Dinamarca	5	2	2	1
Puntuación	0.74	0.92	0.97	0.87

Tabla A2: Ranking de países del Índice CRI 2018

País	Ranking general	Ranking sobre gasto	Ranking sobre políticas fiscales	Ranking sobre derechos laborales y salarios
Dinamarca	1	5	2	2
Alemania	2	8	6	4
Finlandia	3	2	8	11
Austria	4	6	9	7
Noruega	5	14	10	1
Bélgica	6	7	5	21
Suecia	7	19	12	5
Francia	8	3	22	16
Islandia	9	24	26	3
Luxemburgo	10	20	34	8
Japón	11	10	30	20
Eslovenia	12	11	33	14
Australia	13	31	1	37
Reino Unido	14	15	19	27
Croacia	15	12	37	22
Italia	16	21	13	36
Países Bajos	17	22	41	12
Canadá	18	32	16	15
Portugal	19	26	36	30
Polonia	20	1	114	33

País	Ranking general	Ranking sobre gasto	Ranking sobre políticas fiscales	Ranking sobre derechos laborales y salarios
Malta	21	44	11	13
España	22	13	52	35
Estados Unidos	23	25	39	34
Irlanda	24	4	99	28
Israel*	25	40	31	10
Estonia	26	28	105	6
Nueva Zelanda	27	17	100	25
República Checa	28	9	112	26
Hungría	29	30	90	24
República de Eslovaquia	30	18	121	17
Sudáfrica	31	34	3	65
Namibia	32	27	29	56
Suiza	33	23	137	9
Argentina	34	33	45	45
Chile	35	35	60	39
Costa Rica	36	41	48	38
Grecia	37	16	102	60
Uruguay	38	37	66	48
Brasil	39	38	64	49
Túnez	40	59	17	50
Bielorrusia	41	29	38	97
Lituania	42	39	146	18
Ucrania	43	45	106	41
Chipre	44	51	135	29
Seychelles	45	104	35	31
Bulgaria	46	49	130	32
Rumanía	47	57	83	43
Letonia	48	36	148	23
Georgia	49	48	4	117
Federación de Rusia	50	61	72	55
Guyana	51	65	32	63
Antigua y Barbuda	52	102	129	19
Turquía	53	62	42	70
Bolivia	54	54	25	89
Lesotho	55	71	65	52
República de Corea	56	60	81	61
Colombia	57	46	56	95
Mongolia	58	78	77	47
Jordania	59	82	14	74
Moldavia	60	43	140	51
Armenia	61	55	67	88
República Kirguisa	62	69	63	77

País	Ranking general	Ranking sobre gasto	Ranking sobre políticas fiscales	Ranking sobre derechos laborales y salarios
República de Mauricio	63	52	143	44
El Salvador	64	77	54	78
Ecuador	65	96	27	76
Albania	66	53	75	105
Santa Lucía	67	63	87	79
Maldivas	68	90	131	42
Barbados	69	97	110	53
Paraguay	70	68	108	75
Kazajistán	71	64	119	72
Trinidad y Tobago	72	75	118	66
Serbia	73	50	144	57
Tailandia	74	56	82	112
Malasia	75	99	74	73
Kiribati	76	72	76	92
Cabo Verde	77	84	124	59
Samoa	78	111	84	64
San Vicente y las Granadinas	79	66	136	62
Argelia	80	94	69	86
China	81	67	57	115
Perú	82	79	68	102
Botswana	83	85	71	94
México	84	47	125	109
Territorio Palestino Ocupado**	85	100	127	58
Guatemala	86	76	98	96
Malawi	87	108	7	121
Tayikistán	88	92	111	82
República Dominicana	89	73	109	98
Indonesia	90	98	23	116
Swazilandia	91	83	92	99
Zimbabwe	92	74	20	135
República de Yemen	93	118	116	68
Filipinas	94	114	91	84
Honduras	95	136	24	81
Jamaica	96	80	123	91
República Centroafricana	97	137	147	40
Marruecos	98	112	78	101
Vietnam	99	89	46	126
Bahréin	100	119	149	46
Islas Salomón	101	58	113	130
Sri Lanka	102	142	51	80

País	Ranking general	Ranking sobre gasto	Ranking sobre políticas fiscales	Ranking sobre derechos laborales y salarios
Mauritania	103	123	94	90
República Árabe de Egipto	104	124	43	110
Papúa Nueva Guinea	105	122	55	111
Zambia	106	86	40	136
Tanzania	107	95	15	144
Fiji	108	134	96	83
Panamá	109	138	126	69
Kenya	110	141	18	108
Angola	111	125	89	103
Senegal	112	103	85	122
Omán	113	126	152	54
Ghana	114	130	28	120
Belice	115	70	154	67
Azerbaiyán	116	140	70	100
Santo Tomé y Príncipe	117	87	141	104
Líbano	118	117	133	93
Mozambique	119	115	21	142
Yibuti	120	116	53	137
Camboya	121	129	95	118
Gambia	122	120	93	125
Costa de Marfil	123	109	115	129
Liberia	124	113	120	127
Togo	125	121	59	134
Burkina Faso	126	88	79	153
Afganistán	127	152	107	87
Mali	128	105	101	145
Guinea	129	110	150	106
Uganda	130	131	47	140
Etiopía	131	101	86	152
Timor Oriental	132	147	128	107
Rwanda	133	128	88	138
Camerún	134	144	49	139
República del Congo	135	148	80	128
Vanuatu	136	150	97	124
Pakistán	137	154	61	119
Myanmar	138	156	62	113
Nepal	139	149	117	123
Benín	140	132	73	149
Guinea-Bissau	141	139	151	114
Níger	142	107	134	151
Burundi	143	106	122	157

País	Ranking general	Ranking sobre gasto	Ranking sobre políticas fiscales	Ranking sobre derechos laborales y salarios
República Democrática del Congo	144	155	58	131
Tonga	145	93	139	155
Kosovo	146	127	155	85
India	147	151	50	141
Bangladesh	148	146	103	148
Singapur	149	91	157	71
Laos	150	153	44	146
Madagascar	151	135	142	143
Bhután	152	81	153	147
Sierra Leona	153	143	132	150
Chad	154	145	138	154
Haití	155	133	145	156
Uzbekistán	156	42	156	132
Nigeria	157	157	104	133

* Israel

Estos datos se refieren al presupuesto nacional, el sistema tributario, los derechos laborales y las leyes sobre igualdad de género y derivadas que el Estado de Israel aplica a su ciudadanía. No obstante, cabe destacar que Israel es la potencia ocupadora en el Territorio Palestino Ocupado. En calidad de tal, Israel ejerce varios niveles de control sobre la población palestina del Territorio Palestino Ocupado. La población que vive bajo control total israelí en la Zona C de Cisjordania bajo responsabilidad del Gobierno de Israel no disfruta de la protección que ofrece la legislación laboral israelí, al contrario que los residentes israelíes que viven de manera ilegal en la misma zona geográfica. Los factores clave de la desigualdad y la injusticia a la que se enfrenta la población palestina de este territorio son la ocupación prolongada, el conflicto crónico y la negación sistemática y continua de sus derechos. El presente índice mide la justicia fiscal, los niveles de gasto social y las condiciones laborales de la población, y no se ha elaborado para abarcar también los elementos relacionados con situaciones de ocupación militar. Los resultados del Índice CRI de Oxfam en relación con el control ejercido por Israel en el Territorio Palestino Ocupado deben interpretarse teniendo en cuenta este contexto.

** Territorio Palestino Ocupado

Los datos se refieren a las zonas del Territorio Palestino Ocupado que se encuentran bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina. El término Territorio Palestino Ocupado se refiere al territorio que Israel lleva ocupando desde la guerra de 1967, es decir, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. En derecho internacional, se reconoce como una única entidad territorial. Los factores clave de la desigualdad y la injusticia a la que se enfrenta la población palestina de este territorio son la ocupación prolongada, el conflicto crónico y la negación sistemática y continua de sus derechos. El presente índice mide la igualdad fiscal, los niveles de gasto social y las condiciones laborales de la población, y no se ha elaborado para abarcar también los elementos relacionados con situaciones de ocupación militar. Cabe señalar que la Autoridad Nacional Palestina y la economía palestina siguen sometidas a una gran presión como resultado de la ocupación continuada. La fiscalidad en el Territorio Palestino Ocupado está sujeta a los Acuerdos de Oslo (el Protocolo de Relaciones Económicas, o Protocolo de París), por lo que la Autoridad Nacional Palestina no ejerce una soberanía plena en el establecimiento de políticas tributarias, ya que pertenecen a la fiscalidad indirecta, con lo cual, la mayor parte de los impuestos los recauda la potencia ocupante, que los transfiere a la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina conserva poder para imponer y recaudar impuestos directos bajo su autoridad, por lo que las organizaciones socias de Oxfam pretenden alentar a la Autoridad a que aborde los problemas de desigualdad fiscal en la medida de sus capacidades, teniendo en cuenta las limitaciones descritas anteriormente. Los resultados del Índice CRI de Oxfam en relación con el Territorio Palestino Ocupado deben interpretarse teniendo en cuenta este contexto.

RESULTADOS POR REGIONES

Asia

El extraordinario crecimiento económico de Asia durante las últimas dos décadas constituye un gran éxito en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, este crecimiento también ha aumentado la brecha entre ricos y pobres. En ciudades como Bombay o Bangkok, relucientes edificios y rascacielos de oficinas conviven con barrios de chabolas donde las personas viven sin ningún servicio básico y mínima protección ante las inclemencias. En Asia se encuentran algunos de los países donde la desigualdad ha aumentado más rápidamente en el mundo. Si bien el crecimiento en la región entre las décadas de los 60 y los 80 destacó por su amplia base, el crecimiento reciente ha sido mucho menos inclusivo. Esto se debe en parte a que las políticas más recientes han favorecido a quienes más tienen, como la aplicación de amplias ventajas fiscales para grandes empresas y rentas altas, o recortes en los tipos impositivos máximos.

La Tabla A3 muestra los resultados individuales por indicador y el resultado total para los países de Asia Oriental y Pacífico, y la Tabla A4 para Asia Meridional.

Tabla A3: Asia Oriental y Pacífico

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
Japón	0.690	1	0.679	3	0.848	1	0.739	1
Australia	0.563	3	1.000	1	0.702	3	0.734	2
Nueva Zelanda	0.658	2	0.481	19	0.825	2	0.650	3
Rep. de Corea	0.324	6	0.521	12	0.527	5	0.449	4
Mongolia	0.244	9	0.536	11	0.595	4	0.440	5
Tailandia	0.344	4	0.517	13	0.287	14	0.377	6
Malaysia	0.203	14	0.543	9	0.466	8	0.377	7
Kiribati	0.270	8	0.537	10	0.369	11	0.377	8
Samoa	0.183	15	0.514	14	0.501	6	0.372	9
China	0.278	7	0.590	7	0.275	16	0.361	10
Indonesia	0.205	13	0.704	2	0.273	17	0.344	11
Filipinas	0.175	16	0.501	15	0.402	10	0.331	12
Vietnam	0.223	10	0.613	5	0.204	20	0.315	13
Islas Solomon	0.333	5	0.415	20	0.193	21	0.312	14
Papúa New Guinea	0.151	17	0.593	6	0.304	13	0.301	15
Fiji	0.120	19	0.490	17	0.408	9	0.297	16
Camboya	0.132	18	0.491	16	0.253	18	0.254	17
Timor Oriental	0.091	20	0.342	21	0.319	12	0.224	18
Vanuatu	0.079	21	0.485	18	0.215	19	0.202	19
Myanmar	0.039	23	0.577	8	0.283	15	0.194	20
Tonga	0.216	12	0.281	22	0.025	23	0.172	21
Singapur	0.221	11	0.000	23	0.486	7	0.162	22
Laos	0.060	22	0.617	4	0.082	22	0.156	23

Tabla A4: Asia Meridional

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
Maldivas	0.222	2	0.336	7	0.636	1	0.394	1
Sri Lanka	0.106	3	0.604	2	0.416	2	0.307	2
Afganistán	0.061	7	0.455	5	0.383	3	0.239	3
Pakistán	0.057	8	0.578	3	0.241	4	0.201	4
Nepal	0.080	5	0.394	6	0.221	5	0.192	5
India	0.061	6	0.607	1	0.107	6	0.164	6
Bangladesh	0.098	4	0.464	4	0.067	8	0.164	7
Bhután	0.239	1	0.131	8	0.080	7	0.144	8

África subsahariana

Siete de los países más desiguales del mundo están en África.²⁴⁸ En todo el continente, la desigualdad está mermando el potencial que tiene el crecimiento para reducir la pobreza y lograr una prosperidad compartida, y está bloqueando el surgimiento de una nueva clase media. En su lugar, sucede a menudo que una pequeña minoría está acaparando los beneficios del crecimiento económico. La brecha entre ricos y pobres es la segunda más grande del mundo, solo por detrás de América Latina, y en muchos países africanos no hace sino aumentar. La Tabla A5 muestra el ranking para cada pilar y el ranking general para los países de África subsahariana incluidos en el Índice CRI.

Tabla A5: África Subsahariana

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
Sudáfrica	0.512	2	0.897	1	0.499	7	0.618	1
Namibia	0.598	1	0.680	8	0.545	5	0.607	2
Seychelles	0.191	15	0.663	9	0.761	1	0.491	3
Lesotho	0.271	4	0.568	15	0.572	4	0.452	4
Mauricio	0.364	3	0.243	38	0.625	3	0.407	5
Cabo Verde	0.231	7	0.379	32	0.534	6	0.375	6
Botswana	0.231	8	0.552	16	0.359	9	0.357	7
Malawi	0.189	19	0.870	2	0.236	17	0.349	8
Swazilandia	0.234	6	0.498	24	0.342	10	0.342	9
Zimbabwe	0.262	5	0.721	5	0.134	26	0.334	10
República Centrafricana	0.117	33	0.218	39	0.657	2	0.325	11
Mauritania	0.148	26	0.493	26	0.377	8	0.305	12
Zambia	0.230	9	0.642	10	0.133	27	0.300	13
Tanzania	0.214	12	0.754	3	0.098	33	0.300	14

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
Kenya	0.107	35	0.740	4	0.315	14	0.292	15
Angola	0.146	27	0.505	23	0.327	11	0.290	16
Senegal	0.194	14	0.513	20	0.227	18	0.286	17
Ghana	0.131	29	0.693	7	0.240	16	0.281	18
Santo Tomé y Príncipe	0.229	10	0.272	36	0.326	12	0.275	19
Mozambique	0.174	23	0.721	6	0.105	31	0.271	20
Gambia	0.152	24	0.494	25	0.210	19	0.253	21
Costa de Marfil	0.189	20	0.408	29	0.195	22	0.250	22
Liberia	0.179	22	0.390	30	0.204	20	0.244	23
Togo	0.152	25	0.581	14	0.137	25	0.244	24
Burkina Faso	0.226	11	0.523	18	0.037	39	0.242	25
Malí	0.191	16	0.472	27	0.086	34	0.229	26
Guinea	0.189	21	0.172	40	0.320	13	0.227	27
Uganda	0.130	30	0.612	11	0.115	30	0.227	28
Etiopía	0.200	13	0.512	21	0.039	38	0.226	29
Rwanda	0.133	28	0.505	22	0.122	28	0.213	30
Camerún	0.103	37	0.609	12	0.115	29	0.205	31
Congo, Rep.	0.082	39	0.522	19	0.199	21	0.204	32
Benín	0.121	31	0.544	17	0.059	35	0.191	33
Guinea-Bissau	0.112	34	0.163	41	0.275	15	0.182	34
Níger	0.190	18	0.324	34	0.046	37	0.181	35
Burundi	0.191	17	0.384	31	0.000	41	0.180	36
República Democrática del Congo	0.055	40	0.589	13	0.164	23	0.174	37
Madagascar	0.119	32	0.248	37	0.100	32	0.148	38
Sierra Leona	0.106	36	0.328	33	0.049	36	0.140	39
Chad	0.099	38	0.293	35	0.034	40	0.125	40
Nigeria	0.000	41	0.463	28	0.146	24	0.049	41

Oriente Próximo y Norte de África

Oriente Próximo alcanzó la mayor desigualdad de ingresos entre su población en 2016, cuando el 10% más rico de la población capturaba el 61% de los ingresos nacionales en la región. Esta desigualdad de ingresos superaba la de África subsahariana, Brasil e India.²⁴⁹ En el Norte de África, si bien la desigualdad ha sido históricamente menor que en Oriente Próximo, suele estar infravalorada.²⁵⁰ Las protestas populares que surgieron en 2011 en toda la región han ocasionado profundos efectos en varios países. La demanda de más libertades políticas y económicas se gestaron sobre el deseo de poner fin a las desigualdades económicas y a la captura del poder por parte de las élites. Desde entonces, los conflictos violentos continúan en Siria y Yemen, cobrándose muchas vidas, dejando a millones de personas en unas condiciones humanas terribles y, al mismo tiempo, incrementando la presión sobre las infraestructuras y los limitados recursos de los países vecinos. Las perspectivas del proceso de paz para Oriente

Próximo siguen siendo sombrías, por lo que la región sigue expuesta a la fragilidad, los disturbios y los conflictos violentos.

La Tabla A6 muestra los resultados para la región, pero no incluye varios países debido a la falta de datos públicos sobre políticas relevantes para la reducción de la desigualdad, por lo que no se puede hacer una clasificación más completa. Esta falta de datos es motivo de importante preocupación.

Tabla A6: Oriente Próximo y Norte de África

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
Túnez	0.333	1	0.744	2	0.587	2	0.527	1
Jordania	0.237	2	0.757	1	0.463	6	0.437	2
Argelia	0.216	3	0.561	5	0.392	7	0.362	3
Territorio Palestino Ocupado	0.202	4	0.345	8	0.534	4	0.354	4
República de Yemen	0.160	8	0.400	7	0.492	5	0.332	5
Marruecos	0.179	5	0.531	6	0.337	9	0.318	6
Bahréin	0.157	9	0.178	10	0.603	1	0.312	7
República Árabe de Egipto	0.146	10	0.619	3	0.304	10	0.302	8
Omán	0.138	11	0.147	11	0.558	3	0.281	9
Líbano	0.163	7	0.324	9	0.361	8	0.274	10
Yibuti	0.170	6	0.600	4	0.132	11	0.257	11

América Latina

América Latina es la región más desigual del mundo. Su historia está marcada por la explotación colonial y la concentración de tierras en manos de pequeñas élites a costa de las personas más pobres, especialmente de las comunidades indígenas y de las mujeres. Aun así, entre 2000 y 2014, la región resistió a tendencia mundial y logró reducir la desigualdad. Aunque sigue habiendo algunas excepciones, Gobiernos en Uruguay, Bolivia, Argentina y otros países ha llevado a cabo importantes reformas para reducir la desigualdad. Los recursos públicos provenientes de las materias primas se han empleado para aumentar el gasto en servicios públicos y protección social. A su vez, en algunos países se ha aumentado el salario mínimo. Esto se refleja en el Índice CRI, con varios países de América Latina obteniendo buenos resultados (ver Tabla A7).

Sin embargo, actualmente la región está atravesando un retroceso económico relacionado con la caída de los precios de las materias primas. En 2015, experimentó el mayor aumento en niveles de pobreza desde finales de los años 80, y los cambios de Gobierno en muchos países conllevan cambios en las políticas que amenazan con revertir los logros de los últimos años.²⁵¹

Tabla A7: América Latina y el Caribe

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
Argentina	0.533	1	0.614	5	0.607	4	0.584	1
Chile	0.507	2	0.579	9	0.659	3	0.581	2
Costa Rica	0.422	5	0.610	6	0.670	2	0.561	3
Uruguay	0.457	3	0.567	11	0.591	5	0.536	4
Brasil	0.451	4	0.572	10	0.590	6	0.535	5
Guyana	0.283	10	0.671	4	0.510	9	0.460	6
Antigua y Barbuda	0.198	22	0.342	22	0.856	1	0.459	7
Bolivia	0.352	8	0.700	2	0.377	18	0.456	8
Colombia	0.396	6	0.590	8	0.358	20	0.442	9
El Salvador	0.254	17	0.600	7	0.434	15	0.405	10
Ecuador	0.211	20	0.694	3	0.448	14	0.404	11
Santa Lucía	0.288	9	0.511	13	0.424	16	0.397	12
Barbados	0.210	21	0.449	17	0.567	7	0.394	13
Paraguay	0.274	12	0.453	15	0.459	13	0.388	14
Trinidad y Tobago	0.261	15	0.393	18	0.496	10	0.379	15
San Vicente y las Granadinas	0.280	11	0.309	23	0.512	8	0.367	16
Perú	0.244	18	0.563	12	0.335	23	0.358	17
México	0.381	7	0.377	20	0.306	24	0.355	18
Guatemala	0.260	16	0.483	14	0.351	21	0.353	19
República Dominicana	0.263	14	0.452	16	0.345	22	0.345	20
Honduras	0.117	24	0.701	1	0.410	17	0.328	21
Jamaica	0.240	19	0.381	19	0.374	19	0.326	22
Panamá	0.112	25	0.351	21	0.491	12	0.296	23
Belice	0.273	13	0.106	25	0.496	11	0.279	24
Haití	0.120	23	0.239	24	0.018	25	0.119	25

Países de renta alta de la OCDE

En casi todos los países de renta alta, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado durante los últimos 30 años. Esta tendencia ha emergido tras varios años en los que la desigualdad iba en descenso, tanto que se pensó que cuando los países alcanzaban cierto nivel de riqueza, un aumento de la igualdad era inevitable.²⁵² Al final de la Segunda Guerra Mundial, numerosos países de renta alta pusieron en marcha sistemas fiscales progresivos, estados de bienestar sólidos y una férrea protección de los trabajadores y trabajadoras. Esta combinación de políticas dio pie a algunos de los países más igualitarios del mundo, lo cual se refleja en que los países de renta alta predominan entre los primeros puestos del Índice CRI (ver Tabla A8). En las últimas décadas, sin embargo, ha habido una lenta pero continua erosión de estas políticas en muchos países ricos, desde Dinamarca hasta los EE.UU. Instituciones como el FMI y la OCDE han vinculado esta situación con el aumento de la desigualdad.

Tabla A8: Países de renta alta de la OCDE

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
Dinamarca	0.741	5	0.919	2	0.971	2	0.874	1
Alemania	0.707	8	0.878	4	0.943	4	0.840	2
Finlandia	0.768	2	0.854	5	0.881	11	0.833	3
Austria	0.736	6	0.834	6	0.933	7	0.833	4
Noruega	0.671	13	0.828	7	1.000	1	0.830	5
Bélgica	0.731	7	0.887	3	0.846	18	0.819	6
Suecia	0.652	18	0.797	8	0.937	5	0.793	7
Francia	0.751	3	0.712	12	0.860	15	0.774	8
Islandia	0.623	23	0.700	13	0.951	3	0.757	9
Luxemburgo	0.651	19	0.669	17	0.927	8	0.749	10
Japón	0.690	10	0.679	14	0.848	17	0.739	11
Eslovenia	0.681	11	0.669	16	0.861	13	0.737	12
Australia	0.563	28	1.000	1	0.702	30	0.734	13
Reino Unido	0.660	14	0.722	11	0.816	23	0.732	14
Italia	0.645	20	0.795	9	0.736	29	0.723	15
Países Bajos	0.644	21	0.628	20	0.875	12	0.716	16
Canadá	0.541	29	0.753	10	0.861	14	0.712	17
Portugal	0.618	25	0.663	18	0.771	25	0.684	18
Polonia	1.000	1	0.414	31	0.751	26	0.679	19
España	0.675	12	0.602	22	0.739	28	0.671	20
Estados Unidos	0.621	24	0.643	19	0.744	27	0.669	21
Irlanda	0.745	4	0.481	26	0.807	24	0.668	22
Israel	0.443	32	0.673	15	0.904	10	0.666	23
Estonia	0.579	26	0.460	29	0.936	6	0.656	24
Nueva Zelanda	0.658	16	0.481	27	0.825	21	0.650	25
República Checa	0.703	9	0.436	30	0.817	22	0.641	26
Hungría	0.576	27	0.502	25	0.827	20	0.634	27

País	Gasto en salud, educación y protección social	Ranking sobre gasto	Progresividad de las políticas fiscales	Ranking sobre políticas fiscales	Derechos laborales y salario mínimo	Ranking sobre derechos laborales y salarios	Puntuación CRI 2018	Ranking regional CRI 2018
República de Eslovaquia	0.655	17	0.387	32	0.858	16	0.622	28
Suiza	0.643	22	0.299	34	0.906	9	0.594	29
Chile	0.507	30	0.579	23	0.659	31	0.581	30
Grecia	0.658	15	0.467	28	0.533	32	0.547	31
Letonia	0.498	31	0.185	35	0.828	19	0.478	32
Turquía	0.312	35	0.625	21	0.489	34	0.458	33
República de Corea	0.324	34	0.521	24	0.527	33	0.449	34
México	0.381	33	0.377	33	0.306	35	0.355	35

- 1 Para ver una descripción de esta tendencia, ver, por ejemplo, Banco Mundial (2016). Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. <http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
- 2 D. Hardoon, S. Ayele y R. Fuentes-Nieva (2016). Una economía para el 1%: Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema. Oxford: Oxfam Internacional. <https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1>
- 3 K. Pickett y R. Wilkinson (2010). The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone. London: Penguin. Ver también C. Wang, G. Wanand y X. Zhang. (2016). Which Dimension of Income Distribution Drives Crime? Evidence from the People's Republic of China. ADBI Working Paper No. 704. Tokyo: Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/236561/adbi-wp704.pdf>
- 4 C. Lakner, M. Negre and E.B. Prydz (2014). Twinning the Goals: How Can Promoting Shared Prosperity Help to Reduce Global Poverty? World Bank Policy Research Working Paper 7106.
- 5 Tax Policy Center (2017). Distributional Analysis of the Conference Agreement for the Tax Cuts and Jobs Act. <https://www.taxpolicycenter.org/publications/distributional-analysis-conference-agreement-tax-cuts-and-jobs-act>
- 6 J. Martinez-Vazquez y B. Moreno-Dodson (2014). The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence from a Large Panel of Countries. Georgia State University, Economics Department Publications; N. Lustig (2015). The Redistributive Impact of Government Spending on Education and Health: Evidence from Thirteen Developing Countries in the Commitment To Equity Project. CEQ Working Paper Series, Tulane University; and OECD (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Also see, for example, F. Jaumotte and C. Osorio Buitron (2015). Power From The People. FMI. Finance & Development. 52:1. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm>
- 7 N. Lustig (2015). The Redistributive Impact of Government Spending on Education and Health, op. cit.
- 8 ONU Mujeres (2015) Progress of the World's Women 2015-16. http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf
- 9 OCDE (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All, op. cit.
- 10 Para ver los análisis sobre el poder de la tributación en la reducción de la desigualdad, ver los estudios multi-país desarrollados por el Commitment to Equity Institute, disponibles en: www.commitmenttoequity.org
- 11 FMI (octubre de 2017) Monitor Fiscal: Tackling Inequality IMF <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017>
- 12 F. Jaumotte y C. Osorio Buitron (2015). Inequality and Labor Market Institutions. IMF Staff Discussion Note SDN/15/14.
- 13 Ibid.
- 14 OIT (2018). World Employment and Social Outlook: Women. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_619577.pdf
- 15 World Inequality Report (2018). <https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf>
- 16 M.Martin y M.Lawson (2017). Índice del Compromiso con la Reducción de la Desigualdad: Un nuevo ranking mundial de Gobiernos basado en lo que están haciendo para reducir la brecha entre ricos y pobres. DFI y Oxfam. <https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-compromiso-con-la-reduccion-de-la-desigualdad-cri>
- 17 Consultar la nota metodológica del Índice CRI 2018 para más información <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018-a-global-ranking-of-government-620553>
- 18 Los Países Bajos podrían adoptar las siguientes medidas, entre otras, para dejar de ser un paraíso fiscal empresarial: aplicar reglamentos más estrictos sobre el traslado de beneficios a (otros) paraísos fiscales; poner fin a los acuerdos fiscales con empresas que las eximen (en gran medida) de tributar grandes sumas de beneficios (las denominados "normativas sobre beneficios extraordinarios"); derogar leyes que favorecen tipos impositivos bajos para las grandes empresas; y apoyar medidas a nivel europeo y mundial contra la competencia fiscal entre países.
- 19 Ver, por ejemplo, C. Lagarde, C. Deléchat y M. Newiak (2018). Ending Harassment Helps #TheEconomyToo. Blog del FMI. <https://blogs.imf.org/2018/03/05/ending-harassment-helps-theeconomytoo/>
- 20 C. Franklin y T. Menaker (2012) Differences in Education/ Employment status in Intimate Partner Victimization Crime Victim's Institute Houston University
- 21 Los datos sobre violencia sexual provienen del informe de la encuesta Indian National Family Health Survey -4, realizada en 2015-16 a escala nacional. El informe se publicó en diciembre de 2017. Se hace referencia a los datos en la sección 16.6 1 sobre prevalencia de violencia conyugal (pág. 566). Ver las tablas 16.4 y 16.9 para obtener información más detallada. <http://rchiips.org/nfhs/>
- 22 Ver el sitio web de Feminism in India: <https://feminisminindia.com/sh-law/>
- 23 Los nuevos países son Brasil, Belice, Chad, Kosovo y Uzbekistán.
- 24 El ranking general de un país se calcula a partir de la media de las puntuaciones en los tres pilares, y no como media de su ranking en cada uno de esos pilares. El ranking que obtienen para cada pilar es irrelevante a la hora de otorgarles el ranking general. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de Dinamarca (ver cuadro).
Cuadro: Ranking general de Dinamarca y por pilar

País	Gasto en salud, educación y protección social	Progresividad de la estructura fiscal e incidencia de los impuestos	Políticas de empleo para hacer frente a la desigualdad	Puesto según el CRI
Dinamarca	5	2	2	1
Puntuación	0,74	0,92	0,97	0,87

- 25 Datos de mortalidad infantil del Banco Mundial para Nigeria, ver: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.MORT>
- 26 Premium Times (2015). 10.5 million children out of school in Nigeria – UNICEF. <http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/188590-10-5m-children-out-of-school-in-nigeria-unicef.html>
- 27 UNICEF Nigeria. Consultado en: <https://www.unicef.org/nigeria/education.html>
- 28 Recientemente se ha producido un cierto incremento de la recaudación fiscal en Nigeria, pero no ha tenido ningún impacto todavía en la ratio entre los impuestos y el PIB, que sigue siendo de tan solo del 6%. <https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/256385-firs-recorded-n4-trillion-tax-revenue-collection-2017-fowler.html>
- 29 FMI (2018). Nigeria: Selected Issues. Country Report No. 18/64. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/07/Nigeria-Selected-Issues-45700>
- 30 "Debemos prestar atención, y centrarnos en las crecientes desigualdades en las sociedades, así como en la brecha existente entre los países ricos y pobres. Dichas desigualdades y brecha son una de las causas subyacentes de la competencia por los recursos, la frustración y la ira, factores que exacerban la inestabilidad". – Declaración del presidente de la República Federal de Nigeria Muhammadu Buhari en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2017. Buhari, M. New York: Naciones Unidas, 2017. Debate general en el 72º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- 31 Ver Banco Mundial. Índice GINI. <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AR>
- 32 D. Rossignolo (2016). The Impact of Taxes and Expenditures on Poverty and Income Distribution in Argentina. Commitment to Equity Working Paper 45. http://www.commitmenttoequity.org/wp-content/uploads/2017/05/CEQ_WP45_Rossignolo_May17_2017.pdf
- 33 Ver <http://legis.senado.leg.br/legislacao/Default.aspx?Codigo=540698> y D. Philips (2016). Brazil senate approves austerity package to freeze social spending for 20 years. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/13/brazil-approves-social-spending-freeze-austerity-package>
- 34 Argentina: IMF-Style Austerity Can't Be Macri's Only Solution <https://www.forbes.com/sites/afontevicchia/2018/06/08/argentina-imf-style-austerity-cant-be-macris-only-solution/#4d3880187161>
- 35 <https://www.telesurtv.net/english/news/Argentina-Professors-Teachers-Protest-Against-Budget-Cuts-20180824-0013.html> y <https://www.afp.com/en/news/15/argentinas-president-announces-new-austerity-measures-doc-18t7ka2>
- 36 J Engel (2010) Ethiopia's progress in education: A rapid and equitable expansion of access <https://allafrica.com/download/resource/main/main/00020257:ae9e77aeacf6cb4d8a886967f7390afe.pdf>
- 37 J.E. Stiglitz y A. Schiffrin (2016). Learning from Namibia. Project Syndicate. <https://www.project-syndicate.org/commentary/namibia-economic-social-success-story-by-joseph-e--stiglitz-and-any-a-schiffrin-2016-06>
- 38 Banco Mundial (2017). Does Fiscal Policy Benefit the Poor and Reduce Inequality in Namibia? http://www.commitmenttoequity.org/wp-content/uploads/2018/03/Namibia_116029-WP-P148652-PUBLIC-NamibiaCEQReport.pdf
- 39 Y. Byeon et al. (2017). Korea's Paradigm Shift for Sustainable and Inclusive Growth: A Proposal. Documento de trabajo del FMI. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/21/Koreas-Paradigm-Shift-for-Sustainable-and-Inclusive-Growth-A-Proposal-45423>
- 40 Jo He-rim (2017). Parliament passes 2018 government budget proposal. The Korea Herald. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171205001033>. Los futuros aumentos adicionales del salario mínimo previstos se han visto reducidos ante la crítica feroz de la comunidad empresarial, así como para mitigar el impacto económico a corto plazo. Asimismo, el presidente Moon ha abierto un sistema de subvenciones para las pequeñas empresas a fin de ayudarlas a afrontar el coste vinculado a estos incrementos salariales. <http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/09/12/0200000000AEN20180912004251320.html>
- 41 C. Kim (2017). Rich South Koreans, conglomerates face big tax bill as government seeks to fund welfare. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-economy-tax/rich-south-koreans-conglomerates-face-big-tax-bill-as-government-seeks-to-fund-welfare-idUSKBN1A10Z9>

- 42 Choi Ha-yung (2017). 86% support tax hike on rich. Korea Times. http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/07/356_233532.html
- 43 CGTN America (2017). El presidente de Corea del Sur advierte de que la creciente desigualdad está desencadenando una crisis. <https://www.youtube.com/watch?v=0RSGTDIG-h0>
- 44 C. Kim (2017). Rich South Koreans, conglomerates face big tax bill as government seeks to fund welfare. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-economy-tax/rich-south-koreans-conglomerates-face-big-tax-bill-as-government-seeks-to-fund-welfare-idUSKBN1A10Z9>
- 45 Yonhap News (2017). Texto completo del discurso del presidente Moon de Corea del Sur ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. <http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/09/21/0301000000AEN20170921013400315.html>
- 46 Ver, por ejemplo: <http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/fiscalia-pide-investigar-dos-congresistas-por-corrupcion-1B7605280>
- 47 Ver <https://www.theguardian.com/world/2018/feb/20/iceland-equal-pay-law-gender-gap-women-jobs-equality>
- 48 S.J. Klees (2017). Liberia's Experiment with Privatizing Education. <http://ncspe.tc.columbia.edu/working-papers/WP235.pdf>
- 49 Sierra Leone Telegraph (19 de agosto de 2018). <https://www.thesierraleonetelegraph.com/sierra-leone-launches-free-school-education/> <https://www.thesierraleonetelegraph.com/sierra-leone-launches-free-school-education/>
- 50 R. Desai (2015). Does the Developing World Need a Welfare State to Eliminate Poverty? Some insights from history. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2015/07/30/does-the-developing-world-need-a-welfare-state-to-eliminate-poverty-some-insights-from-history/>
- 51 The Jakarta Post (24 de febrero de 2017). <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/24/government-to-reform-tax-to-fight-widening-inequality.html> <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/24/government-to-reform-tax-to-fight-widening-inequality.html>
- 52 C. Hoy and A. Sumner (2016). Gasoline, Guns, and Giveaways: Is There New Capacity for Redistribution to End Three Quarters of Global Poverty? CGD Working Paper 433. Washington DC: Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/sites/default/files/gasoline-guns-and-giveaways-end-three-quarters-global-poverty-0.pdf>
- 53 A. Krozer (2015). For Richer or Poorer: The capture of growth and politics in emerging economies. Oxfam Internacional. <http://oxf.am/ZmqK>
- 54 A. Arendar y E. Seery (2014). Iguales: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas, pág. 36 Oxfam. <https://www.oxfam.org/es/informes/iguales-acabemos-con-la-desigualdad-extrema>
- 55 S. Kumar (2015) Private Sector in Healthcare Delivery Market in India Institute for Studies in Industrial Development Working Paper 185
- 56 Ver, por ejemplo, la efectiva campaña *The Nine is Mine*. La edición de 2017 del informe CRI incluía un cuadro sobre esta campaña.
- 57 Para un análisis y debate detallados sobre la desigualdad en América Latina y el Caribe, ver R. Cañete et al. (2015). Privilegios que niegan derechos: Desigualdad extrema y secuestro político en América Latina y el Caribe. Oxfam. <http://oxf.am/ZmS9>
- 58 Si quiere compartir alguna historia, envíela al siguiente correo electrónico: max.lawson@oxfam.org
- 59 Estas incluyen una "patent box" (privilegios fiscales para el desarrollo de propiedad intelectual), privilegios fiscales para el sector marítimo, el "global trader programme" (reducción temporal del tipo del impuesto de sociedades a los ingresos empresariales) y privilegios fiscales para el sector financiero. Para más información, ver: PwC Worldwide Tax Summaries on Singapore's corporate tax incentives. <http://taxsummaries.pwc.com/ID/Singapore-Overview>
- 60 Croacia ha reducido el tipo del impuesto sobre la renta en un 3%, y el tipo máximo del impuesto de sociedades en un 2%. Por su parte, Egipto ha recortado los tipos máximos del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades en un 2% y un 2,5% respectivamente.
- 61 Development Pathways. Mongolia and Kyrgyzstan lose out in their struggle with the IMF over the targeting of child benefits. <http://www.developmentpathways.co.uk/blog/mongolia-kyrgyzsg-child-benefits/>
- 62 El cálculo se ha obtenido al comparar el promedio del coeficiente global de Gini (consultado en el POVCALNET del Banco Mundial) con el promedio del cambio en Gini ocasionado por el gasto en el indicador S2 en la base de datos del CRI.
- 63 La reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades para las Pymes puede ser una buena medida política para los Gobiernos que quieran abordar la desigualdad, frente a las estrategias de planificación fiscal agresiva de grandes empresas que les permite en la práctica pagar tipos efectivos más bajos de los que pagan las Pymes. .
- 64 Los recortes en los países con más peso económico son especialmente preocupantes, ya que un mayor volumen de grandes empresas operan en ellos, y las políticas de dichos países tienden a tener un mayor impacto en otros países, tanto directo como indirecto.
- 65 Ver el sitio web: <http://labour-rights-indicators.la.psu.edu>

- 66 Incluso el Índice de Instituciones Sociales y de Género de la OCDE (SIGI) solo mide si se siguen correctamente los procedimientos legales cuando hay un caso en los tribunales. .
- 67 Para más detalles sobre la Declaración de Abuja, ver http://www.who.int/healthsystems/publications/abuja_declaration/en/ y para la Declaración de Incheon, ver http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
- 68 Para el informe de la Comisión de Bachelet, ver: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_165750.pdf
- 69 R. Joyce y L. Sibeta (2013) Labour's record on poverty and inequality Institute of Fiscal Studies <https://www.ifs.org.uk/publications/6738>
- 70 Ver M. Whitaker (2017). Economy Drive: Priorities and prospects ahead of the last Spring Budget. Resolution Foundation Briefing. <https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2017/02/Economy-Drive.pdf>; y L. Elliot y K. Allen (2017). Según este informe, el Reino Unido se enfrenta a una regresión propia de la "era Thatcher" en términos de desigualdad. The Guardian. <https://www.theguardian.com/business/2017/jan/31/theresa-may-inequality-margaret-thatcher-resolution-foundation>
- 71 Según los datos de la OCDE, Dinamarca registró un aumento del 19,2% en el índice Palma entre 2005 y 2015, lo que supone un incremento excepcional (basado en los datos de la OCDE: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670>). Las propias estimaciones del Gobierno muestran que las reformas políticas del período 2012-2016 han aumentado el coeficiente de Gini en relación con los ingresos disponibles en 0,48 puntos porcentuales. Fuente: <https://lo.dk/wp-content/uploads/2016/12/ny-indkomstulighed.pdf>. Antes de 2004, el ingreso del 40% más pobre de la población de Dinamarca era mayor que el del 10% más rico, pero la situación se ha revertido desde entonces. Ver: https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl16.pdf
- 72 Gustav A. Horn, et al. (2017). Was tun gegen die Ungleichheit? Wirtschaftspolitische Vorschläge für eine reduzierte Ungleichheit. IMK Report 129. Düsseldorf disponible en: https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_129_2017.pdf
- 73 D. Hardoon (2017). Una economía para el 99%: Es hora de construir una economía más humana y justa al servicio de las personas. Oxfam. <http://oxf.am/ZLBB>; <https://doi.org/10.21201/2017.8616>
- 74 I. Macias-Aymar, D. Vasquez y M. Lawson (2018) Premiar el trabajo, no la riqueza: Para poner fin a la crisis de desigualdad, debemos construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos. Oxfam <https://www.oxfam.org/es/informes/premiar-el-trabajo-no-la-riqueza>
- 75 También es cierto que estos factores estructurales suelen ser mucho más dependientes del contexto específico que las medidas generales de gasto y fiscalidad progresivas y derechos laborales, que son importantes en la reducción de la desigualdad en prácticamente todos los contextos.
- 76 Ver, por ejemplo, F. Rhodes (2016). Mujeres y el 1% La desigualdad económica extrema y la desigualdad de género deben abordarse conjuntamente <https://www.oxfam.org/es/informes/mujeres-y-el-1>. Oxfam; F. Rhodes (2017) Una economía para las mujeres: Alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres en un mundo cada vez más desigual. Oxfam; <https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-para-las-mujeres> M. Chan (2018). Unpaid Care – Why and How to Invest: Policy briefing for national governments. Oxfam. <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/unpaid-care-why-and-how-to-invest-policy-briefing-for-national-governments-620406>; y A. Parvez-Butt et al. (2018). Exploring the Need for Gender-Equitable Fiscal Policies for a Human Economy: Evidence from Uganda and Zimbabwe. Oxfam. <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/exploring-the-need-for-gender-equitable-fiscal-policies-for-a-human-economy-evi-620417>
- 77 Miles Corak (2013). Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility. *Journal of Economic Perspectives*. 27:3. pp. 79-102. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.3.79>
A nivel global: Narayan, Ambar; Van der Weide, Roy; Cojocar, Alexandru; Lakner, Christoph; Redaelli, Silvia; Mahler, Daniel Gerszon; Ramasubbaiah, Rakesh Gupta N.; Thewissen, Stefan. 2018. Fair Progress? Economic Mobility Across Generations Around the World. Equity and Development. Washington, DC: World Bank.
- 78 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017). Cada año fallecen más de 1,2 millones de adolescentes por causas que, en su mayor parte, podrían evitarse. <http://www.who.int/es/news-room/detail/16-05-2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable>; y The Economist (2018). In some countries, killer cops are celebrated. <https://www.economist.com/international/2018/03/08/in-some-countries-killer-cops-are-celebrated>
- 79 R. Chetty (2018). Race and Economic Opportunity in the USA. Equal Opportunity Project http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_summary.pdf
- 80 Ver, por ejemplo, Civicus (2016). State of Civil Society Report 2016. <http://www.civicus.org/index.php/socs2016>
- 81 L. Bartels (2002). Economic Inequality and Political Representation. Princeton.
- 82 Tharanga Yakupitiyage (2017). 'Banging on the Door' – Women Fight for a Voice and Space in Civil Society. Inter-Press Service. <http://www.ipsnews.net/2017/12/banging-door-women-fight-voice-space-civil-society/>
- 83 O. O'Donnell et al. (2007). *The Incidence of Public Spending on Healthcare: Comparative Evidence from Asia*. The World Bank Economic Review 21(1) (January): 93–123. <https://doi.org/10.1093/wber/hl009>. Este análisis señala que el gasto en salud reduce la desigualdad en 11 de 12 países en Asia.

- 84 E. Seery (2014). *Gobernar para la mayoría: Servicios públicos contra la desigualdad*. Oxfam. <https://www.oxfam.org/es/informes/gobernar-para-la-mayoria>
- 85 En su trabajo con el Instituto Commitment to Equity (CEQ), Nora Lustig identifica cuatro tipos de desigualdad de ingreso. El primero es la desigualdad de mercado, esto es, la desigualdad que resulta de la adjudicación de ingresos a hogares y empresas antes de la intervención del Gobierno mediante impuestos y transferencias. El segundo es el ingreso disponible, que es la cantidad de ingresos tras impuestos directos y transferencias. El tercero es el ingreso disponible para el consumo, que es la cantidad restante tras el pago de impuestos indirectos y transferencias. Y el último es el ingreso final, que es la cantidad resultante cuando se tiene en cuenta el valor monetario de los servicios de educación y salud. Ver, por ejemplo, N. Lustig (2017). *Fiscal policy, Inequality and the Poor in the Developing World*. http://www.commitmenttoequity.org/wp-content/uploads/2017/08/CEQ_WP23_Lustig_July2017v2.pdf
- 86 Los datos incluyen todos los sistemas que tienen algún elemento contributivo (por ejemplo, pensiones o seguros) y sistemas no contributivos, e incluye nueve categorías: enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo, prestaciones de ayuda a la familia, maternidad, invalidez y ayudas para sobrevivientes; más otros programas de apoyo a los ingresos y asistencia, como las transferencias monetarias condicionadas, disponibles para personas en situación de pobreza y que no se incluyen en las categorías anteriores.
- 87 Ver I. Ortiz. (2015). La protección social para todos que cambiará la vida de las personas de aquí a 2030. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_405778/lang-es/index.htm y la Recomendación 202 (R202) de la OIT https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
- 88 I. Marx, B. Nolan y J. Olivera (2015). *The Welfare State and Antipoverty Policy in Rich Countries*. En A.B. Atkinson y F. Bourguignon (eds). *Handbook of Income Distribution*, Vol. 2B, pp.2063–2139. Amsterdam: Elsevier.
- 89 Esto es entre 1970 y 2009. J. Martinez-Vazquez y B. Moreno-Dodson (2014). *The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence from a Large Panel of Countries*. Georgia State University.
- 90 Entre 2000 y 2007. G. Verbist, M. F. Förster y M. Vaalavuo (2012). *The Impact of Publicly Provided Services on the Distribution of Resources: Review of New Results and Methods*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 130. OECD Publishing.
- 91 N. Lustig (2015). *The Redistributive Impact of Government Spending on Education and Health*, op. cit.
- 92 N. Lustig (2017). *Fiscal Policy, Inequality and the Poor in the Developing World*. CEQ Working Paper 23. Instituto CEQ, Tulane University.
- 93 Para leer más sobre la Declaración de Abuja, ver: http://www.who.int/healthsystems/publications/abuja_declaration/en/; y sobre la Declaración de Incheon, ver: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf>
- 94 OIT (2016). El Banco Mundial y la OIT anuncian una nueva iniciativa a favor de la protección social universal. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_526160/lang-es/index.htm
- 95 ODS 1.3: 'Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.'
- 96 UNESCO et al. (2017). *More Than One-Half of Children and Adolescents Are Not Learning Worldwide*. Fact Sheet 46. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf>
- 97 Education Commission (2016). *The Learning Generation: Investing in education for a changing world*. http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
- 98 Calculado a partir de datos estadísticos en A. Benavot et al. (2016). *Global Education Monitoring Report 2016: Education for People and Planet – creating sustainable futures for all*. París: UNESCO.
- 99 J. Walker et al. (2016). *Private Profit, Public Loss: Why the push for low-fee private schools is pushing quality education off-track. South Africa: Global Campaign for Education*. <http://www.right-to-education.org/es/node/854>
- 100 Ibid.
- 101 N. Lustig (2017). *Fiscal policy, Inequality and the Poor in the Developing World*, op. cit.
- 102 OMS (2017). Cobertura sanitaria universal (CSU). Nota descriptiva. [http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc))
- 103 Abena D. Oduro, Albert A Arhin, George Domfe, Seidu Alidu, Felix S.K. Agyeman, Doreen Edem Asimadu, Jo Walker, Luke Gibson, Chiara Mariotti, Sarah Hall (2018) *Building a more equal Ghana: A 5-point action plan to close the gap between the rich and the rest*. Oxfam. <https://oxf.am/2D6wvcD>
- 104 Las cifras más actuales de la presentación por Oswald Essuah-Mensah, Corporate Affairs Directorate, NHIA 29 de marzo de 2018.
- 105 National Women's Law Center (2013). *Women and the Health Care Law in the United States*. <https://nwl.org/resources/women-and-health-care-law-united-states/>
- 106 O. Causa y M. Hermansen (2017). *Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries*. OCDE: Economics Department Working Papers No 1453.

- 107 OCDE (2011). *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising* (Summary in Spanish), OCDE Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264119536-sum-es>.
- 108 Las pensiones contributivas tienen un efecto igualador significativo en Argentina, Brasil y Uruguay, así como en Chile, Costa Rica y Ecuador, aunque en estos últimos el efecto es pequeño. Ver N. Lustig (2016). *The Impact of Taxes and Social Spending on Inequality and Poverty in Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Peru, and Uruguay*. (Spanish summary). Center for Global Development Working Paper 427. <https://www.cgdev.org/publication/el-impacto-del-sistema-tributario-y-el-gasto-social-en-la-distribucion-del-ingreso-y-la>
- 109 O. Causa y M. Hermansen (2017). *Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries*, op. cit.
- 110 Ver OCDE (2015). *In It Together*, op. cit.; y N. Lustig (2015). *The Redistributive Impact of Government Spending on Education and Health*, op. cit.
- 111 N. Lustig et al. (2011). *Fiscal Policy and Income Redistribution in Latin America: Challenging the Conventional Wisdom*. Tulane University Working Paper 1124. Este artículo demuestra, por ejemplo, que Bolivia gasta cinco veces más que Perú, pero como la inversión no está dirigida hacia las personas en situación de pobreza, la redistribución es limitada y solo ligeramente mayor que en Perú.
- 112 S. Kidd, B. Gelders y D. Bailey-Athias (2017). *Exclusion by design: An assessment of the effectiveness of the proxy means test poverty targeting mechanism*. Extension of Social Security (ESS) Paper Series No. 56. Ginebra: OIT y Development Pathways.
- 113 Banco Asiático de Desarrollo (2013). *Social Protection Index: Assessing Results for Asia and the Pacific*. <https://www.adb.org/publications/social-protection-index-assessing-results-asia-and-pacific>
- 114 Ibid.
- 115 Development Pathways. (no date). *Mongolia and Kyrgyzstan lose out in their struggle with the IMF over the targeting of child benefits*. <https://www.developmentpathways.co.uk/blog/mongolia-kyrgyzstan-child-benefits/>
- 116 I. Ortiz, F. Durán-Valverde, K. Pal, C. Behrendt y A. Acuña-Ulate (2017). *Universal Social Protection Floors: Costing Estimates and Affordability in 57 Lower Income Countries*. Extension of Social Security Series No. 58. Ginebra: OIT. <http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourcelid=54915>
- 117 H. Cortés Saenz y D. Itriago (2018). El fenómeno de la captura: desenmascarando el poder. Oxfam Intermón, junio 2018 Disponible en: <https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/29/06/18/fenomeno-de-captura-desenmascarando-poder>
- 118 OCDE (2004). Recisión de Políticas Nacionales de Educación: Chile 2004. https://www.oecd-ilibrary.org/education/revision-de-politicas-nacionales-de-educacion_1990021x; y J. Walker et al. (2016). *Private Profit, Public Loss*, op. cit.
- 119 A. Kireyev (2013). *Inclusive Growth and Inequality in Senegal*. IMF Working Paper 13/215. <https://doi.org/10.5089/9781475580266.001>
- 120 G. Canavire-Bacarrea, J. Martinez-Vazquez y C. Sepulveda (2012). *Sub-national Revenue Mobilization in Peru*. International Center for Public Policy Working Paper 12-09.
- 121 Para consultar un debate útil sobre algunos de estos modelos, ver K. Watkins y W. Alemayehu (2012). *Financing for a Fairer, More Prosperous Kenya: A review of the public spending challenges and options for selected arid and semi-arid counties*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/08-financing-kenya-watkins.pdf>.
- 122 Ver M. Martin y J. Walker (2015). *Financing the Sustainable Development Goals: Lessons from government spending on the MDGs. Government Spending Watch Report 2015*. Oxfam y Development Finance International. <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/financing-the-sustainable-development-goals-lessons-from-government-spending-on-556597>
- 123 N. Lustig (2012). *Taxes, Transfers, and Income Redistribution in Latin America*. Grupo Banco Mundial. Inequality in Focus series. <http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/InequalityInFocusJuly2012FINAL.pdf>
- 124 Banco Mundial (2014). Voz y participación: Empoderar a las mujeres y las niñas para promover la prosperidad compartida. (Informe solo disponible en inglés) (http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf)
- 125 Los datos de la UNESCO (2013) demuestran el efecto transformador de la educación en el desarrollo: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/excel/dme/Press-Release-En.pdf>
- 126 UNESCO (2104) Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo <https://es.unesco.org/gem-report/node/259>
- 127 Ibid.
- 128 Ver, por ejemplo, UNESCO (2013). *Girls' education – the facts*. <http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-en.pdf>
- 129 M. Corak (2013). *Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility*. Journal of Economic Perspectives, 27 (3): 79-102; S.E. Mayera y L.M. Lopoo (2008). *Government spending and intergenerational*

- mobility*. Journal of Public Economics, Vol. 92, Issues 1–2, febrero 2008, pp.139-158.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004727270700059X> - !; J. Jerrim y L. Macmillan (2015). *Income Inequality, Intergenerational Mobility, y The Great Gatsby Curve: Is Education the Key?* Social Forces, Vol. 94, Issue 2, 1 diciembre 2015, pp.505-533. <https://doi.org/10.1093/sf/sov075>
- 130 M. Meyers, D. Rosenbaum, C. Ruhm y J. Waldfogel (2004). *Inequality in early childhood education and care: What do we know?* Social Inequality 22.
- 131 OCDE Development Centre (2014). *Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes*. https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
- 132 ONU Mujeres (2015). El progreso de las mujeres en el mundo 2015–2016: Transformar las economías para realizar los derechos. <http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015> Para consultar más ejemplos, ver: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/policy_brief_gender_gaps_social_protection_en.pdf
- 133 E. Samman et al. (2016). *Women's Work: Mothers, children and the global childcare crisis*. Overseas Development Institute. <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10333.pdf>
- 134 T. Bhatkal (2016). *Women's work: mothers, children and the global childcare crisis*. Blog de Oxfam. <http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2016/05/womens-work>
- 135 E. Samman et al. (2016). *Women's Work: Mothers, children and the global childcare crisis*. Op. cit.
- 136 J.G. Stotsky (2016). *Gender Budgeting: Fiscal Context and Current Outcomes*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16149.pdf>
- 137 El FMI ha desarrollado muchas investigaciones y recomendaciones sobre este ámbito. Ver: <http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/26/14/42/NA072816-New-IMF-Study-Data-Tool-Track-Fiscal-Policies>
- 138 La cobertura de los distintos servicios y el papel que desempeñan en la redistribución varía mucho entre países (y a menudo contrarrestan el nivel de desigualdad previo, y de desigualdad de ingresos antes de impuestos y transferencias) y de la estructura del gasto. Por ejemplo, la OCDE ha demostrado que Nueva Zelanda se centra en transferencias dirigidas a la reducción de la pobreza; Alemania plantea la redistribución a lo largo del ciclo vital; Suecia emplea el modelo nórdico de grandes transferencias económicas con carácter casi siempre universal, con un elevado nivel de gasto. Para más información, ver I. Joumard, M. Pisu y D. Bloch (2012). *Tackling Income Inequality: The role of taxes and transfers*. OECD Journal: Economic Studies. http://dx.doi.org/10.1787/eco_studies-2012-5k95xd61651t
- 139 Todos son países de rentas altas (HICs) excepto Brasil y Costa Rica, que son países de renta media-alta (UMICs).
- 140 Se ha demostrado que las transferencias en salud y educación y las ayudas económicas son altamente progresivas. Por ejemplo, han contribuido a lograr mayor equidad en Costa Rica. Ver P. Sauma y J. Diego Trejos (2014). *Social Public Spending, Taxes, Redistribution of Income, and Poverty in Costa Rica*. CEQ Working Paper 18. http://www.commitmenttoequity.org/publications_files/Costa%20Rica/CEQWPNo18%20PubSpendTaxRedistIncandPover%20Costa%20Rica.pdf
- 141 Por ejemplo, contiene indicadores de mortalidad infantil y esperanza de vida comparables a los elaborados en países europeos. Ver M. del Rocío Sáenz, J. L. Bermúdez y M. Acosta (2010). *Universal Coverage in a Middle Income Country: Costa Rica*. OMS. World Health Report (2010) Background Paper 11. <http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/CostaRicaNo11.pdf>
- 142 P. Sauma y J. Diego Trejos (2014). *Social Public Spending, Taxes, Redistribution of Income, and Poverty in Costa Rica*, op. cit.
- 143 OECD (2016). *All together: Making growth more inclusive in Costa Rica*. In *OECD Economic Surveys: Costa Rica 2016: Economic Assessment*, París: Publicaciones de la OCDE. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-cri-2016-4-en
- 144 M. Bucheli, N. Lustig, M. Rossi y F. Amábile (2013). *Social Spending, Taxes and Income Redistribution in Uruguay*. Commitment to Equity Institute. CEQ Working Paper 10. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6380>
- 145 Se ha demostrado que los sistemas de protección social en Uruguay tienen un impacto diverso en la desigualdad. N. Lustig (2017). El impacto del sistema tributario y el gasto social en la distribución del ingreso y la pobreza en América latina. Una aplicación del marco metodológico del proyecto compromiso con la equidad (CEQ). http://www.commitmenttoequity.org/wp-content/uploads/2017/08/CEQ_WP62_Lustig_July06_2017.pdf See also discussion in OECD (2015). *In It Together*, op. cit. *Contributory pensions are equalizing in Brazil and are very slightly unequalizing in Chile*, ver N. Lustig (2015). *Inequality and Fiscal Redistribution in Middle Income Countries: Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Mexico, Peru and South Africa*. Center for Global Development. Working Paper 410.
- 146 *Forbes Argentina: IMF style austerity can't be Macri's only solution*. <https://www.forbes.com/sites/afontevicchia/2018/06/08/argentina-imf-style-austerity-cant-be-macris-only-solution/#4d3880187161>
- 147 N. Lustig y C. Pessino (2013). *Social Spending and Income Redistribution in Argentina During the 2000s: The rising role of noncontributory pensions*. Commitment to Equity. CEQ Working Paper No. 5.

- http://www.commitmenttoequity.org/publications_files/Argentina/CEQWPNo5%20SocSpendRedist2000sArgentina%20Jan%202013%20REVISED%20Aug%2031%202013.pdf
- 148 N. Lustig (2012). *Taxes, Transfers, and Income Redistribution in Latin America*, op. cit.
- 149 N. Lustig (2015). *Most Unequal on Earth*. IMF. *Finance and Development*. Vol. 52. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/09/pdf/lustig.pdf>
- 150 En función del porcentaje de ingreso total destinado al gasto, el compromiso de Etiopía con el progreso social parece ser bastante alto: su nivel de gasto es mucho mayor que el que tenían los países hoy ricos cuando su nivel de ingresos per cápita eran tan bajos como los de Etiopía en la actualidad, y hay varias políticas de gasto dirigidas hacia las personas más pobres, aunque sean menos redistributivas (algo posible si se tienen en cuenta los elevados niveles de pobreza y la baja desigualdad). Ver World Bank (2015). *Ethiopia Poverty Assessment 2014*. http://www.commitmenttoequity.org/publications_files/Ethiopia/WorldBank%202014EthiopiaPovAssess%20CEQChapt5%20Feb%202015.pdf; y N. Lustig (2015). *The Redistributive Impact of Government Spending on Education and Health: Evidence from Thirteen Developing Countries in the Commitment to Equity Project*. CEQ Working Paper 30. http://www.commitmenttoequity.org/publications_files/Comparative/CEQWPNo30%20RedisImpactGovntSpendEducHealth%20March%202015.pdf
- 151 R. Desai (2015). *Does the Developing World Need a Welfare State to Eliminate poverty?* Op. cit.
- 152 Gov't Increases Provincial Minimum Wages by 8.71% for 2018 <http://jakartaglobe.id/news/govt-increases-provincial-minimum-wages-8-71-2018/> and
- 153 J. Walker et al. (2016). *Private Profit, Public Loss*, op. cit.
- 154 UNICEF. *Nigeria; The situation*. <https://www.unicef.org/nigeria/education.html>
- 155 Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR293/FR293.pdf>
- 156 Los datos sobre mortalidad infantil en Nigeria están disponibles en: <http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT>
- 157 Estados Unidos gasta el 16% de su PIB en salud, considerando el gasto público y privado combinado. Su gasto público, el 8,3% del PIB, es comparable al de otros países con cobertura sanitaria universal, como Francia o el Reino Unido, donde el gasto privado es muy poco. Este dato basta para demostrar la ineficiencia del sistema norteamericano. El gasto de Estados Unidos en, por ejemplo, Medicare para los ancianos, es similar al del resto de los países de la OCDE, y tiene un impacto en la reducción de la desigualdad.
- 158 Especialmente el cuidado terciario; por ejemplo, un estudio de la OCDE de 2010 (Koechlin et al. (2010)) demostró que el nivel de precios de los servicios hospitalarios en EEUU es un 60% más elevado que el precio medio de otros 12 países de la OCDE en 2007. <https://www.oecd.org/unitedstates/49084355.pdf>
- 159 Ver D. Mangan (2013). *Medical Bills Are the Biggest Cause of US Bankruptcies: Study*. CNBC. <http://www.cnn.com/id/100840148>
- 160 En total, hemos utilizado datos nacionales sobre la incidencia del gasto para 60 con datos disponibles, utilizando una combinación de datos de la OCDE y de estudios elaborados por el proyecto *Commitment to Equity* (CEQ) y cedidos amablemente a Oxfam. Los datos del CEQ provienen del Centro de Datos sobre Redistribución Fiscal del Instituto CEQ, basados en los informes del CEQ "Workbooks of Results": Argentina (Rossignolo, 2016); Armenia (Younger y Khachatryan, 2014); Bolivia (Paz-Arauco et al., 2014); Brasil (Higgins y Pereira, 2016); Chile (Martínez-Aguilar y Ortiz-Juarez, 2016); Colombia (Melendez y Martínez, 2015); Costa Rica (Sauma y Trejos, 2014); República Dominicana (Aristy-Escuder et al., 2016); Ecuador (Llerena et al., 2014); El Salvador (Beneke, Lustig y Oliva, 2014); Etiopía (Hill, Tsehaye y Woldehanna, 2014); Georgia (Cancho y Bondarenko, 2015); Ghana (Younger, Osei-Assibey y Oppong, 2016); Guatemala (Cabrera y Moran, 2015); Honduras (Castañeda y Espino, 2015); Indonesia (Jellema, Wai Poi y Afkar, 2015); Irán (Enami, Lustig y Taqdiri, 2016); Jordán (Abdel-Halim et al., 2016); México (Scott, 2013); Nicaragua (Cabrera y Moran, 2015); Perú (Jaramillo, 2015); Rusia (Malysin y Popova, 2016); Sudáfrica (Inchauste et al., 2016); Sri Lanka (Arunatilake et al., 2016); Tanzania (Younger, Myamba y Mdadila, 2016); Túnez (Shimeles et al., 2015); Uganda (Jellema et al., 2016); Uruguay (Bucheli et al., 2014) y Venezuela (Molina, 2016). Todos disponibles en: www.commitmenttoequity.org
- 161 J. Martínez-Vázquez, B. Moreno-Dodson y V. Vulovic (2011). *The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution*. Georgia State University: Andrew Young School of Public Policy Studies.
- 162 Oxfam (2016). *Fiscal Justice Global Track Record: Oxfam's tax, budget and social accountability work*. <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/fiscal-justice-global-track-record-oxfams-tax-budget-and-social-accountability-620087>
- 163 Decidimos no utilizar los gastos privados ya que algunos países (como por ejemplo Sri Lanka) tienen un gasto privado elevado en salud, pero solo lo realizan las personas más ricas y no las más pobres; mientras que sus sistemas públicos de salud son progresivos, por lo que estos países hubieran resultado penalizados injustamente por ese elevado gasto privado. Cuando haya datos disponibles sobre el gasto privado en salud por distintos grupos sociales, podremos incluirlos.
- 164 J. Martínez-Vázquez y B. Moreno-Dodson (2014). *The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence from a Large Panel of Countries*. Georgia State University.
- 165 Martínez-Vázquez et al. (2012) demostraron que el gasto en vivienda pública tiene un efecto marginal hasta cinco veces superior que la educación y la salud, y un 10% más que la protección social. Verbist et al. (2012)

demonstraron que ha tenido un efecto marginal igual de elevado en países de la OCDE, especialmente si lo que se mide es el acceso a la vivienda.

- 166 Las ayudas a la vivienda, dirigidas a facilitar a las familias el pago del alquiler, se incluyen como parte del gasto en protección social.
- 167 B. Ellmers (2016). *The evolving nature of developing country debt and solutions for change*. A Eurodad discussion paper. Sobre un análisis de la situación actual de la deuda mundial, ver: J. Kaiser (2018). El *Global Sovereign Debt Monitor 2018* es un extracto del *Schuldenreport 2018*, una publicación conjunta de Jubilee Germany/erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e.V. y Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. publicado el 15 de marzo de 2018. Available at: <http://erlassjahr.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Global-Sovereign-Debt-Monitor-2018.pdf>
- 168 Gobierno de Kenia. Estimaciones del gasto del Gobierno de Kenia hasta el 30 de junio de 2019. <http://www.treasury.go.ke/component/jdownloads/send/198-2018-2019/775-recurrent-volume-i.html>
- 169 M. Devereux et al. (2016). *G20 Corporation Tax Ranking*. Oxford: Oxford University Centre for Business Taxation.
- 170 Fuentes: Anexo No. 3 – Gastos Tributarios. Ley de Presupuesto General del Estado 2017 (DIGEPRES), Cuadro 3, página 186: <http://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-3.pdf> y Anexo No. 2 - Información sobre los Gastos 2017. Ley de Presupuesto General del Estado 2017 (DIGEPRES). Clasificación Económica del Gasto según Funciones, páginas 122–123: <http://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-2.pdf> o el portal de transparencia: <http://transparenciafiscal.gob.do/para-que-se-gasta> Se ha tomado como referencia el presupuesto formulado para “salud” y “abastecimiento de agua”, y se ha comparado con el volumen estimado de impuestos para 2017. La categoría ‘agua y saneamiento’ debe reemplazarse por ‘abastecimiento de agua potable’.
- 171 Para leer más sobre Indonesia, ver L. Gibson (2017). *Towards a More Equal Indonesia: How the government can take action to close the gap between the richest and the rest*. Oxfam. <http://oxf.am/ZbM5>
- 172 Página de internet del Observatorio de Justicia Fiscal: <https://maketaxfair.net/ftm/>
- 173 Ibid.
- 174 Fair Tax Monitor (2016). *Composite Report*. <https://maketaxfair.net/assets/wbb-publications/1628/FTM%20Composite%20Report%202016.pdf>
- 175 Fair Tax Monitor (2017). *Bangladesh Report*. https://www.supro.org/images/publication/booklets/Fair_Tax_Monitor_2017.pdf
- 176 Fair Tax Monitor (2016). *Composite Report*. <https://maketaxfair.net/assets/wbb-publications/1628/FTM%20Composite%20Report%202016.pdf>
- 177 Para consultar más detalles, ver J. Birchall y F. Marzia (2015). *The Gender Dimensions of Expenditure and Revenue Policy and Systems*. IDS y DFID; C. Capraro (2014). *Taxing Men and Women: Why Gender is Crucial for a Fair Tax System*. Christian Aid; GTZ (2008). *Why Care About Taxation and Gender Equality*; y Swiss Development Cooperation (2015). *Conclusions of a Facilitated E-Discussion on Gender and Taxation*.
- 178 C. Grown y I. Valodia (2010). *Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries*. London y New York: Routledge.
- 179 Para consultar un resultado similar de una revisión sobre presupuestos con enfoque de género en todo el mundo, ver S. Quinn (2016). *A Survey of Gender Budgeting Efforts*. IMF Working Paper 16/155. <http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Europe-A-Survey-of-Gender-Budgeting-Efforts-44148>
- 180 Para el Reino Unido, ver por ejemplo *Women’s Budget Group*: <https://wbg.org.uk/>
- 181 Un impuesto de sociedades más bajo para PYMES puede ser una buena opción política para Gobiernos que quieran hacer frente a la desigualdad, sobre todo cuando, debido a la evasión y elusión por parte de las grandes empresas, los impuestos efectivos que pagan las PYMES acaban siendo superiores a los de las grandes empresas.
- 182 Los recortes en países con economías desarrolladas son especialmente preocupantes, ya que en dichos países operan más grandes empresas, y las políticas de estos países tienden a tener un impacto directo e indirecto mayor en otros países.
- 183 La incidencia del impuesto de sociedades se complica aún más por factores mundiales, como por ejemplo el efecto de los paraísos fiscales. También para las grandes multinacionales, cuyos dueños y accionistas están domiciliados en todo el mundo, el impacto de un aumento de impuestos en la reducción de la riqueza de los accionistas se distribuye en muchos países diferentes, no solo donde se cobra el impuesto.
- 184 Gobierno del Reino Unido HM Revenue and Customs (2018). <https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-corporation-tax/rates-and-allowances-corporation-tax>
- 185 Foro Económico Mundial. (2016). *Global Competitiveness Report 2016–2017*. <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/>
- 186 La manera en que esto se ha evaluado y puntuado se explica en detalle en la Nota Metodológica del CRI 2018.
- 187 Tal y como se mencionó en el discurso de presupuestos de 2016: <https://indianexpress.com/article/business/budget/budget-2016-arun-jaitley-union-budget-2016-full-text/gene>

- 188 CEPAL y Oxfam (2016). *Tributación para un crecimiento inclusivo*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/39949-tributacion-un-crecimiento-inclusivo>
- 189 Para más información sobre esto a nivel de país, ver Development Finance International (2016). *IMF Tax Policy Advice and TA: Is It Living Up To (Progressive) Expectations?* Policy research report for Oxfam International; y a nivel mundial, ver FMI (2015). *Options for Low Income Countries' Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment*. Staff Report. <https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/101515.pdf>
- 190 World Bank (2017). *Kenya Economic Update, December 2017: Poised to Bounce Back?* <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29033>; y *Government of Kenya Programme Based Budget*. http://www.treasury.go.ke/component/jdownloads/send/198-2018-2019/1221-programme-based-budget.html?option=com_jdownloads El gobierno de Kenia ha previsto invertir 180 millones de dólares en educación primaria gratuita en 2018/19.
- 191 E. Mwachinga (2013). Los resultados del estudio sobre motivación de los inversores se elaboraron en EAC. Banco Mundial, presentación ofrecida en febrero de 2013 en Lusaka, citada por ActionAid (2013). *Give Us a Break: How big companies are getting tax-free deals*. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/give_us_a_break_-_how_big_companies_are_getting_tax-free_deals_2.pdf
- 192 Annette Alstadsæter, Niels Johannesen, Gabriel Zucman (2017). *Tax Evasion and Inequality*. <http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf>
- 193 Para más información, ver E. Berkhout (2016). *Guerras fiscales: La carrera a la baja en la fiscalidad empresarial*. Oxfam. <https://www.oxfam.org/es/informes/guerras-fiscales-la-carrera-la-baja-en-la-fiscalidad-empresarial>
- 194 Para saber más sobre los efectos negativos de los acuerdos fiscales, ver ActionAid (2016). *Mistreated: How shady tax treaties are fuelling inequality and poverty*. <http://www.actionaid.org/2016/02/mistreated-how-shady-tax-treaties-are-fuelling-inequality-and-poverty>; FMI (2014). *Spillovers in International Corporate Taxation*. Policy Paper. <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf>; SOMO (2013). *Should the Netherlands Sign Tax Treaties With Developing Countries?* Centre for Research on Multinational Corporations; y F. Weyzig (2013). *Analysing Effects of Dutch Corporate Tax Policy on Developing Countries*. Netherlands Ministry of Foreign Affairs.
- 195 Red de Justicia Fiscal: <https://www.taxjustice.net/2016/06/22/tax-treaties-overturned/>
- 196 Lista común de la Unión Europea de jurisdicciones de terceros países a efectos fiscales. Disponible en inglés en: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
- 197 Los Países Bajos podrían adoptar medidas concretas para dejar de actuar como un paraíso fiscal para las grandes empresas, entre ellas: aprobar una regulación más estricta contra el traslado de beneficios hacia (otro) paraíso fiscal; dejar de ofrecer acuerdos fiscales a las empresas que permiten que éstas no paguen por una buena parte de sus beneficios (la llamada 'Regulación sobre el exceso de beneficios'); revertir la legislación que favorece a las grandes empresas con impuestos más bajos (*innovation box*); y apoyar medidas a nivel europeo y mundial contra la competencia fiscal a la baja entre países.
- 198 A pesar de clasificarse en primera posición en el pilar de fiscalidad, Australia está lejos de tener un desempeño ejemplar en fiscalidad. Australia puntúa en el puesto 40 por su esfuerzo en recaudación fiscal y en el 35 por el nivel de justicia en su sistema fiscal, muy por detrás de otros países de la OCDE. Australia tiene bastante margen para recaudar más y mejor. La clasificación final de Australia en primera posición se debe más a la decisión de DFI y Oxfam este año de tomar en cuenta las prácticas fiscales nocivas de otros. Comparado con países más agresivos, Australia no participa de las prácticas nocivas más agresivas, tales como exenciones fiscales especiales o por patentes, que favorezcan a las grandes empresas e individuos. Australia ha mejorado respecto a algunas de las iniciativas de la OCDE respecto al Proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios). No obstante, podría mejorar su legislación con un impuesto de salida, por ejemplo. Además, las últimas medidas que el Gobierno está intentando aprobar probablemente repercutan en una peor clasificación de Australia en el pilar de fiscalidad en el futuro. Estas medidas incluyen reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que reducirían la progresividad actual del sistema fiscal de Australia en los próximos años. Esto beneficiará de manera desproporcionada a los más ricos, que tienen ingresos más altos. También se ha debatido recientemente sobre recortar más aún los impuestos de sociedades, lo que haría de Australia el último país en sumarse a la carrera a la baja en la tributación de las grandes empresas. Australia debe mejorar también en el ámbito de la transparencia fiscal, que no se mide en el CRI. El país debe hacer públicos los informes país por país de las grandes empresas multinacionales, para poder actuar mejor contra la evasión y elusión fiscal y otras prácticas fiscales nocivas.
- 199 Ibid.
- 200 See R. Fenochietto y C. Pessino (2013). *Understanding Countries' Tax Effort*, IMF Working Paper 13/244; J. Torres (2013). *Revenue and Expenditure Gaps*. IMF Working Paper 13/05; y estudios posteriores del FMI en informes nacionales y regionales (Regional Economic Outlooks) y análisis fiscales. Ver también CERDI (2016). *Tax Potential and Tax Effort: An Empirical Estimation for Non-resource Tax Revenue and VAT's Revenue*; y J.P. Jimenez, J.C. Gomez Sabaini y A. Podesta (2013). *Tax Gaps and Equity in Latin America and the Caribbean*. GTZ/BMZ/CEPAL Fiscal Studies Paper 16.
- 201 I. Macias-Aymar, D. Vasquez y M. Lawson (2018) Premiar el trabajo, no la riqueza: Para poner fin a la crisis de desigualdad, debemos construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos. Oxfam. <https://www.oxfam.org/es/informes/premiar-el-trabajo-no-la-riqueza>
- 202 Ver, por ejemplo, FMI (2013). *Fiscal Monitor: Taxing Times*. IMF.

- 203 Los países analizados fueron Afganistán, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, El Salvador, France, Alemania, Ghana, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Níger, Nigeria, Rusia, España, Senegal, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
- 204 Oxfam ha analizado los impuestos sobre la riqueza en sus informes nacionales sobre la desigualdad. Ver, por ejemplo, Oxfam India (2018). *Implications of Wealth Taxes on Inequality in India*; L. Gibson (2016). *Towards a More Equal Indonesia*, op. cit; y R. Georges (2017). La distancia que nos une: Un retrato de las desigualdades brasileñas. Oxfam. <https://oxf.am/2yA3M9J>
- 205 T. Matheson (2011). *Taxing Financial Transactions: Issues and Evidence*. IMF Working Paper.
- 206 Los países que suprimieron sus impuestos sobre la riqueza fueron Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, India, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia. Alemania dejó de recaudar el impuesto sobre la riqueza en 1997.
- 207 D. Hardoon (2015). *Una economía al servicio del 1%*, op. cit.
- 208 Ibid.
- 209 Ibid.
- 210 Andy Haldane, Economista Jefe del Banco de Inglaterra, citada por BBC News (2015). *Shareholder power 'holding back economic growth'*. <http://www.bbc.co.uk/news/business-33660426>
- 211 Ibid.
- 212 Ibid.
- 213 I. Macías-Aymar, D. Vázquez y M. Lawson (2018) *Premiar el trabajo, no la riqueza*. Op. cit.
- 214 R. Wilshaw et al. (2015). *In Work But Trapped in Poverty: A summary of five studies conducted by Oxfam, with updates on progress along the road to a living wage*. Oxfam. <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-work-but-trapped-in-poverty-a-summary-of-five-studies-conducted-by-oxfam-wit-578815>; <https://doi.org/10.21201/2015.578815>
- 215 Ibid.
- 216 Worker Rights Consortium. (2013). *Global Wage Trends for Apparel Workers, 2001–2011*. Center for American Progress. <https://www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2013/07/11/69255/global-wage-trends-for-apparel-workers-2001-2011/>
- 217 Oxfam Australia (2017). *What She Makes: Power and poverty in the fashion industry*. Oxfam.
- 218 F. Jaumotte y C. Osario Bultron (2015). *Power From The People*, op. cit.
- 219 Ibid.
- 220 M. Walters y L. Mishel (2003). *How Unions Help all Workers*. Economic Policy Institute. https://www.epi.org/publication/briefingpapers_bp143/
- 221 A. Bruce y R. Skovoroda (2015). *The Empirical Literature on Executive Pay: Context, the pay-performance issue and future directions*. Nottingham University Business School. http://highpaycentre.org/files/academic_literature_review_FINAL.pdf
- 222 CIPD y High Pay Centre (2018). *Executive Pay: review of FTSE 100 executive pay*. http://highpaycentre.org/files/CEO_pay_report.pdf
- 223 Ley francesa: Clifford Chance (2017). *New French law imposing due diligence requirements in relation to human rights, health and safety, and the environment*. https://www.cliffordchance.com/briefings/2017/03/new_french_law_imposingduediligenc.html
- Ley holandesa: L. Unger (2017). *Due diligence on child labour in the Netherlands; a new law*. <https://www.linkedin.com/pulse/due-diligence-child-labour-netherlands-new-law-liesbeth-unger>
- 224 KPMG (2015). KPMG Economic Analysis. *Raising the minimum wage to the Living Wage would benefit staff and businesses*. <http://www.livingwage.org.uk/news/kpmg-economic-analysis-raising-minimum-wage-living-wage-would-benefit-staff-and-businesses>
- 225 RAND Europe (2016). *The impact of the National Minimum Wage on employment: a meta-analysis. A report for the UK Low Pay Commission*. <https://www.rand.org/randeuropa/research/projects/national-minimum-wage.html>
- 226 A. Smith (2015). *Where there's a political will....* Blog. Ethical Trade Initiative. <http://www.ethicaltrade.org/blog/where-theres-political-will>
- 227 The Jakarta Post (2016). *Indonesia to propose minimum wage for ASEAN workers*. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/03/indonesia-to-propose-minimum-wage-for-asean-workers.html>
- 228 Gallup y OIT. (2017). *Towards a Better Future for Women and Work: Voices of Women and Men*. Consultado el 10 de octubre de 2017, en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
- OIT. (2016). *Women at Work: Trends 2016*. Consultado el 15 de septiembre de 2017, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457317.pdf

- 229 F. Rhodes et al. (2016). *Underpaid and Undervalued: How inequality defines women's work in Asia*. Oxfam. <http://oxf.am/ZXP>
- 230 Ibid.
- 231 PNUD *Human Development Report: Gender Inequality Index*. <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>; y Foro Económico Mundial (2016). *The Global Gender Gap Report 2016*. <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/>
- 232 Cuando todo el empleo, remunerado y no remunerado, es tenido en cuenta, las mujeres trabajan más horas que los hombres en todas las regiones. Según un informe de 2018 de la OIT, las mujeres trabajan una media de cuatro horas y 25 minutos al día, frente a una hora y 23 minutos de los hombres. OIT (2018). *Care Work and Care Jobs: For the Future of Decent Work*. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
- 233 The Economist (2016). *A Proper Reckoning*. <http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21694529-feminist-economics-deserves-recognition-distinct-branch-discipline>
- 234 OIT (2018). *Care Work and Care Jobs: For the Future of Decent Work*, op. cit.
- 235 Todos los datos en este párrafo están tomados de OIT (2017) *Global Employment Trends for Youth*.
- 236 Ver International Trade Union Confederation (ITUC). *Survey of Violations of Trade Union Rights*. <http://survey.ituc-csi.org/Sri-Lanka.html?lang=en#tabs-3>
- 237 Even the OECD SIGI index only measures whether legal procedures are correctly followed when cases are brought before courts.
- 238 Para más información, ver BBC (2018). *Iceland now the first country to enforce equal pay for women and men*. <https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/253d8b3e-1891-43ab-8848-4a5110bda171>
- 239 Este cuadro está sacado de OCDE (2015). *In It Together*, op. cit.
- 240 También es importante tener en cuenta la clasificación de países en el Índice Mundial de Derechos de ITUC. ITUC es una confederación de sindicatos nacionales, con un total de 328 organizaciones afiliadas en 162 países y territorios en los cinco continentes, con 176 millones de socios, el 40% de los cuales son mujeres. <http://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2015>. La publicación de 2015, segunda versión, señala los peores países para trabajar, puntuando 141 países en una escala de 1 a 5 en función del grado de respeto de los derechos laborales, y aporta análisis regionales con ejemplos nacionales.
- 241 Fair Labor Association (2016). *Toward Fair Compensation in Global Supply Chains: Factory pay assessments in 21 countries*. <http://www.fairlabor.org/report/toward-fair-compensation-global-supply-chains-factory-pay-assessments-21-countries>
- 242 Campaña Ropa Limpia (2013). *Bangladesh Minimum Wage*. <https://cleanclothes.org/livingwage/bangladesh-minimum-wage>
- 243 OIT (2014). Salarios y tiempo de trabajo en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado. https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_300643/lang--es/index.htm
- 244 OCDE. *Social Institutions and Gender Index* (SIGI). <https://www.genderindex.org/>
- 245 Informes de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EEUU. <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/>
- 246 El cálculo de la OIT sobre empleo vulnerable (incluido el empleo por cuenta propia y la contribución de trabajadores familiares) es utilizado como proxy para empleo informal.
- 247 Algunas personas defienden que el sector informal es positivo, ya que ofrece empleo a aquellas personas que de otra manera no tendrían trabajo, y que al descontar este factor no estamos reconociendo este efecto. No obstante, en el sector informal se producen los peores abusos de los derechos laborales y contra las mujeres, sin posibilidad de buscar protección en los sindicatos. Cuanto menor es el sector informal y mejor regulado está, mejor para las personas vulnerables.
- 248 Banco Mundial (2016). *Poverty in a Rising Africa*. <http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/poverty-rising-africa-poverty-report>
- 249 F. Alvaredo, L. Chancel, T. Piketty, E. Saez y G. Zucman (eds). (2017). Informe sobre la desigualdad global 2018. <https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf>
- 250 R. van der Weide (2016). *Is inequality underestimated in Egypt? Evidence from housing prices*. Blog del Banco Mundial. <http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/inequality-underestimated-egypt-evidence-housing-prices>
- 251 Para consultar una argumentación completa y análisis sobre desigualdad en América Latina y Caribe ver R. Canete et al. (2015). Privilegios que niegan los derechos, op. cit.
- 252 Esto se conoce en economía como la Curva de Kuznets, en honor a Simon Kuznets.

Oxfam y Development Finance International han elaborado conjuntamente este informe para compartir los resultados de sus investigaciones, contribuir al debate público y recibir comentarios y sugerencias.

Si desea más información o realizar comentarios sobre este informe, póngase en contacto con max.lawson@oxfaminternational.org o matthew.martin@dri.org.uk

© Oxfam International y Development Finance International; octubre de 2018

Esta publicación está sujeta a *copyright* pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del *copyright* solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa. Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico a través de la dirección: policyandpractice@oxfam.org.uk

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con el ISBN 978-1-78748-343-9 en octubre de 2018. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

DEVELOPMENT FINANCE INTERNATIONAL

Development Finance International Group es un grupo sin fines de lucro dedicado al fortalecimiento de las capacidades, la promoción, el asesoramiento y la investigación que trabaja con más de 50 Gobiernos y organismos internacionales en todo el mundo para ayudar a que el financiamiento del desarrollo luche contra la pobreza y la desigualdad.

Para más información, visite www.development-finance.org y www.governmentspendingwatch.org

OXFAM

Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan juntas en más de 90 países, como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza. Para más información, escriba a cualquiera de las organizaciones o visite la página www.oxfam.org

Oxfam Alemania (www.oxfam.de)
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br)
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)
Oxfam en Bélgica (www.oxfamsol.be)
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)
Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
Oxfam IBIS (Dinamarca) (<https://oxfamibis.dk/>)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Miembro observador: KEDV (Oxfam Turquía)

Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org)
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org)
Oxfam México (www.oxfammexico.org)
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Novib (Países Bajos) (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)
Oxfam Sudáfrica (www.oxfam.org.za)